

# Territorios en transición

Análisis de las condiciones de la  
conflictividad territorial y socioambiental  
en el Norte de La Paz



## Fundación TIERRA, 2022

Se autoriza la reproducción parcial o total y la difusión sin fines de lucro del presente documento, siempre y cuando se cite debidamente la fuente. Esta publicación también está disponible en formato electrónico (PDF) en el sitio web institucional [www.ftierra.org](http://www.ftierra.org)

### Sistematización:

Suzanne Kruyt

### Apoyo de investigación, edición y diagramación:

Martha Irene Mamani

Rudy Idiaquez R.

### Agradecimientos:

Este documento ha sido posible gracias al apoyo a las organizaciones indígenas  
Consejo Indígena de Mujeres Tacana - CIMTA  
Consejo Indígena del Pueblo Tacana -CIPTA

### Fotografías:

Fundación TIERRA

Esta publicación fue elaborada por TIERRA, con el apoyo de Cooperación Alemana a través de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y su Programa Servicio Civil para la Paz.

Las ideas vertidas en el texto son responsabilidad exclusiva del autor y no comprometen la línea institucional de la GIZ.



Implementada por:



Oficina Nacional y Regional Altiplano  
Calle Hermanos Manchego N° 2566  
La Paz - Bolivia  
Telf.: (591) 2 243 2263  
Fax: (591) 2 211 1216  
Email: [tierra@ftierra.org](mailto:tierra@ftierra.org)  
Sitio Web: [www.ftierra.org](http://www.ftierra.org)

Oficina Regional Oriente  
Calle Mato Grosso N° 2302  
Tel./Fax: (591-3) 347 4635  
Oficina Regional Valles  
Calle Perú N° 100  
Telf./Fax: (591-3) 642 1332

# CONTENIDO

	Siglas y acrónimos .....	5
	Introducción .....	7
<b>1</b>	<b>Provincia Abel Iturralde: ¿el ansiado polo de desarrollo de La Paz? .....</b>	<b>15</b>
	1.1 Las tierras amazónicas: entre codicia e ilusiones .....	16
	1.2 Apertura de caminos para la extracción .....	25
<b>2</b>	<b>Visiones y modelos de desarrollo bajo presión: la conflictividad socioambiental y territorial actual .....</b>	<b>31</b>
	2.1 Visiones de desarrollo de los actores .....	31
	2.2 Modelos de desarrollo local bajo amenaza .....	40
	2.3 Conflictividad territorial y socioambiental: casos y tendencias .....	44
	<i>Caso 1. Tierras de ex-PROINSA: la manzana de la discordia .....</i>	<i>45</i>
	<i>Caso 2. La Empresa Azucarera: afectaciones, ilusiones y transformaciones...</i>	<i>54</i>
	2.4 Transformación territorial y nuevos escenarios de conflictividad .....	68
<b>3</b>	<b>Transformaciones de convivencia, poder e identidad entre el pueblo tacana y el sector intercultural .....</b>	<b>71</b>
	3.1 Tacanas e interculturales: escenarios paralelos de conflictividad y convivencia	71
	3.2 Las asimetrías de poder y la erosión de la gestión territorial local.....	86
	3.3 Nuevas generaciones, nuevos desafíos .....	93
<b>4</b>	<b>Conclusiones.....</b>	<b>99</b>
	Reflexiones finales .....	105
	<b>Referencias bibliográficas .....</b>	<b>107</b>

# CONTENIDO

## Lista de cuadros

Cuadro 1: Modalidades legales de extracción de madera .....	24
Cuadro 2: Producción de EASBA por año .....	55
Cuadro 3: Deforestación en EASBA y sus inmediaciones .....	55

## Lista de gráficos

Gráfico 1: Triángulo de la conflictividad socioambiental .....	8
Gráfico 2: Tipos de conflictividad socioambiental en la Prov. Abel Iturralde .....	45
Gráfico 3: Plantación de caña por tipo de actor .....	61
Gráfico 4: Transformaciones en el uso de la tierra. ....	69

## Lista de mapas

Mapa 1: Actores territoriales y propiedad de la tierra en la Prov. Abel Iturralde ...	10
Mapa 2: Tipos de propiedad en el municipios de San Buenaventura .....	20
Mapa 3: Tipos de propiedad en los municipios de Ixiamas .....	21
Mapa 4: Usos de los recursos naturales en la provincia Abel Iturralde . ....	22
Mapa 5: Proyectos de infraestructura vial .....	27
Mapa 6: Ex concesiones forestales .....	46
Mapa 7: Avance de deforestación EASBA en 10 años.....	56

# SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ABT	Autoridad de Bosques y Tierra
ASL	Asociaciones Sociales del Lugar
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BM	Banco Mundial
CEDIB	Centro de Documentación e Información Bolivia
CIDOB	Confederación Indígena del Oriente Boliviano
CIMTA	Consejo Indígena de las Mujeres Tacana
CIPTA	Consejo Indígena del Pueblo Tacana
CITRMD	Central Indígena de Comunidades Tacana II del Río Madre de Dios
COB	Central Obrera Boliviana
COMIBOL	Corporación Minera de Bolivia
CORDEPAZ	Corporación de Desarrollo del Departamento de La Paz).
CPE	Constitución Política del Estado
CPILAP	Central de Pueblos Indígenas de La Paz
CSCIB	Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia
CSUTCB	Confederación Sindical Única de Trabajadores
CSUTCB-TK	Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia Tupak Katari
EASBA	Empresa Estatal Azucarera San Buenaventura
FESMAI	Federación Sindical de Mujeres de la Abel Iturralde
FESPAI	Federación Sindical de Productores Agropecuarios de la Provincia Abel Iturralde
FPUCIOC-AI-TK	Federación Provincial Única de Comunidades Indígenas, Originarias, Campesinas Abel Iturralde- Túpac Katari
FUTOOC-PAI	Federación Única de Trabajadores Originarios Campesinos de la Prov. Abel Iturralde
FSTMB	Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
IIRSA I	Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana
INRA	Instituto Nacional de Reforma Agraria
MAS	Movimiento al Socialismo

# SIGLAS Y ACRÓNIMOS

OFC	Organizaciones Forestales Comunitarias
ONG	Organización No Gubernamental
ONU	Organización de Naciones Unidas
OTB	Organizaciones Territoriales de Base
PGMF	Planes Generales de Manejo Forestal
PGIBT	Plan de Gestión Integral de Bosques y Tierra
POAF	Planes Operativos Anuales Forestales
SERNAP	Servicio Nacional de Áreas Protegidas
TCO	Tierras Comunitarias de Origen
TIPNIS	Territorio Indígena y Parque Nacional Isibor-Sécure
YPFB	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

# INTRODUCCIÓN

La región del Norte de La Paz es una nueva área de expansión del extractivismo agrario y de implementación de megaproyectos en la amazonía boliviana. La visión estatal desarrollista del norte amazónico resurge con fuerza, así como las iniciativas económicas privadas en torno a la sobreexplotación y el acaparamiento de los recursos naturales. La tierra es una de las riquezas más pretendidas en la región y atrae a múltiples actores con intereses centrados principalmente, en encontrar un futuro económico promisorio. Asimismo, la conflictividad sobre otros recursos como la madera, los minerales y el agua se intensifican debido a la inserción de nuevos actores que se desenvuelven desde visiones de desarrollo e intereses muy divergentes.

Si bien esta lucha por el acceso a la tierra y a los recursos naturales ya se registraba desde el siglo pasado, las nuevas aspiraciones y disputas por el acceso y control de los recursos están reconfigurando las dinámicas poblacionales, económicas y socioculturales en la provincia, y son estos cambios que se constituyen en ‘hilos rojos o conductores’ para la mayor emergencia y la exacerbación de la conflictividad socioambiental en la región.

Bajo este contexto, el presente estudio busca entender las dinámicas de la conflictividad socioambiental, a partir de las recientes transformaciones territoriales y la reconfiguración de las relaciones interculturales entre la población indígena y las comunidades de colonizadores de la provincia Abel Iturralde del Norte de La Paz. Para comprender estas dinámicas se trabaja en torno a dos preguntas centrales:

## Enfoque metodológico

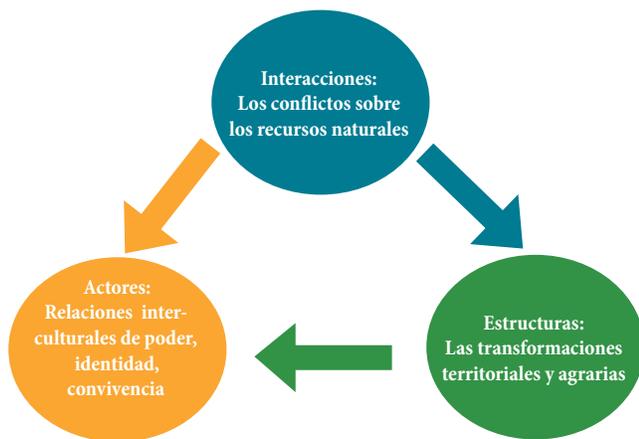
¿Cómo influyen las **transformaciones territoriales y agrarias** actuales, impulsadas, entre otras, por el avance del modelo extractivista, en la conflictividad socioambiental y viceversa?

¿Cómo cambian las **relaciones interculturales de poder, identidad y convivencia** local en el marco de esta conflictividad socioambiental?



Para responder estas preguntas se utilizaron diferentes instrumentos metodológicos. Una herramienta útil que se ha desarrollado en los estudios sobre los conflictos socioambientales es el triángulo de Galtung que identifica tres elementos: las actitudes, los comportamientos y el contexto como dimensiones complementarias e interconectadas de los conflictos. Esta técnica fue adaptada con base en la propuesta de Salman et. al (2018), en vista de contar con un marco de referencia que nos permita ampliar el análisis a los actores vinculados, así como a las interacciones y estructuras.

**Gráfico 1.**  
**Triángulo de la conflictividad socioambiental**



Fuente: Elaboración propia con base en Salman et al., 2018.

El análisis interrelacionado de estos tres niveles de la conflictividad socioambiental permitirá entender la complejidad y la dinamicidad de la problemática en cuestión, considerando que el Norte de La Paz es una región en permanente transición. Por lo tanto, el documento explora tendencias, transiciones, presiones, contradicciones y desafíos, sin pretender presentar conclusiones definitivas.

Se limitó el ámbito geográfico a la provincia Abel Iturralde, que comprende los municipios de Ixiamas y San Buenaventura. Dentro de esta provincia se priorizó la interacción entre

la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tacana I y las comunidades interculturales, como dos actores centrales de la región.

La recolección de información consistió en la revisión de documentos y el trabajo de campo: entrevistas, grupos focales y observación participante, durante los años 2018, 2019 y 2020. Con base en un enfoque etnográfico, este texto privilegia los testimonios y las voces de los actores involucrados. En ese sentido, se ha decidido mantener en el anonimato a algunas personas entrevistadas a fin de resguardar su seguridad.

El texto está estructurado en cuatro secciones. El primer capítulo introduce al contexto de la provincia Abel Iturralde, desde una mirada histórica y actualizada en relación con el uso de la tierra y los recursos naturales. El siguiente capítulo presenta las visiones de desarrollo en disputa y dos casos de mayor conflictividad actual, donde se identifican las tendencias comunes. En el tercer capítulo se analiza con más profundidad, a dos actores centrales: el pueblo tacana y las comunidades interculturales en relación a sus dinámicas de interacción en el contexto actual de conflictividad socio ambiental. Se cerró el análisis con algunas conclusiones y posibles líneas de acción para el futuro.

### **Amazonía bajo disputa transnacional**

La región amazónica en Bolivia está marcada por su localización fronteriza ubicada en los límites con Perú y Brasil. Este factor le asigna un tratamiento geopolítico especial, que en la práctica se refleja en las disputas entre poderes transnacionales por el control de los recursos naturales como el oro y la madera. Es importante comprender que los conflictos socioambientales en la región trascienden la frontera Estado-Nación. La Amazonía a nivel global, es percibida como una región periférica proveedora de recursos al servicio de economías externas. Actualmente, la creciente preocupación

mundial sobre la crisis climática está generando nuevas presiones para “salvar la Amazonía”, plasmada en intentos internacionales para garantizar medidas de protección y control. A la vez, las potencias internacionales con poder económico fuerte, como Brasil, Estados Unidos y cada vez más visible, China; conducen sus propias agendas guiadas por sus intereses geopolíticos en la región (Porto-Gonzalves, 2018). De ahí, que la conflictividad en torno a los recursos naturales de la Amazonía boliviana tiene relación directa con los escenarios internacionales de política y comercio.

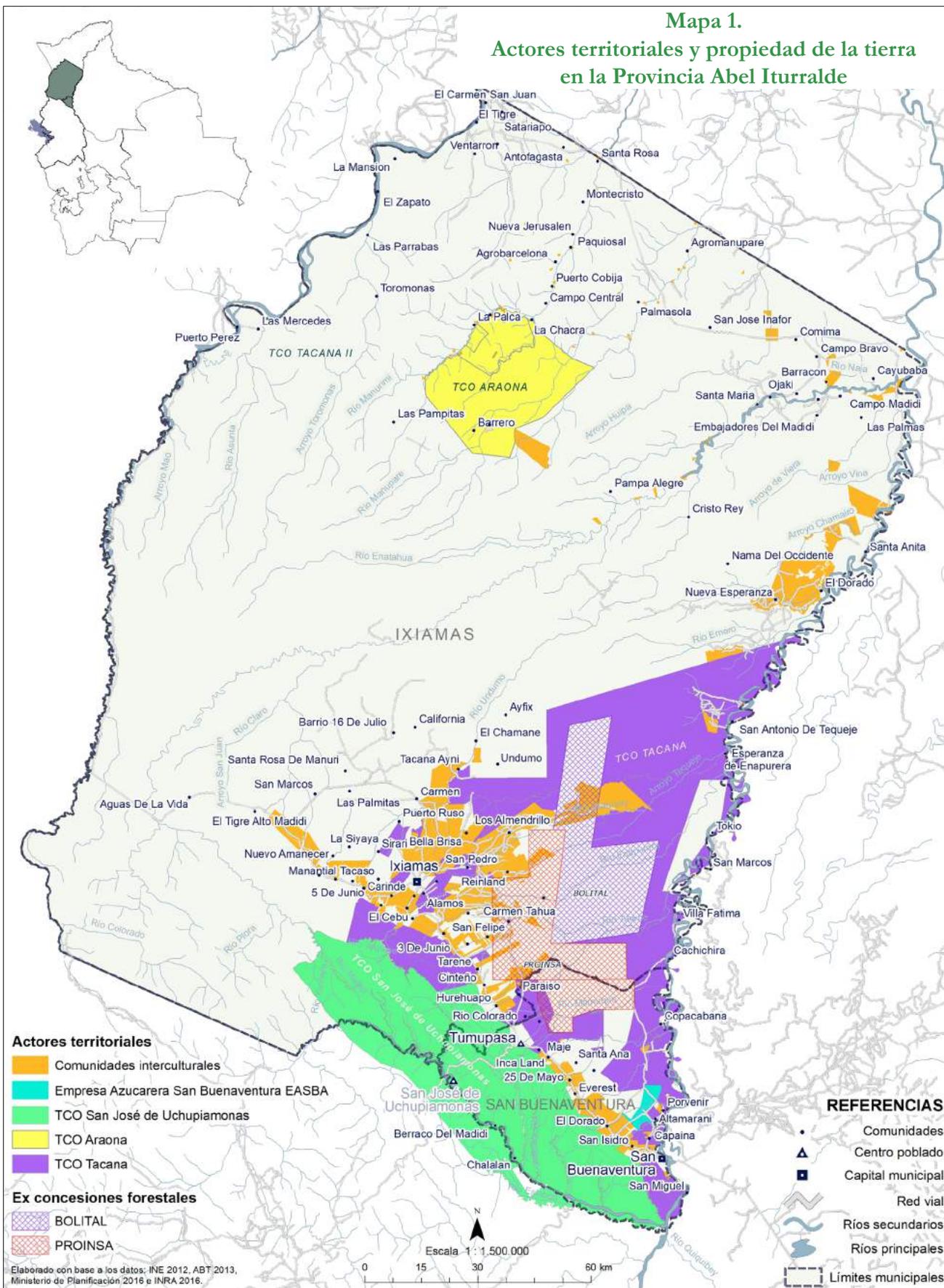
Por ejemplo, la presencia de empresas transnacionales de agronegocio y la extracción de minerales e hidrocarburos promueven la explotación y deforestación acelerada de los bosques amazónicos. Los gobiernos nacionales, sin importar si mantienen un discurso de la izquierda o derecha, promueven esta acelerada explotación, proclamando el derecho al desarrollo económico de sus países. Megaproyectos como IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, luego rebautizada como COSIPLAN) y las megarepresas hidroeléctricas,

son la cara visible de la consolidación del extractivismo en esta región. Estos proyectos guiados por intereses económicos muy grandes suelen desarrollarse al margen de la decisión de los actores locales y en muchos casos, secundan un escenario de vulneración de los derechos de la población afectada.

Bolivia no es la excepción a esta realidad neoextractivista. A pesar de que se ha manifestado un proyecto político de reposicionar al Estado como actor central en la economía y en el cuidado de la Madre Tierra, en la práctica, se ha dado continuidad a la extracción de recursos bajo una lógica similar a los gobiernos liberales, valiéndose de discursos populares como el bienestar social y la distribución de la riqueza. Hoy en el país, la dependencia de las materias primas y sus formas de acumulación, apropiación, degradación ambiental y desarticulación social y sectorial con el resto de la economía sigue vigente. Además, se ha generado una mayor expansión de la frontera agrícola, beneficiando a las élites del agronegocio (Mc Kay, 2018, págs. 187-190).



**Mapa 1.**  
**Actores territoriales y propiedad de la tierra**  
**en la Provincia Abel Iturralde**



## MAPA DE ACTORES

El mapa 1 muestra la propiedad territorial actual de la provincia Abel Iturralde. En el mismo se identifican a los actores territoriales en torno a la propiedad de la tierra. Se puede constatar la existencia de al menos 3 grandes actores: comunidades interculturales, tres TCO (San José de Uchupiamonas, Araona y Tacana I) y la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA). Además, están las tierras fiscales, que en algunos casos siguen con actividades forestales, como es caso del BOLITAL y otras que están con varias demandas, como es el caso PROINSA.

## DEMANDA DE TCO TACANA II

En el extremo norte de la provincia Abel Iturralde, a las orillas del río Madre de Dios, comenzó la demanda en el año 2000 y fue admitida formalmente el 2004. Sin embargo, sufrió múltiples retrasos y recién en 2012 el INRA a nivel departamental, reconoció el resultado del relevamiento de la información de campo: una superficie total de 357.427 hectáreas, con cuatro comunidades tacanas y otros 21 predios. Posteriormente, entró nuevamente en un impasse y recién en 2020 el INRA inició un proceso de saneamiento. La CITRMD (Central Indígena de Comunidades Tacana II del Río Madre de Dios) es la organización que representa las 4 comunidades Tacana en este territorio con aproximadamente 800 habitantes. El acceso a este territorio es por el departamento de Pando, mediante el río. Hasta el momento no existe camino desde el pueblo de Ixiamas. (TIERRA, 2019).

## TCO TACANA I

CIPTA (Consejo Indígena del Pueblo Tacana) y CIMTA (Consejo Indígena de las Mujeres Tacana) son las organizaciones del pueblo Tacana que controlan la propiedad y la gestión de la TCO Tacana I, que logró titular un total de 389.303, 9808 ha como TCO. Representan a 20 comunidades repartidas por la provincia y una población aproximada de 3.500 personas. De acuerdo a las recomendaciones del Informe de Necesidades Espaciales, hasta la fecha, faltan titular 16.361, 0192 ha a esta población. La titulación de su territorio permitió al CIPTA, en 2001, emitir su primer Plan de Gestión Territorial 2001-2005. A pesar de los avances en la titulación de TCO Tacana I, el gran problema es que las áreas tituladas consisten en 48 polígonos de tierras marginales y la TCO queda entrecortada por las propiedades de terceros y las concesiones forestales. En el centro del territorio están las áreas fiscales y concesiones forestales, provocando dificultades en la gestión territorial. (CIPTA y CIMTA, 2014, pág. 110)

## COMUNIDADES INTERCULTURALES

En la provincia Abel Iturralde existen alrededor de **40 comunidades interculturales** (antes denominados 'colonizadores') afiliadas a la FESPAI (Federación Sindical de Productores Agropecuarios de la Provincia Abel Iturralde), que cumplió un rol importante para gestionar la titulación de las comunidades. Representa a seis centrales (Ixiamas, Alto Madidi, 16 de Julio, 2 de Agosto, Marcelo Quiroga Santa Cruz y Esperanza de Madidi). A este sector le tocó la titulación de 50 ha por familia, legalizadas de forma comunal. La primera fase de dotación de tierras a estas comunidades se realizó sobre todo en el eje de la carretera San Buenaventura-Ixiamas. La llegada de nuevas familias a la zona ha sido un proceso continuo desde el periodo de CORDEPAZ (1971-1993). La FESPAI está afiliada a la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), a nivel nacional y también incluye a la FESMAI (Federación Sindical de Mujeres Abel Iturralde).

Continúa en la siguiente página...

## MAPA DE ACTORES

Continúa de la anterior página...

### PUEBLO ARAONA

El pueblo Araona cuenta con una TCO en el Norte de la provincia. Cuenta con un Decreto Supremo de 1992 (en el gobierno de Víctor Paz Estensoro), aunque en 2003 recién terminó el saneamiento, resultando en 77.714 ha tituladas para la TCO. Es un territorio aislado con bajos niveles de deforestación, pero con amenazas por actividades hidrocarburíferas. Sólo se puede acceder a la TCO mediante avioneta desde Riberalta o con barco por el río Manupare. Los Araonas mantienen su interacción con la sociedad nacional, principalmente a través de Riberalta, Beni. En el censo de 2012 contaron 228 Araonas en la TCO.

### SAN JOSÉ DE UCHUPIAMONAS

San José de Uchupiamonas participó en la primera reunión de CIPTA en 1990, pero decidió seguir su propio camino. La comunidad que se autodefinió como Quechua-Tacana primero se tituló como comunidad campesina (23.034 ha) y luego logra la titulación como TCO con 210.000 ha que coinciden con la zona de manejo integral del parque Madidi. La comunidad cuenta con 700 personas aproximadamente. La TCO se caracteriza por un uso netamente forestal, de turismo y existe poca deforestación. Sin embargo, coincide con varios bloques petroleros que podrían afectar la TCO y últimamente está amenazada también por la presencia de la minería.

### OTROS PUEBLOS INDÍGENAS

En el municipio de Ixiamas, existen dos comunidades del pueblo Tsimané. Se trata de asentamientos de familias que migraron desde San Borja en Beni, donde su hábitat fue avasallado por actores externos. La comunidad de Eyiyoquibo, en San Buenaventura, alberga una población de alrededor 52 familias Esse Ejja. Desde el 2003 la comunidad tiene reconocimiento como un barrio bajo la forma de Organización Territorial de Base – OTB en San Buenaventura, pero no cuenta con la titulación como territorio indígena.

### LOS NO CONTACTADOS

La provincia alberga también a, por lo menos, a un pueblo indígena no contactado: los Toromonas. Son clasificados como un pueblo en aislamiento voluntario. Se cree que un escaso número de toromonas vive cerca del alto río Madidi y del río Heath. En 2006 fue creada por resolución administrativa una “reserva exclusiva e inviolable” en una porción del parque nacional Madidi para proteger a esta población. Durante las actividades de exploración sísmica hidrocarburífera en el territorio Tacana II (2016), se hallaron indicios de otro pueblo indígena que vive en aislamiento voluntario, podría ser un grupo de Araonas que decidió aislarse hace mucho tiempo.

### LA “TÚPAC“

La **Federación Provincial Única de Comunidades Indígenas, Originarias, Campesinas Abel Iturralde- Túpac Katari (FPUCIOC-AI-TK)**, comúnmente conocidos como “la Túpac” o la Única, representa a grupos de colonizadores que demandan la dotación de tierras fiscales en la región. Incursionan en actividades económicas como la exploración de petróleo. En los años 1990 y 2000 realizaron varias gestiones con los gobiernos de turno que el sector tenía la expectativa de concretar con el gobierno del MAS. Sin embargo, a pesar de la alianza política estrecha entre CSUTCB y el MAS, la federación no se logró las dotaciones de tierra. Su presencia territorial en la provincia todavía es fragmentada, por lo que no es visible en el mapa anterior, aunque se trata de un actor importante para tomar en cuenta en el análisis. Es importante señalar que no todas las nuevas comunidades de colonizadores operan bajo la consigna de la Federación “Túpac Katari”, existen otras nominaciones también.

## Conflictividad socioambiental

Se analizó los conflictos socioambientales en esta región a partir de tres elementos clave: el primero es la conflictividad, que refiere a procesos en que varios conflictos similares, con raíces comunes, se producen paralelamente. La conflictividad incluye en su mirada las relaciones económicas, políticas y socioculturales que confluyen en los casos, principalmente entre instituciones estatales, actores y sectores sociales. Implica reconocer que las causas de las desigualdades subyacen en los conflictos socioambientales y no están necesariamente localizadas en el lugar donde se manifiestan físicamente, sino en sistemas económicos, políticos y culturales multiescalares.

En consecuencia, el segundo elemento para entender los conflictos socioambientales son las relaciones y estructuras de poder que están detrás de la propiedad, el acceso y el uso de la tierra y los recursos naturales. Los conflictos surgen a la raíz de las desigualdades, dominaciones e imposiciones de algunos actores sobre los otros; sin embargo, los conflictos sociales también permiten analizar las otras caras del poder, es decir, el poder de organización, movilización y resistencia que demuestran los grupos sociales frente a las amenazas sobre sus formas de vida y las relaciones de dominación. Este poder colectivo hace que los conflictos socioambientales puedan pasar de la crisis a las transformaciones de las relaciones de poder (Rodrigues, Castañeda, Inturias, & Robledo, 2015).



## Interculturalidad y relaciones de poder

El tercer elemento relevante, que a veces tiende a ser invisibilizado por los elementos más tangibles de los conflictos, es justamente el aspecto cultural relacionado con la construcción de significados y valorizaciones colectivas. Consiste de los recursos simbólicos, como las visiones del mundo, del desarrollo y de la naturaleza. En escenarios donde diferentes visiones de desarrollo competen por imponerse, Arturo Escobar (como se citó en Rodrigues et al., 2015, pág. 39) afirma que “el poder habita en los significados y los significados son la fuente del poder”.

Las construcciones simbólicas e identitarias juegan roles importantes en la posición de las organizaciones indígenas en el Norte de La Paz. La relación con el territorio, el bosque y el agua tiene una importancia espiritual particular para los pueblos indígenas amazónicos. Actualmente esta relación se encuentra bajo acecho por los diversos procesos de apropiación sobre sus territorios (Von Stosch 2014).

Sin embargo, las identidades colectivas no son estáticas. Los procesos de autonombramiento y “atribución categorial” que definen las fronteras étnicas se configuran permanentemente en base a interacciones entre grupos, según el contexto y tiempo específico (Barth, 1974 citado en Herrera 2005: 20-22). En otras palabras, lo que significa ser “tacana” ahora no es lo mismo que en 1995, y lo que significa ser “aymara” no es lo mismo en Potosí que en Ixiamas.

En un estudio sobre las interacciones entre el pueblo Masetén y el sector colonizador también en el Norte de La Paz, Von Stosch (2014) resaltó las desigualdades de condiciones en este encuentro, donde las “dinámicas económicas, productivas y culturales de los colonizadores se imponen en la sociedad local y van borrando las fronteras culturales” (pág. 116).



Se abordó en este estudio el concepto de la interculturalidad desde un enfoque crítico, que no sólo analiza lo relacional entre actores concretos en un sentido funcional, sino incluye en el análisis las asimetrías y dominaciones concretas en las sociedades que posicionan a ciertos actores, conocimientos y visiones como superiores y deslegitiman otros (Rodríguez et al. 2015) (Walsch, 2012).

Sin embargo, se buscó superar una mirada binaria de esta interacción intercultural en la región, en la misma línea que proponen Laetitia Perrier Bruslé y Berta Gocálvez (2014):

“¿Las categorías que siempre se usaban para describir el contexto social tenían un sentido en la realidad del terreno –sabiendo las presiones fuertes que llegaban del exterior–? Por ejemplo, la oposición caricatural entre las comunidades interculturales y los grupos indígenas parecía poco pertinente, a pesar de ser constantemente presentada como una categoría casi ontológica”

(Perrier Bruslé & Gocálvez, 2014, pág. 26)

Así, se sostiene que, para analizar la conflictividad en el Norte de La Paz, es necesario generar entendimientos más precisos y menos esquemáticos de los diferentes actores y de los orígenes de sus posiciones, avances y resistencias. En el primer capítulo se presenta el recorrido de los procesos históricos que llevaron a la situación actual de la tierra y los recursos naturales en la provincia Abel Iturralde.

# 1 PROVINCIA ABEL ITURRALDE: ¿EL ANSIADO POLO DE DESARROLLO DE LA PAZ?

“En los años 70 se colocó un muro para que no crezca La Paz hacia el norte, nosotros hemos puesto un puente y hemos abierto la puerta para el Norte de La Paz. (...) Yo pido a los paceños, defiendan su desarrollo, porque con desarrollo económico hay también desarrollo social”

Ex Vicepresidente Álvaro García Linera  
(Sanchez, 2018)

Hace décadas que la provincia Abel Iturralde es objeto de grandes proyecciones desde los diferentes gobiernos de turno. Debido a su abundancia de tierra y recursos naturales, la región se ha posicionado frecuentemente como el “nuevo polo de desarrollo” que daría al departamento de La Paz una opción de igualar el peso económico del departamento Santa Cruz. Sin embargo, esta ambición por la explotación de los recursos naturales se encontró con diversas limitaciones y resistencias, generando un contexto complejo de esperanzas y frustraciones. En este capítulo se ofrece una contextualización y actualización, revisando desde los datos históricos hasta el actual estado de la propiedad y el uso de la tierra y los recursos naturales. En la última sección se aborda el impulso estatal por la consolidación del extractivismo en la región.



# 1.1 LAS TIERRAS AMAZÓNICAS: ENTRE CODICIA E ILUSIONES

Las políticas de migración y colonización al Norte de La Paz, las reivindicaciones territoriales indígenas y la imposición de intereses económicos externos, son algunos elementos que han generado una disputa permanente por la propiedad, el control y el acceso a la tierra en la provincia Abel Iturralde, y que se revisó en esta sección.

En el transcurso del siglo XIX y XX, varios pueblos indígenas terminaron asentándose en los vastos territorios de la provincia Abel Iturralde, luego de varios procesos de migración, desplazamiento, reducción y reclutamiento en misiones. Sus territorios no contaban con títulos y fueron continuamente invadidos por actores externos en búsqueda de la explotación de recursos naturales.

Fueron las bondades de la quina y luego del caucho que marcaron la importancia en el Norte de La Paz durante el siglo XIX e inicios del siglo XX, cuando se denominaba Caupolicán.



Principalmente el negocio de la goma implicó el arribo, con aval del gobierno nacional, de emprendedores bolivianos y extranjeros, quienes ocuparon tierras sin tomar en cuenta a la población nativa. Además, recurrieron al reclutamiento forzado de los indígenas como peones sirigueros. Causaron la dispersión de la población tacana hasta regiones alejadas, implicando la fractura de redes familiares extensas y el debilitamiento considerable de su identidad cultural. A la vez, frente a la creciente intromisión de actores peruanos y brasileros en la amazonía boliviana, fomentada por el interés en la goma, el Estado intentó sentar una mayor presencia. Se puede afirmar que con la quina y la goma, la región experimentó las primeras actividades extractivistas en la región (Mendieta Parada, 2014) (Lehm, 2010).<sup>1</sup>

Durante la mayor parte del siglo XX, la situación de las tierras en el Norte de La Paz se caracterizó por el desorden y la deficiente legalidad. Entre 1966 y 1986 se dotaron más de 80 propiedades privadas cubriendo casi un millón de hectáreas, beneficiando sobre todo a propietarios externos que se beneficiaban de alianzas políticas con los gobiernos de turno (CIPTA y CIMTA, 2014, págs. 5-6).<sup>2</sup>

1 Es importante notar que entre los años 1830 y 1860 la quina fue el único producto de exportación de la nueva República de Bolivia y la goma fue junto con la plata y el estaño, el principal sostén de la economía boliviana desde 1880 hasta 1920 (Mendieta Parada, 2014).

2 “El tamaño promedio de estas propiedades alcanzaba las 10.000 ha con un tamaño mínimo de 5 ha y una máxima de 88.000 ha (Bilbao la Vieja, 1987). Se trataba de grandes extensiones de tierra que, al influjo de las políticas que pretendían hacer del norte paceño un polo de desarrollo, habían favorecido a personas que no habitaban en la región. La superficie global de 869.233,67 ha para las 86 propiedades sugiere la existencia de defectos en la mensura que caracterizaron a los procesos agrarios anteriores a la Intervención de 1993, presentándose superposiciones entre las propiedades”. Por ejemplo, en el municipio de San Buenaventura, cinco propietarios, calificados como “empresas agrícolas” controlaron el 85% de la tierra titulada. Estas fueron revertidas en su mayoría en 1992 con la intervención del al Instituto Nacional de Colonización y la Oficina del Instituto de la Reforma Agraria.

Esta fue la situación hasta 1971, cuando el Estado boliviano empezó a impulsar la migración andina a la zona con la creación de CORDEPAZ (Corporación de Desarrollo del Departamento de La Paz). El programa estatal buscaba promover la migración de diez mil agricultores de las zonas andinas, con el compromiso de dotarles tierras fiscales y convertir la región en un polo de desarrollo nacional a través de tres proyectos: la empresa estatal azucarera, la represa hidroeléctrica en el Bala y la exploración y explotación hidrocarburífera.

Ninguno de estos proyectos estatales se concretó en esa época, pero la apertura del camino de San Buenaventura a Ixiamas (a partir de 1976) abrió las puertas a múltiples actores para su la incursión en la provincia Abel Iturralde. La mayoría de las familias colonizadoras campesinas arribaron por su cuenta y se asentaron en pequeñas comunidades en las cercanías de la carretera para implementar una agricultura campesina familiar orientada al mercado. Ninguno de sus asentamientos recibió títulos en este primer periodo de colonización (Perrier Bruslé y Goçálvez, 2014).

En los años 1980, la llegada de nuevos actores continuó y por lo tanto la presión por la tierra se volvió más conflictiva. La distribución desigual de las tierras se agravó porque el Estado hizo dotaciones de grandes concesiones forestales a empresas madereras externas de la región. Este hecho motivó la defensa de las comunidades por la titulación de su territorio.

“El pueblo Tacana en sí, para consolidar su territorio, bueno hemos tenido que organizarnos, porque estábamos siendo avasallados por empresas madereras por grandes concesiones en principio. Y los recursos naturales iban saliendo por nuestra vista”

(Dirigente CIPTA, septiembre 2019)



En 1996 se aprobó la nueva Ley Forestal N° 1700, que incorpora el reconocimiento legal de actores locales, principalmente comunidades campesinas e indígenas, en el aprovechamiento forestal, combinado con nuevos mecanismos de fiscalización y captura de regalías para el Estado (Cano, van de Rijt, De Jong, & Pacheco, 2015, págs. 3,8,9).

La nueva normativa forestal coincidió con varias iniciativas y medidas de conservación forestal, impulsadas tanto por gobiernos como por la cooperación internacional y ONGs. En ese periodo se dieron dos acciones importantes de conservación:

1. La declaración de toda la provincia Abel Iturralde como Reserva de Inmovilización Forestal (DS.23022) en 1991, que señala que “queda prohibida toda otorgación o concesión de tierras con fines agropecuarios o colonización, en las áreas clasificadas por el presente decreto supremo” (Artículo 5). La inmovilización jamás funcionó efectivamente (Ribera Arismendi, 2011) y en 2012 y 2018 esta prohibición fue levantada en varias partes de la provincia, entre otras razones para facilitar la producción de caña.

1. La creación del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi en 1995 (D.S. 24123) en las provincias de Abel Iturralde, Franz Tamayo y Bautista Saavedra. El Parque Madidi es más importante en cuanto a la biodiversidad del país y tiene una superficie de 1.895.740 hectáreas. Es manejado por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP).

Paralelamente, la Ley de Participación Popular de 1994 contribuyó a la gestión participativa de los recursos naturales en la región, con un fuerte impulso de la cooperación internacional y las ONGs. Estos actores asistieron a los pueblos indígenas en sus esfuerzos para ser propietarios de sus tierras, porque consideraron que la titulación colectiva indígena era una herramienta crucial para la gestión sostenible de los recursos naturales.<sup>3</sup>

### Proceso de titulación y tenencia de la tierra

En los años 1990, a partir de la Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad empezaron en Bolivia las demandas de las comunidades y pueblos indígenas para el reconocimiento de los territorios ancestrales. Sus reivindicaciones fundamentales insertaron una nueva forma de conceptualizar la tierra y el territorio en la legislación nacional que ha confluído en procesos de saneamiento y titulación.

En el Norte de La Paz, estas reivindicaciones resultaron en la creación de siete Territorios Comunitarios de Origen (TCO), de los cuales tres se encuentran en la provincia Abel Iturralde: TCO Araona, TCO Tacana I y TCO San José de Uchupiamonas.

---

3 En el Norte de La Paz, las principales ONG's fueron: Wildlife Conservation Society, Conservación Internacional, Care y Veterinarios sin Fronteras, también estaban agencias de cooperación como DED, Danida, PNUD. (Perrier Bruslé & Gozávez, 2014, pág. 59)

En el caso de la TCO Tacana, el Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA) presentó una demanda territorial sobre 769.000 hectáreas de tierra en 1997. Dos años después el INRA inició un proceso de saneamiento en la zona,<sup>4</sup> pero sobre una superficie de 549.464,83 ha. debido a la existencia de dos resoluciones de saneamiento en el área, realizadas con anterioridad. De esta manera, a la demanda inicial le fueron restadas 220.428 ha. En el mismo proceso también se dio el saneamiento y la titulación de tierras en favor de las comunidades de colonizadores, organizadas en la Federación Sindical de Productores Agropecuarios de la Provincia Abel Iturralde (FESPAI). La cantidad de tierra que ocupan estas comunidades es menor que la de las TCO, pero en su mayoría están ubicadas en lugares estratégicos, por ejemplo, al lado de las carreteras y en el acceso directo a los centros urbanos.

El proceso de saneamiento para ambos actores, CIPTA y FESPAI, implicó un avance significativo en la tenencia y resolución legal de la cuestión de la tierra en la zona, pero también tuvo sus momentos de intensificación de la conflictividad:

---

4 En 1999, el INRA emitió dos Resoluciones Administrativas mediante las cuales ampliaba el área de saneamiento bajo la modalidad de CAT SAN a una superficie de 958.473 ha, incluidas las 769.892,8338 ha demandadas originalmente como TCO/ Tacana. CIPTA gestionó ante el INRA que la superficie originalmente demandada como TCO de las 769.892,8338 ha, sea convertida a la modalidad de SAN TCO, lo que fue atendido por el INRA emitiendo en justicia un Auto el 26 de septiembre de 2000, quedando de 188.580,1662 ha bajo la modalidad de CAT/ SAN, mayormente, estas últimas se encuentran dentro del Área Natural de Manejo Integrado y el Parque Nacional Madidi (CIPTA y CIMTA, 2014, pág. 44).

## EJEMPLOS DE CONFLICTIVIDAD POR EL ACCESO A LA TIERRA:

- En el área demandada como TCO del pueblo Tacana estaban asentados colonizadores, en particular en las tierras alrededor de la carretera San Buenaventura-Ixiamas. Durante el proceso de saneamiento se estableció que algunos de sus predios superaron el tamaño de la pequeña propiedad, lo cual llevó a recortes. Los reclamos por estos procedimientos terminaron en protestas y actos de violencia contra el CIPTA (2000 y 2003). Como reacción, la Federación de Colonizadores promueve asentamientos ilegales en las áreas demandadas por la TCO, hecho que llevó a un proceso penal del INRA (CIPTA y WCS, 2000, pág. 48); (Wentzel, 2009, pág. 92).

- Entre el municipio de San Buenaventura y CIPTA surgieron conflictos sobre la superposición de la demanda de TCO con el área de crecimiento urbano. Al final CIPTA accedió a la demanda del municipio y concedió una parte que incluía la comunidad Caigene al municipio.

Además, se intensificaron los conflictos relacionados con el uso de la tierra y los demás recursos naturales como la fauna silvestre, la madera y los peces. La mayoría de estos conflictos estaban vinculados con intromisión a territorios ajenos. Por ejemplo, CIPTA denunciaba la presencia de “los terceros” (colonizadores, pobladores de centros urbanos, empresas madereras o “pirateros” de madera), en sus territorios.

En suma, fue una época conflictiva con matices caóticos y violentos, pero también motivó a la capacidad de resolución entre los actores locales como estrategia necesaria frente a la ausencia de respuestas del Estado nacional.

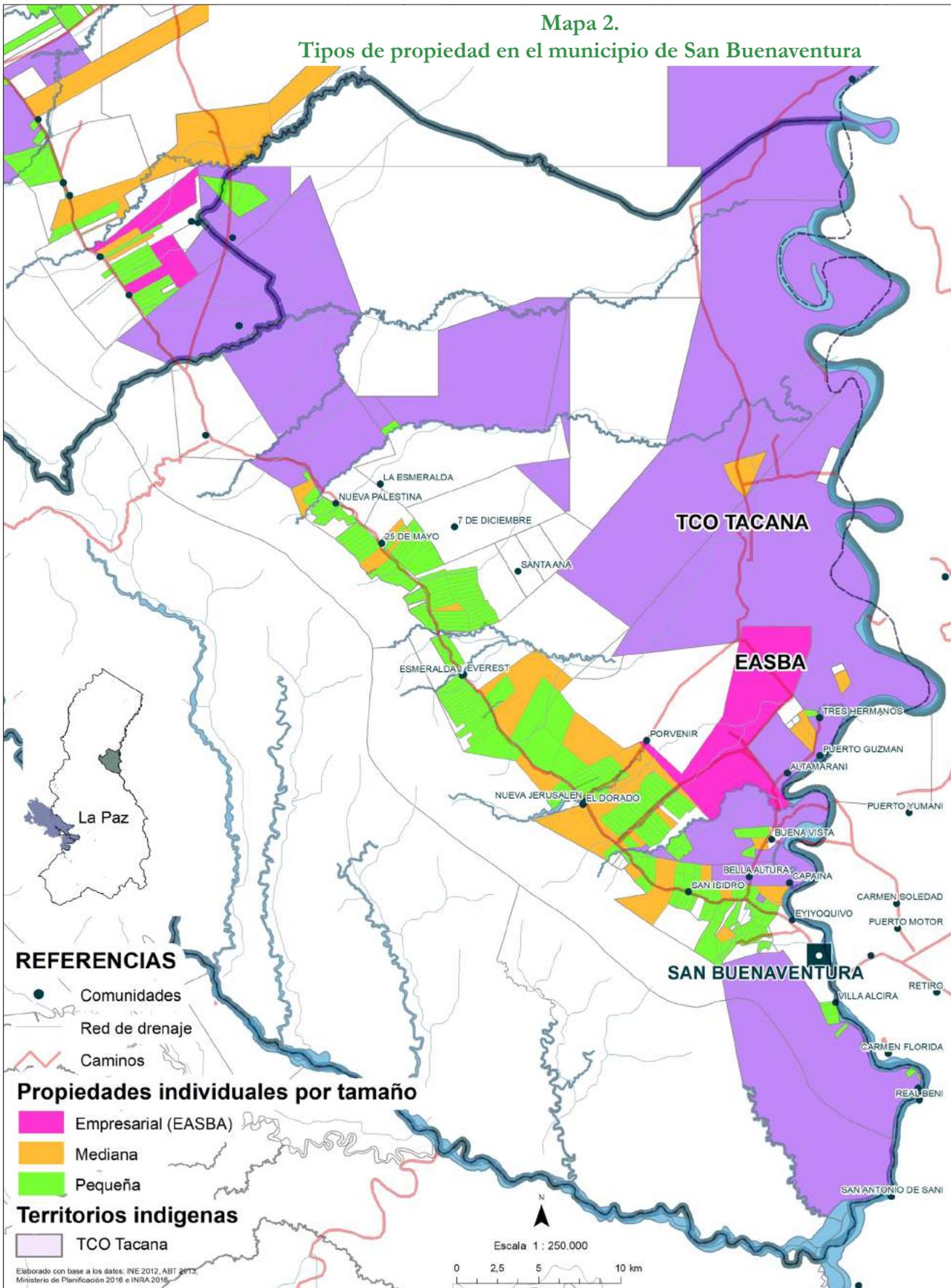
Por ejemplo, en el año 2001 se logró firmar un primer acuerdo entre FESPAI y CIPTA para unir fuerzas en sus demandas hacia el INRA (Wentzel, 2009, pág. 92); (FESPAI, 2004, pág. 26). También fue en este periodo que se consolidaron varias herramientas para la gestión y el control territorial local, como planes, estatutos, reglamentos y zonificaciones territoriales.

## Uso de la tierra y otros recursos

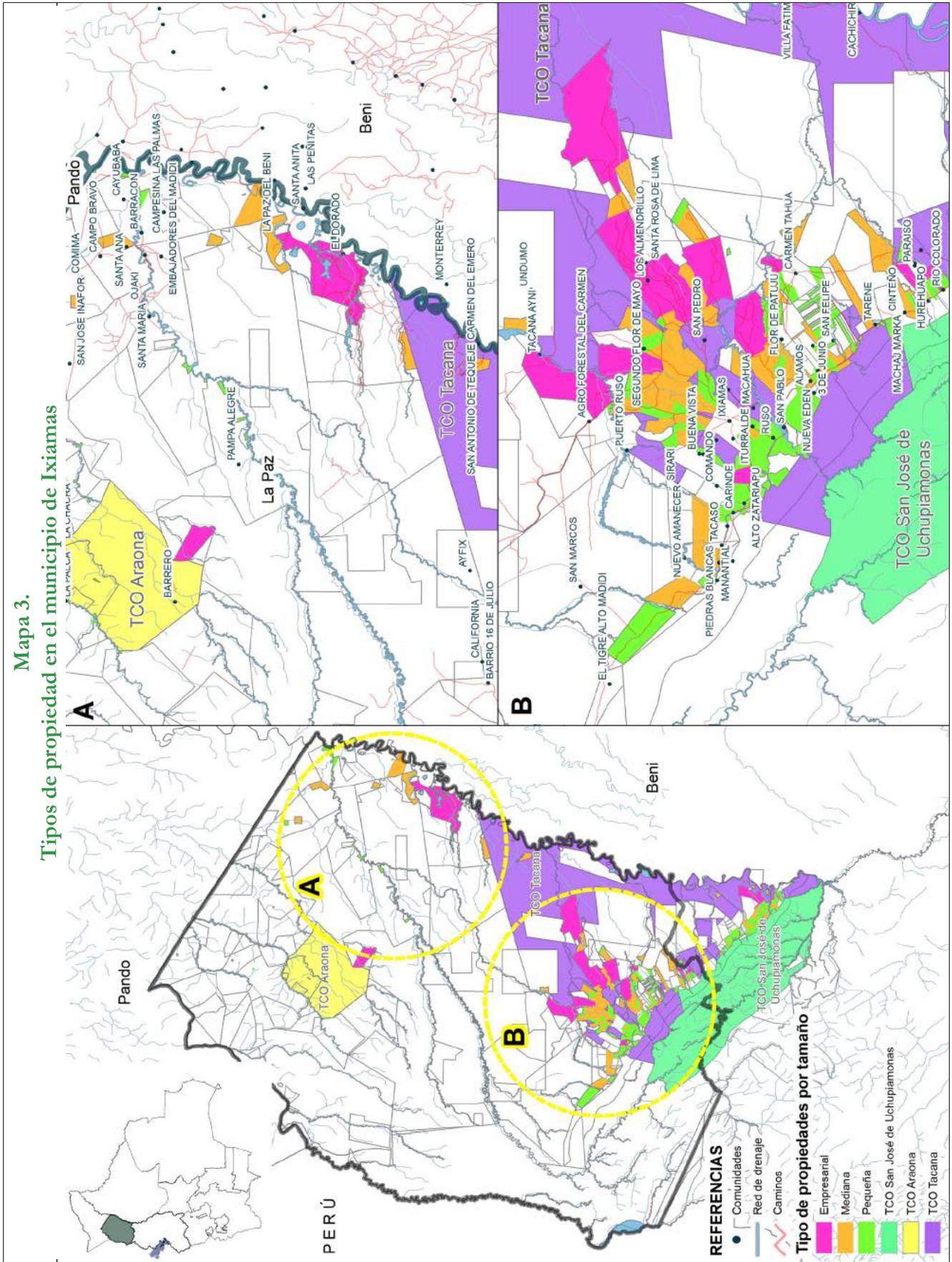
No solo la propiedad de la tierra es un elemento de conflictos en el Norte de La Paz, sino también el uso de la misma y de los demás recursos naturales como la madera. Esto ocurre sobre todo cuando hay divergencia de intereses, expectativas y necesidades de los diferentes actores involucrados. En la actualidad, existe un mosaico de tipos de propiedad y usos de los recursos naturales en la provincia Abel Iturralde.



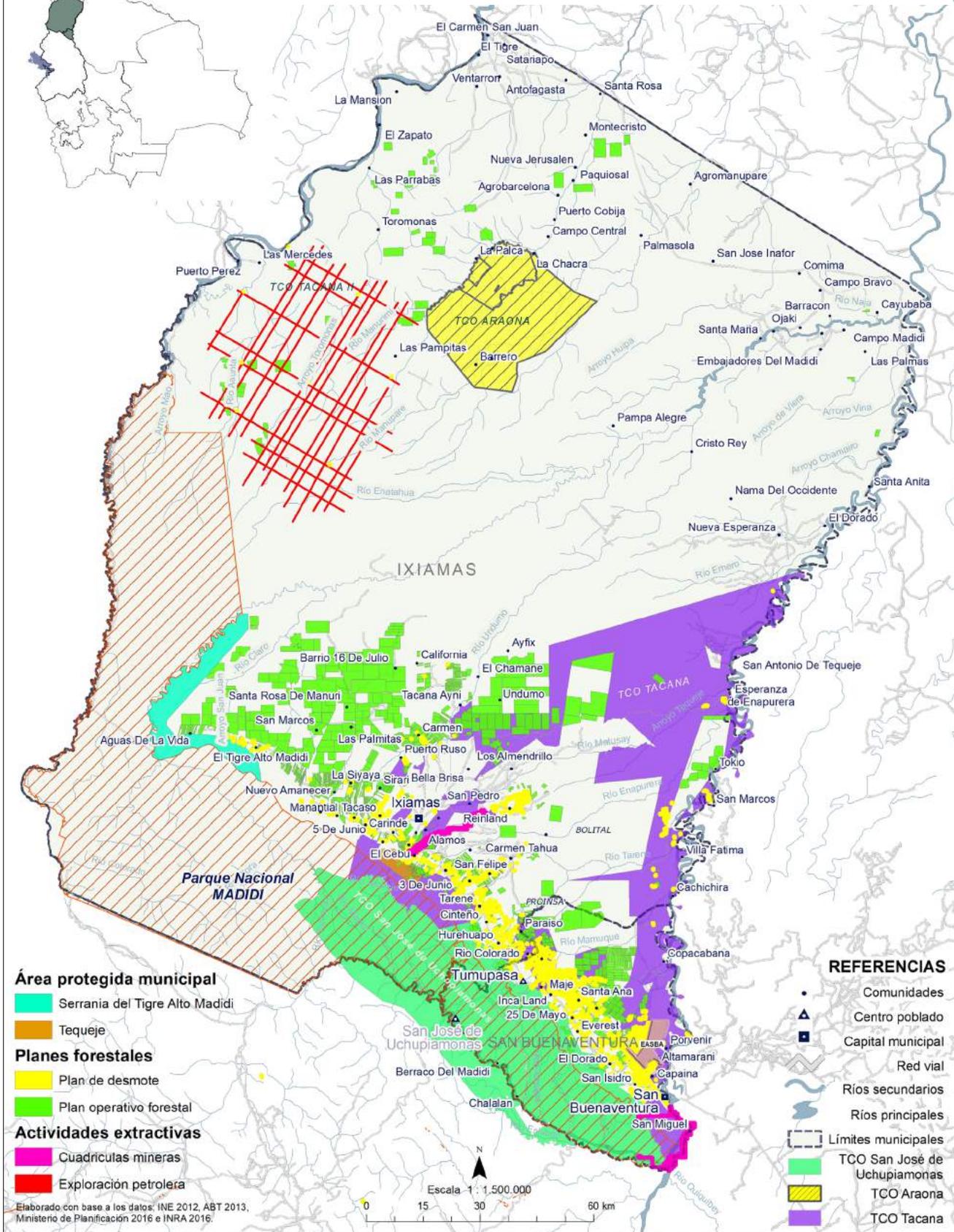
Mapa 2.  
Tipos de propiedad en el municipio de San Buenaventura



Mapa 3.  
Tipos de propiedad en el municipio de Ixiamas



**Mapa 4.**  
**Usos de los recursos naturales**



## MAPA DE USO DE LOS RECURSOS NATURALES

### COOPERATIVAS MINERAS

En los dos grandes ríos que marcan las fronteras de la provincia Abel Iturralde, el río Madre de Dios y el Río Beni y sus afluyentes, como el río Tequeje; operan cooperativas legales e ilegales de minería de oro. El sector cooperativo goza de mucha influencia política. Esto resulta en exigencias de reducción de impuestos, escaso control sobre sus actividades por parte de instancias estatales y políticas que promueven la ampliación de sus áreas de acción. En los últimos años aumentó notoriamente esta actividad en la provincia.

### EXPLORACIÓN PETROLERA

Existen varios bloques petroleros reservados y adjudicados a empresas en la provincia Abel Iturralde, el que más actividad y expectativa ha generado en los últimos años es del área reservada para la exploración y explotación hidrocarburífera “Nueva Esperanza”, sobreponiéndose al territorio Tacana II. La exploración sísmica fue ejecutada por la empresa china Asociación Accidental BGP. El estado boliviano ha anunciado nuevos pasos de exploración y explotación en la cuenca Madre de Dios pero no se han concretado todavía.

### PLANES FORESTALES

En la provincia existen varias áreas forestales, con planes de manejo forestal, se rigen por Organizaciones Forestales Comunitarias (OFC) y Asociaciones Sociales del Lugar (ASL). La extracción de madera es una de las actividades económicas más importantes para la población local, porque garantiza el ingreso de fuentes monetarias. Para comercializar la madera, las organizaciones locales dependen de los aserraderos, que son manejados por empresarios medianos de otras regiones del país. Además de la extracción legalizada con Planes de Manejo, también persiste la extracción ilegal, denominada piratería en toda la provincia.

### EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA

La Empresa Azucarera de San Buenaventura (EASBA) es un actor relativamente nuevo en la región que avanza rápidamente en su presencia territorial. Para la construcción de su Planta Industrial, la Gobernación de La Paz les cedió 4.500 hectáreas. En 2019 EASBA reportó que en total sembró 3431 hectáreas de caña en sus predios y en comunidades. Tiene la proyección de llegar en 2024 a 5000 hectáreas sembradas en predios de la empresa y 7020 hectáreas en las comunidades.

### PLANES DE DESMONTE PARA AGRICULTURA Y GANADERÍA

Los planes de desmonte son la modalidad a la que recurre sobre todo el sector de los interculturales, para realizar desmonte para la agricultura y ganadería a nivel familiar. Desde que entró en vigor la Ley 741 en 2015 la ABT (Autoridad de Bosques y Tierra) que autoriza planes de desmonte hasta 20 hectáreas con requisitos mínimos. Con el incremento de los incendios en 2019 y 2020 la ABT buscó limitar el uso del chaqueo como práctica de desmonte, lo que generó conflictos con el sector intercultural. Al mismo tiempo, están las colonias menonitas que realizan desmontes de superficies más grandes, usando tractores y otra maquinaria. Aunque que en Iximias ya había una población de rusos y menonitas previamente, desde 2013 se han asentado dos colonias menonitas grandes, mediante la compra de tierras de propietarios privados. La comunidad de Reinland San Marcos cuenta con 5071 ha (Kopp, 2015, pág. 68) sobre la otra, Villa Brisa, no hay datos oficiales. Llegaron a la región con capital para invertir en una agricultura mecanizada e intensiva y la competencia que se convirtió en uno de los factores principales en los cambios del modelo productivo y alimentario en la región

Continúa en la siguiente página...

PARQUE NACIONAL MADIDI

El Parque Nacional Madidi cuenta con una superficie total de 1.895.750 ha, de las cuales 1.271.500 ha corresponden a la categoría de parque nacional y 624.250 ha a la categoría de Área Natural de Manejo Integrado. Ocupa parte de los municipios de Ixiamas, San Buenaventura, Apolo, Pelechuco y Curva. Dentro de Madidi están establecidas 31 comunidades (9 en el área del parque y 22 en el de área natural de manejo integrado), principalmente de origen quechua y tacana. Se superpone con 4 TCO: San José de Uchupiamonas, Tacana I, Lecos de Apolo y Lecos de Larecaja, y colinda con la TCO Tacana II. Su gestión está en manos de SERNAP y existe un comité de gestión con participación de varios actores locales. La función del parque es la conservación en combinación con varios emprendimientos de turismo dentro y alrededor del parque. En Ixiamas además existen **dos áreas municipales de conservación**: Serranía de Tigre Alto Madidi y Tequeje.

A este mapa de usos, se suman los centros urbanos de San Buenaventura e Ixiamas, que están en constante crecimiento al ser receptores de población del interior del país. Los nuevos habitantes se dedican a rubros diversos como comercio, transporte (moto taxistas y minibuses), turismo y hospedaje, pero también su búsqueda de medios de vida se extiende a los recursos naturales existentes en la región, como la tierra, la extracción legal e ilegal de madera, la minería de oro y la agricultura.

Por la característica forestal, la extracción de madera es una de las actividades económicas principales en la provincia Abel Iturralde. Las diferentes formas legales están representadas en el Cuadro 1.

Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL) oficialmente son empresas forestales comunitarias, pero en la práctica son grupos sociales heterogéneos que no necesariamente viven juntos en una comunidad ni tienen un sistema de organización comunitaria. Su visión es más empresarial, cuentan con socios, miembros y empleados (Benavides, y otros, 2014, pág. 21).

Las ASL y las OFC tienen acceso a superficies grandes para la explotación de madera y tienen que entregar varios documentos a la ABT, lo cual implica la contratación de personal profesional forestal.<sup>5</sup>

5 El complejo forestal maderable en la región, en general, y en la TCO Tacana I, en particular, recibió el apoyo de CIPTA, de WCS, de los proyectos BOLFOR (en dos de sus versiones), entre otros. En la actualidad, el apoyo técnico y financiero al sector se ha reducido considerablemente. (CIPTA y CIMTA, 2014, pág. 148).

**Cuadro 1.**  
**Modalidades legales de extracción de madera**

Superficies	Tierras	Forma de organización	Herramientas
Grandes (más de 200 ha)	Fiscales	Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL)	Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF), Planes Operativos Anuales Forestales (POAF) e Informes Anuales de los Planes Operativos Forestales (IAPOAF) a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT)
	TCO	Organizaciones Forestales Comunitarias (OFC)	
Pequeño (hasta 200 ha)	Comunales	Comunidad indígena, campesina o intercultural	Plan de Gestión Integral de Bosques y Tierra – PGIBT
Muy pequeño: (hasta 20 ha)	Individuales	Individual	Planes Generales de Manejo Forestal menor a 200 ha (PGMF)

## 1.2 APERTURA DE CAMINOS PARA LA EXTRACCIÓN

Para el inicio del nuevo siglo XXI, la conflictividad en torno de los recursos naturales en el Norte de La Paz había adquirido nuevas características y formas. Se abrió paso a nuevos proyectos de explotación de recursos naturales a través de la ampliación de la infraestructura vial. Se realizaron megaobras con participación del gobierno, vinculadas a capitales nacionales y transnacionales con el objetivo de facilitar la integración física a los mercados nacionales, globales y el transporte rápido de materias primas. Bajo el argumento de promover el desarrollo nacional, el Estado Boliviano, al margen de su discurso de defensa de los derechos de la Madre Tierra, ha continuado apostando por la intensificación de este modelo extractivista en la región.

La apertura de carreteras no es nueva en la región de Norte La Paz. En 1956 se inició la construcción de la carretera San Buenaventura – Ixiamas, lo que facilitó la migración de las comunidades andinas a la zona. Esta apertura abrió el ingreso de nuevos productos agrícolas a la zona y el acceso a mercados, pero a la vez, profundizó la extracción de recursos como la madera y aceleró la deforestación.

Al inicio del siglo XXI el Estado impulsó el mejoramiento de esta carretera y la construcción de un puente sobre el río Beni llamado “Integración”. El primer proyecto se realizó con un préstamo de 109.5 millones de USD al Banco Mundial (BM).<sup>6</sup> Consciente de los riesgos del proyecto, esta entidad realizó varios estudios de evaluación de impacto ambiental

<sup>6</sup> El préstamo del Banco Mundial alcanzó 109.5 millones de USD para la carretera y el mejoramiento del aeropuerto en Rurrenabaque, y que el Estado Boliviano se comprometió con aportar 19.7 millones USD al mismo proyecto.



y demás documentos complementarios, como el Plan de Mitigación y el Plan de Pueblos Indígenas. Este último contó con un presupuesto de un millón de dólares y entre otros elementos, es un componente de monitoreo, control y protección de la TCO Tacana I<sup>7</sup>.

Sin embargo, en la fase de ejecución, la empresa española Corsán – Corviam abandonó inesperadamente la obra con menos de 25% de avance, dejándola inconclusa.<sup>8</sup> Frente a este hecho, la ABC tuvo que rescindir el contrato y las obras inconclusas pronto empezaron a deteriorarse. Actualmente la carretera sigue en estado deplorable, entre la población domina la inseguridad y la desconfianza sobre cómo y cuándo se reiniciará la obra. Tampoco se terminó de implementar el Plan de Mitigación o el Plan de Pueblos Indígenas.

La segunda megaobra controversial fue la construcción del puente que une Rurrenabaque (Beni) y San Buenaventura (La Paz), sobre el Río Beni.<sup>9</sup> Esta obra inició con un préstamo de BID; no obstante, como consecuencia de la conflictividad generada, el Estado Boliviano terminó financiando la obra desde el Tesoro General de la Nación. Desde un inicio, el puente fue objeto de varios conflictos entre los pobladores de Rurrenabaque y San Buenaventura; la población de Rurrenabaque, a pesar de estar en su mayoría de acuerdo con la construcción esta obra, rechazó la opción de construirla en la parte de “arriba” de Rurrenabaque, es decir, en la salida hacia el Parque Madidi.

7 En mayo-junio 2011 se hizo una reformulación del Plan de Pueblos Indígenas a la cabeza de CIPTA y CPILAP porque había varios puntos de desacuerdo con el plan original.

8 El contrato abarcó para el mejoramiento y asfaltado de los 113 km, incluyendo la construcción de 21 puentes. El contrato fue por 136,9 millones USD, de los cuales se anticiparon 49 millones USD a la empresa, es decir un 37% del costo total.

9 Tiene una longitud de 374 metros y 4.1 kilómetros de accesos pavimentados y costó 132,4 millones de boliviano, superando con más de 20 millones el presupuesto aprobado.

En el fondo la preocupación se basaba en la afectación al turismo. Por otro lado, los pobladores de San Buenaventura defendían el puente bajo la esperanza de tener mayores oportunidades para comercializar sus productos agrícolas. El gobierno de Evo Morales terminó imponiendo el proyecto, en la ubicación disputada y lo convirtió en un conflicto politizado, pasando por alto las autoridades locales y los procedimientos de consulta, provocando varios conflictos en escala (Robison, 2014) (Molina Carpio, 2014).

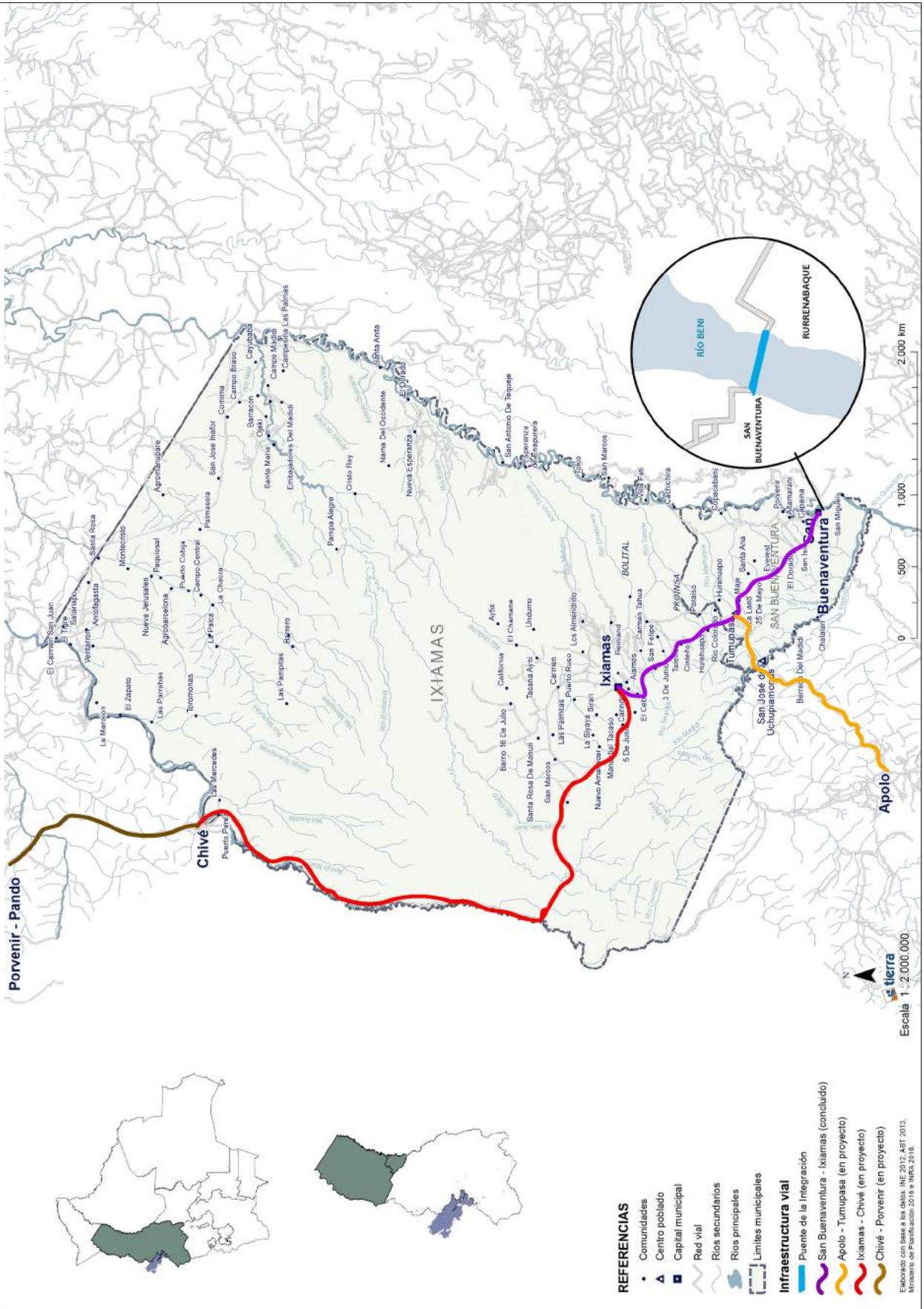
“Finalmente el Ministro Quintana habló y preguntó, “¿Compañeros por arriba o por abajo compañeros?” Flameando sus wiphalas y pancartas gritaron “Por arriba compañero”. Para el Gobierno el tema, aparentemente, se cerró ahí. En base a esa “decisión” han licitado la construcción del puente, sin ningún acuerdo legal con el municipio”  
(Robison 2014:20).

En julio 2019 Evo Morales inauguró el puente, en la ubicación río arriba, construido por la empresa china SINOPEC. Manifestó en el acto:

“Este puente hace cinco o seis años hubiéramos terminado, los hermanos de Rurrenabaque saben muy bien cómo la derecha nos ha perjudicado, cómo la derecha ha hecho escapar a los técnicos de la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras), a los técnicos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo)”  
(Robison 2014:20).

A estos dos proyectos controversiales se suma uno nuevo: la carretera de Charazani-Apolo-Tumupasa-Ixiamas-Chivé- Porvenir-Cobija. Se la considera la carretera más cara de Bolivia, con un costo de 1500 millones de USD, dinero prestado por China (Aguilar, 2016).

Mapa 5.  
Proyectos de infraestructura vial



El proyecto implica la apertura de dos nuevas carreteras en la provincia Abel Iturralde: el tramo de Apolo-Tumupasa y otro tramo Ixiamas-Chive-Filadelfia. Las comunidades Tacanas que viven a las orillas del Río Madre de Dios en el territorio demandado como TCO Tacana II, hasta ahora, uno de los territorios más aislados y conservados del país, expresaron su rechazo argumentando que la carretera significaría un aumento de la colonización de tierras y de las actividades extractivas como la minería de oro en esta parte (Luna Acavedo, 2019). Además de ello, se presenta la amenaza de pérdida irreparable de la biodiversidad, en particular de los espacios protegidos como el Parque Madidi, por donde pasaría el primer tramo y el área protegida Manuripi en el departamento de Pando.<sup>10</sup>

Existe una relación evidente entre los proyectos de infraestructura y la apertura del territorio a nuevos actores con fin de intensificar la explotación de los recursos naturales. Es bajo ese objetivo que, en la última década, el gobierno boliviano fue eliminando las restricciones legales para realizar actividades de explotación hidrocarburífera, incluso en lugares controversiales y con protección estatal como Parques Nacionales y TCOs (Decreto Supremo 2366 de 2015).

En el Norte de La Paz existen, al menos, 5 bloques reservados para explotación hidrocarburífera adjudicados a empresas. Esta exploración se sobrepone a los parques naturales y las TCOs indígenas.<sup>11</sup> Luego de un proceso fallido de exploración sísmica y con perforación en el denominado bloque Lliquimuni, a cargo de

10 El proyecto hasta 2021 no presenta avance en los tramos Apolo-Tumupasa-Ixiamas-Chivé. La última noticia sobre la carretera data de 2018, cuando salió a luz que el Ministerio de MMAA y Agua había otorgado una licencia ambiental para el tramo Ixiamas-Chivé. (Camara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, 2018)

11 Existen 5 bloques coincidiendo con el Parque Madidi y con las TCOs en su alrededor: Bloque Chepite,, Bloque Lliquimuni, Bloque Río Hondo y Bloque Tuichi Sur, Bloque Tuichi Norte (Laats, Inturias, & Clemente, 2012, pág. 86)





YPFB Petroandina<sup>12</sup>, la mirada se volcó hacia el área Madre de Dios, que según las autoridades nacionales es uno de los reservorios más importantes a nivel mundial. Dentro de esta reserva, el área reservada para la exploración y explotación hidrocarburífera “Nueva Esperanza” se superpone al territorio Tacana II. El proceso de consulta previa e implementación de la exploración sísmica generó varias tensiones entre el Estado Boliviano y el pueblo Tacana.<sup>13</sup> Los proyectos de hidroeléctricas representan otra de las transformaciones más impactantes para las regiones amazónicas en América Latina. En el Norte de La Paz, el megaproyecto de Bala-Chepete, se enmarca en esta reorganización espacial que pretende convertir Bolivia en el “corazón energético de Sudamérica”. Este megaproyecto consiste en dos megarepresas que inundarían 677 y 91 kilómetros cuadrados y fue mencionado en reiteradas oportunidades, durante la gestión del gobierno de Evo Morales, como una gran promesa de desarrollo para el Norte de La Paz. Una parte del área de inundación coincide directamente con territorios indígenas y los parques Madidi y Pílon Lajas. Varias comunidades tendrían niveles profundos de afectación (Fundación Solón, 2018).

En resumen, en las últimas décadas el Estado

12 En 2008 el gobierno creó gran expectativa sobre este bloque anunciando un potencial de 50 millones de barriles de petróleo y 1 trillón de pies cúbicos de gas. Sin embargo, en 2016 YPFB reportó de volúmenes de hidrocarburíferos “no comerciales” y el proyecto fue calificado como un fracaso (TIERRA, 2019, pág. 19). El proyecto de Lliquimuni no trajo los beneficios esperados y el proceso de consulta llevado a cabo por el Viceministerio de Hidrocarburos, en vez de generar acuerdos, provocó conflicto y división en las organizaciones indígenas (Laats, Inturías, & Clemente, 2012, págs. 86-91).

13 El proceso de consulta y negociación entre el pueblo Tacana y el Estado Bolivia sobre esta exploración, se explica en detalle en el documento de estudio “CONSULTA PREVIA” A LAS COMUNIDADES TACANAS Una experiencia agotadora en defensa del territorio Tacana II, ante la exploración hidrocarburífera “Sísmica 2D Nueva Esperanza” en el Norte de la Amazonía (TIERRA 2019) La exploración sísmica ya fue ejecutada por la empresa china Asociación Accidental BGP e implicó 1008 km de líneas sísmicas por el bosque y la entrada de más de 600 obreros externos.



Nacional ha impulsado el “desarrollo y la integración nacional” de la región a través de proyectos con grandes inversiones, generando expectativas por un lado y por el otro, creando tensiones con los actores locales.

Justamente por los efectos controversiales que tienen las carreteras y otros megaproyectos en los territorios indígenas, existe el derecho de la Consulta Previa e Informada, que tiene el objetivo de generar información completa sobre el proyecto para la población afectada, con la posibilidad de expresar de manera informada, las diferentes posiciones en cuanto al mismo; ya sean éstas positivas o incluso de rechazo.

En todo el avance de los proyectos mencionados en el Norte de La Paz, la implementación de este derecho no ha cumplido los criterios legalmente establecidos, como socializar los estudios de evaluación de impacto ambiental, respetar los usos y costumbres de las organizaciones involucradas y respetar todos los pasos necesarios.

La falta de información de las autoridades competentes sobre estos proyectos generó un clima de inseguridad y división entre actores locales, lo cual es una estrategia común en la imposición de megaproyectos. En el contexto boliviano, esta estrategia fue facilitada a través de la fragmentación politizada de las organizaciones indígenas regionales y nacionales, como la CPILAP y la CIDOB, mediante la cooptación y manipulación permanente.

Además, las deficiencias institucionales en la implementación de obras de esta envergadura pusieron frenos considerables a la ambición de convertir la provincia Abel Iturralde en el nuevo polo de desarrollo de La Paz (Laats, Inturias, & Clemente, 2012, págs. 60-61), (TIERRA, 2019), (Robison, 2014).

# 2 VISIONES Y MODELOS DE DESARROLLO BAJO PRESIÓN: LA CONFLICTIVIDAD SOCIOAMBIENTAL Y TERRITORIAL ACTUAL

En este capítulo se aborda la expansión del extractivismo agrario en la provincia Abel Iturralde. La ampliación de la frontera agrícola no solo está cambiando los modelos de desarrollo local, sino también está generando nuevas relaciones de poder, dependencia y control territorial entre el pueblo Tacana y el sector intercultural. Estas transformaciones generan nuevos escenarios de conflictividad socioambiental y territorial en la región, centrada alrededor de las tierras fiscales, los recursos naturales y la producción agraria.

En la primera sección se presentan las visiones de desarrollo de los actores principales. Luego se expone el análisis de dos ejes de conflictividad actual en el marco de las presiones territoriales. Finalmente, se observan las tendencias comunes en cuanto a esta conflictividad y la transformación territorial.

## 2.1 VISIONES DE DESARROLLO DE LOS ACTORES

Las visiones de desarrollo del pueblo Tacana y del sector intercultural no son estáticas, ni están libres de elementos paradójicos. Ocurre una interacción y sobreposición dinámica entre aspectos discursivos y prácticos cuando por un lado se reafirman reivindicaciones históricas e identitarias, pero a su vez, se ingresa a un escenario de “encantamiento” con las promesas de otros modelos de desarrollo.



## Pueblo Tacana

El discurso oficial sobre la visión de desarrollo del CIPTA se ve plasmado en su Plan de Gestión Territorial Indígena, que define como objetivo general:

“Una TCO fortalecida y unida, manteniendo y fortaleciendo nuestra sociedad y cultura tacana para nuestras futuras generaciones, con base en el respeto y la valoración de los saberes y conocimientos de nuestros taitas y mamas, produciendo alimentos para nuestras familias y conservando la fauna y todos los recursos naturales que en ella existen; con comunidades bien organizadas y fortalecidas, que respetan los acuerdos y normas internas de la comunidad y de la TCO; y con una buena coordinación y unión con sus dirigentes. (...)”. Taller de construcción del objetivo general del PGTI del Pueblo Tacana. Tumupasa, 21 de mayo de 2014 (CIPTA y CIMTA, 2014).

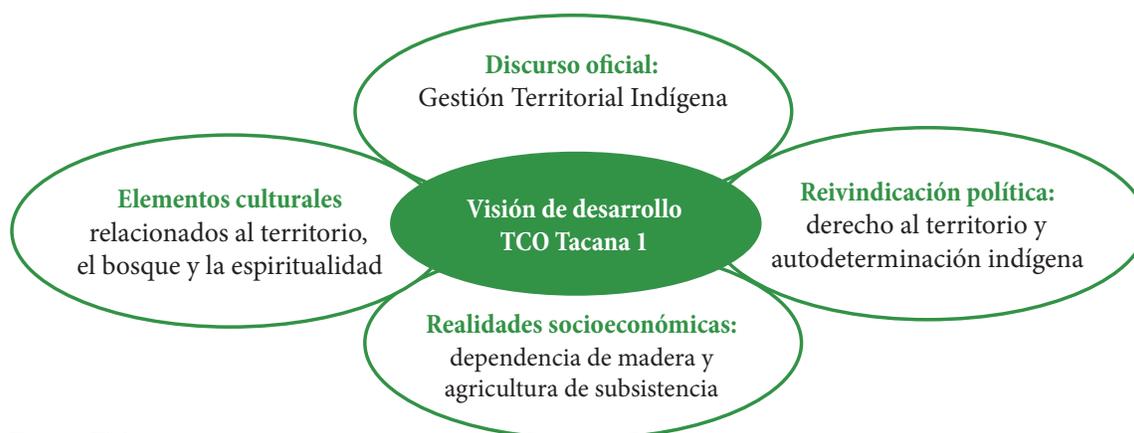
El Plan desarrolla varias estrategias como la gestión de riesgos, la consolidación territorial la organización, la salud y la educación. La gestión territorial indígena para CIPTA consiste en un aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque, incluyendo la madera, la flora y fauna y el turismo. Con esta proyección han permitido

movilizar proyectos de apoyo de la cooperación internacional, en las décadas 1990 y 2000.

La reivindicación política detrás de la gestión territorial indígena es **la autodeterminación territorial y cultural indígena**, que es una reivindicación articulada a la de otros pueblos indígenas de las tierras bajas, con los que se articulan en la CIDOB.

El CIPTA ha contribuido en los modelos de gestión y administración propia de sus recursos naturales del territorio, para una autonomía Indígena en la propuesta de la nueva constitución. [...] un modelo de gestión territorial en proceso de desarrollo, [...] con el apoyo de sus líderes y sus comunidades, buscando consolidarse cada vez más en una actividad productiva de emprendimientos comunitarios empresariales. CIPTA 2008: 14 citada en (Wentzel, 2009).

Mientras no se logre el cumplimiento completo de la demanda territorial de CIPTA, este objetivo político del derecho al territorio seguirá como prioridad en su agenda. Existe una relación estrecha entre el proceso de autoidentificación tacana y la lucha por el reconocimiento legal de sus territorios que les convertía en sujetos específicos de derecho (Herrera, 2005, págs. 33-34). Pero en las últimas décadas, se ha evidenciado que la autodeterminación indígena no sólo pasa por la



Fuente Elaboración propia.



titulación, también se necesitan condiciones para ejercer control territorial frente a las invasiones de “terceros” en el asentamiento de tierras o explotación de los recursos naturales. Estos procesos de delimitación, control y la vigilancia de la TCO en la práctica son muy sacrificados y exigentes en tiempo, esfuerzos y recursos para CIPTA; son casi imposibles de realizar sin recurrir a recursos financieros de ONG y cooperación (Lehm, 2016, pág. 96).

A pesar de que hay elementos culturales que se han ido perdiendo en el tiempo, el pueblo Tacana todavía mantiene elementos de su **propia cosmovisión** que influyen en su visión de desarrollo. La percepción del territorio como un ente integral y colectivo, a través de un vínculo ancestral, es una base fundamental para vivir en la TCO y organizar la gestión territorial indígena. Este estudio no busca abordar una descripción detallada de estos elementos, pero busca comprender el rol que juegan, por ejemplo, los dueños del monte y de los ríos, a quienes los tacanas piden permiso para extraer los recursos del bosque y no excederse en ello para no molestarlos. También el pueblo Tacana maneja un amplio conocimiento de las propiedades medicinales de las plantas forestales y de bioindicadores específicos que anuncian eventos climatológicos o personales. La religión católica, sus vírgenes, santos y festividades, han sido integrados en la cosmovisión tacana como muestra esta cita:

La gente decía que el río tenía su dueño, que no se tenía que pescar exageradamente porque el dueño se iba a molestar, solamente se iba a pescar para consumir. Los días de Carnaval no se tenía que ir a pescar ni a cazar porque eran días sagrados, lo mismo el día de Todos Santos o durante la Semana Santa. Mujer tacana responsable municipal del área de género; 2015, citada en (Del Carpio Carreño, Castro Mojica, & Zeballos Puccherelli, 2017)

El pueblo Tacana desarrolló algunas estrategias proactivas para revalorizar estos elementos culturales, como la educación bilingüe y la promoción de los tejidos ancestrales que realizan las mujeres. Sin embargo, es un pueblo en que los elementos culturales se han ido transformando y redefiniendo en varios momentos de la historia. Por ejemplo, el idioma se ha quedado vigente solamente en un segmento minoritario de la población.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> En los análisis históricos de la sobrevivencia del pueblo tacana, se resalta que su ubicación en el centro de las rutas de intercambio entre los Andes y la Amazonía, les facilitó habilidades para lidiar con la sociedad no indígena y sobrevivir en diferentes ecosistemas. En textos históricos se resalta el interés de la población tacana por las oportunidades económicas, lo cual la diferencia de otros pueblos indígenas de tierras bajas. La dispersión de la población tacana en el tiempo de goma implicó un golpe para la organización social tacana y su identificación cultural, y muchas familias no volvieron nunca más (Lehm, 2016b, pág. 50).

**La realidad socio económica** de las comunidades tacanas, se define en gran parte por la extracción forestal de recursos maderables y no maderables. Con la titulación de la TCO y la Ley Forestal de 1996, se generaron las condiciones legales para la explotación de madera por parte del pueblo Tacana a través de las Organizaciones Forestales Comunitarias (OFC). Un porcentaje de la ganancia de las OFC va a la comunidad y otra a CIPTA. Existen debilidades en el manejo de las OFC, en cuanto al control a sus miembros y la administración de los recursos económicos. También hay deficiencias en el control a los prestadores de servicios o compradores, e insuficiente coordinación entre las mismas OFC para regular los precios y mejorar las condiciones de las ventas (CIPTA y CIMTA, 2014, pág. 164).

“Existen muchos problemas internos en la OFC. Por el vicio surgen peleas internas. No se maneja bien el poder interno. En algunos casos hicieron auditorías internas, y resultó que los afiliados ya ni vivían en el pueblo. Ya no coordinan con CIPTA y se hacen engañar con empresas”  
(Dirigente CIPTA, mayo 2019).

A pesar de estos problemas la extracción de madera sigue siendo una de las actividades principales para generar ingresos económicos en gran parte de las comunidades Tacana.

No obstante, las OFC recibieron permisos de 25 años para explotar las áreas forestales, y muchos están llegando a sus últimos años. La disponibilidad y accesibilidad de los árboles maderables ya va en declive, lo cual es una preocupación para las autoridades.

“(…) muchas familias Tacana ya no producen nada, ni siquiera para el autoconsumo, por la facilidad de madera. Ya no se puede encontrar ni pollo criollo. Es solo como un 15% de la población que quiere dedicarse a lo productivo. En poco tiempo ya no habrá madera y queremos que la gente tome conciencia”  
(Subcalde Tumupasa, agosto 2019).

La agricultura en las comunidades tacanas es mayormente dirigida al autoconsumo de productos como el arroz, plátano, yuca, maíz. Si bien las familias dedican tiempo y esfuerzo considerable en los chacos, no se prioriza la agricultura como una actividad comercial. Los ingresos de la madera se complementan con algunos emprendimientos enfocados en los recursos renovables del bosque, como turismo comunitario y carne de lagarto entre los más consolidados (CIPTA y CIMTA 2014). Actualmente la pandemia de Covid-19 ha paralizado el avance de estos emprendimientos y la agricultura familiar ha sido clave en la subsistencia de las familias tacanas.





Fuente Elaboración propia.

### **Comunidades Interculturales**

En el caso de los interculturales, la visión de desarrollo contiene los siguientes elementos:

**En el discurso oficial** de FESPAI y sus miembros, se enfatiza el rol de llevar progreso y desarrollo a la región. El sector intercultural se ha posicionado como uno de los sectores con más influencia en el partido MAS y esta participación en el escenario político nacional ha llevado a una identificación fuerte con el “proceso de cambio”. Los interculturales se presentan como los sujetos de una “revolución agraria” que aportan a la soberanía económica de Bolivia.

“Estamos entrando en una Revolución Agraria, porque estamos luchando por nuestro Buen Vivir”

“Somos un país joven, estamos recién en desarrollo, necesitamos ingresos para enviar a nuestros jóvenes a estudiar”

“Ahora importamos soya de Brasil, tenemos que producir lo nuestro, y no ser patio de nadie.”

(Comentarios de comunarios interculturales en Ampliado Central Alto Madidi, FESPAI, comunidad Nueva Ediama, agosto 2019).

Un elemento importante en este discurso es el sacrificio que implicaron los primeros años de colonización para las familias recién llegadas de las tierras altas.

“Más antes no era así, hemos sufrido grave en ese tiempo con el arroz, el maíz, hasta el plátano, no tenían precio, era trabajar como esclavos sin motivo. Lo que comes, comes, lo que se echa a perder, se echa a perder.

No había con qué, pero ahora no es así, puedes vender. Trabajas el plátano, inviertes tiempo, pero vendes. El maíz igual”  
(Agricultor comunidad Intercultural Colorado, septiembre 2019).

“Antes ni puente había. Algunos más antes han sembrado aquí zapallos. Al sacar los zapallos de aquí, al agua se había entrado todo el auto. En vano nomás su producción. (...) aquí, bien nomas antes, cuando hemos llegado todo producía pues. Producía sin fumigar, sin nada, botados las papayas, todo producía”  
(Agricultora, comunidad intercultural Esmeralda, septiembre 2019).

“Nos han asentado bien siempre el 2009, en julio. Nos dejó pues el INRA en el monte, así sin nada. Sin alimentos, no sabíamos andar en el monte, no conocíamos”  
(Comunaria, comunidad intercultural Corazón de León, noviembre 2019).

La visión que plantean hacia el futuro es de agricultura a mayor escala, implementación de tecnología más avanzada, industrialización local y una mayor conexión con los mercados.

“Espero que en 10 años ya haya nuestra procesadora de castaña, nuestra carretera a Pando, espero que hagan industrias, que ya la madera salga con su valor agregado. Espero que alguien venga a montar grandes industrias, puede ser en muebles, en parquet, espero que hayan esos cambios. En el tema de producción, hoy estamos produciendo naranja, plátano, pero que salga industrializada. Por ejemplo, los brasileros utilizan la yuca en chivé, en almidón, sacan sus valores agregados”  
(Concejala del municipio de Ixiamas, septiembre de 2019).

El trasfondo ideológico de este sector es **la reivindicación histórica por la redistribución de la tierra en Bolivia**, basada en los principios de la Reforma Agraria de 1953. Los interculturales enfatizan que, como bolivianos, tienen derecho a suficiente tierra para construir un futuro para sus hijos. Las comunidades en que viven ahora ya están tituladas, entonces en la actualidad, esta reivindicación significa la demanda de nuevas tierras y comunidades para las nuevas generaciones.

Asimismo, la identificación como “interculturales” del sector anteriormente determinado como “colonizadores”, ha respondido a un contexto del Estado Plurinacional donde, en términos previamente aceptados, se cambiaron las connotaciones.

En la perspectiva del sector intercultural, su lucha por el acceso a nuevas tierras agrarias los posiciona en contra de las Áreas Protegidas, como el Parque Madidi y las restricciones ambientales que están a su alrededor. La oposición al “conservacionismo” es parte de su agenda política.





“¿Cuál es la traba? La conservación. La ficha ambiental que no se puede. Nosotros hemos salido a La Paz, años atrás para poder tramitar maquinarias para tecnificar la cosecha de arroz, todo. Pero allí “la conservación” no nos hizo caso, no nos ha atendido. Porque ustedes son, dicen, amortiguación del parque y no pueden tecnificar. Y están tramitando la provincia como su parque. Entonces son las trabas porque no se puede producir, no se puede enfrentar”  
(Comunario, comunidad intercultural Colorado, septiembre 2019).

El elemento **identitario cultural** es más complejo en los interculturales que en el pueblo Tacana, dado que se tratan de comunidades aún en formación. No tienen un vínculo ancestral con la tierra que habitan actualmente. En cambio, han traído elementos culturales de sus orígenes quechuas y aymaras a las nuevas comunidades, como realizar la ch’alla antes de hacer una siembra. Los interculturales reconocen que su percepción de la tierra es diferente que la visión de territorio de los tacanas, pero enfatizan que también tienen sus formas de honrar y cuidar a la Madre Tierra. Sin embargo, enfatizan sobre todo, su identidad como bolivianos y bolivianas.

Yo soy un boliviano del departamento de La Paz. No soy un extranjero, para que estén mirando mucho. Soy de la provincia Aroma.  
(Comunario intercultural, Ixiamas, noviembre 2019)

Desde esta adhesión a la identidad nacional, expresan resentimiento por el acceso a tierra que ha logrado el sector menonita, generando competencia desigual:

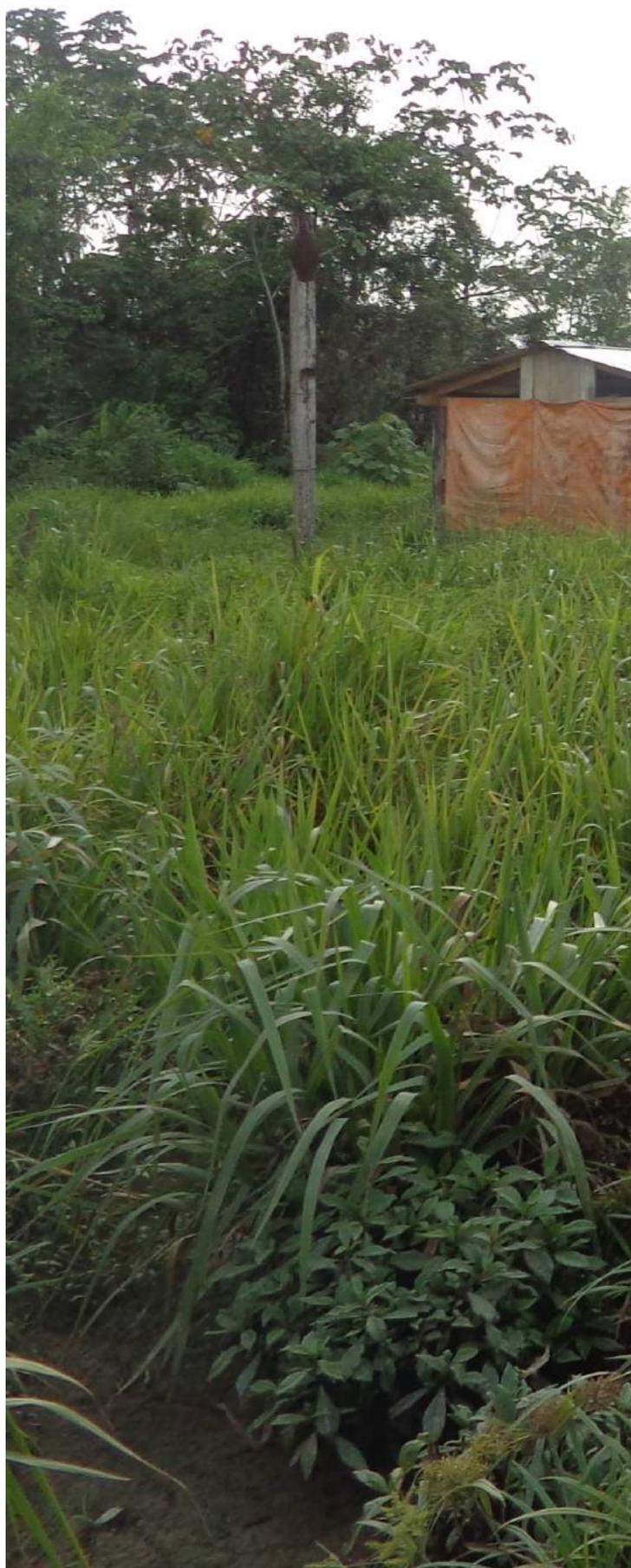
“Ahora cuando viene un extranjero, los menonos ya están asentados, 80 familias, han vendido los mismos que tenían tierra, han comprado ellos. Ahora ellos tecnifican. Cuando vamos al lugar es envidiable el trabajo. Están sembradas hectáreas inmensas, todo el lugar tecnificado, hermoso está produciendo. Allí de todo están bien, feliz la vida. Y el legítimo boliviano, seguimos muriendo de hambre. Seguimos viviendo en casas transparentes (...)”

(Comunario comunidad intercultural Colorado, septiembre 2019).

“La competencia con esas familias de los menonos, es un poco donde nos incomoda. En realidad, hubiera sido lindo que el gobierno o los municipios tengan apoyo técnico o asesoramiento técnico, para que las comunidades también de la misma manera puedan ser competitivos con esa otra organización, con esa gente que vive por Ixiamas, los menonos. Si fuese así, podría ser un poco más rentable, en todo lo que es mecanizado”

(Dirigente subcentral Marcelo Quiroga, comunidad intercultural Esmeralda, septiembre 2019).

En cuanto a su **realidad socioeconómica**, las comunidades interculturales en su mayoría implementaron un modelo de agricultura familiar dirigido al comercio y caracterizado por una diversidad de cultivos. En los primeros años, las condiciones de clima, suelo y la disponibilidad de 50 hectáreas por familia fueron factores favorables para generar medios de vida sostenibles. Si bien lograron construir sus comunidades y desarrollaron la agricultura familiar bajo estas nuevas condiciones, persistieron aún carencias como la falta de servicios básicos y la falta de carreteras. Existen comunidades que tienen actividad de agricultura muy limitada, y se perciben frustraciones sobre





la falta de políticas estructurales de apoyo, como señalan estos dos testimonios de dos comunidades del municipio de Ixiamas:

“Han habido diferentes percances. Son motivos para no hacer cultivo. Grande extensión, tema camino. A lado de Santa Cruz hacen apoyo con apertura de camino, pero mientras este lado no tenemos mucha importancia Por esa razón, en nuestra comunidad poquito sembramos. Y otros con lo mismo. No solamente nosotros”  
(Comunario de comunidad intercultural Corazón de León, noviembre 2019).

“Hemos sufrido. Soy de la provincia Aroma de La Paz. Evo nos ha propuesto que vayamos a Ixiamas a trabajar, para vivir bien. Evo nos prometió una fábrica de aceite, por lo menos para el autoconsumo. Nos prometieron caminos para vivir bien. ¡Pero ni señal tenemos! No hay cuando vivir bien. Ni los profesionales en las ciudades tienen trabajo”  
(Comunario del central Alto Madidi, agosto 2019).

Para ampliar sus tierras cultivables, las comunidades interculturales recurren a los planes de desmonte y a la práctica de chaqueo, lo cual les genera crítica del sector tacana y a veces de las instancias del Estado, como la ABT. Por otro lado, la extracción de madera, a través de Planes de Manejo Forestal, se constituyó también en una fuente principal de los ingresos monetarios para muchas familias.

La FESPAI aboga por apoyo estatal para la tecnificación de la agricultura. Para el sector es importante la coordinación con los niveles de Estado en vista de avanzar en la agricultura y la producción comunitaria. Sin embargo, el apoyo estatal llega muchas veces fragmentado y con limitada sostenibilidad. Los dirigentes resaltan las deficiencias en estos apoyos:

“El gobierno nos ha dado tractores agrícolas a comunidades. Por ejemplo, a mí me han dado uno a nivel comunidad.

El problema es que no tenemos los implementos. Por eso le decía que hasta ahorita no hay un apoyo técnico por parte del municipio, ni del nivel gobierno. Nos falta el asesoramiento”

(Dirigente subcentral Marcelo Quiroga, comunidad intercultural Esmeralda, septiembre 2019).

## 2.2. MODELOS DE DESARROLLO LOCAL BAJO AMENAZA

En la provincia Abel Iturralde la agricultura familiar sigue vigente como eje importante en la economía regional y medio de subsistencia de las comunidades indígenas como de los interculturales, pero se evidencia señales contundentes de transición hacia otros modelos de agricultura y desarrollo local.

Un factor clave es la reducción de ingresos generados por la extracción de madera por parte de la población local, relacionada al agotamiento de las áreas explotadas. Las familias se están insertando en otros rubros para suplantar estos ingresos, como es la ganadería:

“Está cambiando porque antes ellos vivían de la madera. Todo era madera, madera. Había comunidades que tienen su ASL, un grupo de gente que trabajaban explotando madera y la madera venden y se dividen sus dividendos. Más vivían de eso. Ahora parece que se están dedicando al ganado”  
(Mujer integrante la organización Bartolina Sisa del municipio de Ixiamas, septiembre 2019).





Paralelamente, la creciente deforestación ya está provocando un deterioro en las condiciones de la agricultura familiar, como erosión de suelos, disminución de fuentes de agua, aumento de plagas, y periodos de sequía más largos y frecuentes. Estas condiciones hacen más impredecible e inseguro dedicarse a la agricultura.

“Con esta sequía todo está fracasando ahorita. Hemos sembrado también verduritas, para el consumo. Después hemos sembrado también café. Algunos tienen cacao, injertos. Pero hasta los cítricos están secando. No hay agua de lluvia, no sé cuantos meses ya no está lloviendo. El café igualito está secando. Todo ha secado. Nosotros a veces no tenemos para el sustento para mantener a los hijos. Del lote tratamos de sacar, pero a veces no hay allí tampoco y a la fuerza tenemos que ir a jornallear para ganar para nuestros hijos, para lo que tienen en el colegio”  
(Comunaria, comunidad intercultural Esmeralda, septiembre 2019).

Particularmente son las mujeres quienes alertan con preocupación sobre estos cambios en su entorno. Una de las respuestas a este deterioro es la ampliación de la ganadería familiar.

“Entonces en esta comunidad Colorado se ha hecho un estudio, sale que la comunidad Colorado es apto para sembrar yuca, maní y para el pastoreo. Entonces no es apto más allá para otras cosas. Eso se clasifica. La comunidad ya se ha volcado en tomar decisiones para el pastoreo. Ya todos estamos con esa mente de poder alambrar nuestro lote. No hay otra esperanza para hacer. Si no tengo mi ganado, no hago nada. Yuca no se puede sembrar, hay mucha plaga, del monte, se viene a todo, se lo acaba y un día ya no hay. Maní igual”  
(Comunario comunidad intercultural Colorado, septiembre 2019).

Las políticas públicas nacionales y locales también se dirigen hacia el potenciamiento de esa actividad económica, por ejemplo, a través de la entrega de cabezas de ganado a las comunidades.<sup>15</sup> Sin embargo, para generar una ganadería rentable, las tierras individuales en las comunidades interculturales pueden resultar insuficientes en corto y mediano plazo, situación que llevaría a un incremento en la compra de tierras por actores con mayor capital financiero.

“La gente ha quedado ya decidida a tomar los ganaditos que les han apoyado también el gobierno. Y mucha gente ya han empezado a comprarse más. (...) ahora con este pasto, para mí, no tiene una esperanza larga. Porque en la comunidad los lotes son de 50 hectáreas, para los hijos, la nueva generación, no va a alcanzar. Ni para nosotros. Si uno quiere 100 cabezas, para obtener mejor fondo, no alcanza pues. Entonces el pasto va a escasear, la tierra va a faltar. No vamos a tener donde producir ya. Estamos en esa situación”  
(Comunario comunidad intercultural Corado, septiembre 2019).

Algunas familias están beneficiándose de proyectos que promueven los productos agroforestales en las comunidades, pero aquellos no han logrado sostener un modelo rentable para toda la población.

<sup>15</sup> En 2016, un programa del Ministerio de Desarrollo Rural entregó 700 cabezas de ganado a 31 comunidades en Abel Iturralde. “Esta es la primera fase y si tenemos éxito en esto que hoy estamos entregando a las comunidades y de aquí a uno, dos años, vemos que se han reproducido en dos, cuatro, ocho o en diez, este programa va a seguir para repoblar y por eso tenemos que convertir a Ixiamas en un gran centro ganadero donde el pequeño campesino se convierta en ganadero”, expresó el mandatario (Viceministerio de Comunicación, 2016).

“Nos vienen con proyectos productivos, nos enamoramos y deforestamos más, pero sin los resultados esperados. Por ejemplo el cacao no rinde suficiente porque los proyectos son cortos y no logran a consolidar la producción y el mercado”  
(Exdirigente CIPTA, mayo 2019).

La dependencia a los proyectos externos, la poca constancia del apoyo técnico y las limitaciones en el acceso a mercados son factores que impidieron resultados sostenibles en varias de estas iniciativas (Krings, 2014).

Otro factor relevante en este marco es la migración de las comunidades. Muchas familias practican la doble residencia por razones educativas y laborales, pero también muchos jóvenes se han ido definitivamente a las ciudades de La Paz y Santa Cruz. Los que se quedan, se dedican a actividades diversas para sustentar a sus familias, como el transporte, el trabajo como jornaleros en los aserraderos y el comercio.



## **Minería de oro**

Una actividad particular que influye en las dinámicas económicas y laborales es la minería de oro. El crecimiento de la demanda global del oro y la subida de su precio internacional, generaron diversas olas caóticas de nuevos emprendimientos mineros por los ríos amazónicos.

En este sector, que significa una de las actividades extractivas más impactantes en toda la región amazónica, está ocurriendo un cambio de un modelo de extracción artesanal de oro por parte de las poblaciones a las orillas de los ríos Beni, Madre de Dios y sus afluentes como el Tuichi y el Tequeje, a un modelo de extracción intensiva por parte de cooperativas mineras. En el río Madre de Dios, los mineros se unieron en la cooperativa aurífera Asociación de Balseros (ASOBAL Ltda.), con aval de las instancias estatales; funcionan como una cooperativa con más de 200 socios, más de 1.500 operarios y su producción supera el volumen de 100 kilos/año. El sector cooperativo cuenta con el respaldo del Estado boliviano, lo que en la práctica se traduce en pocas exigencias en cuanto a impuestos, escaso control sobre sus actividades y amplio favorecimiento de políticas que amplían sus áreas de acción (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2015, págs. 42-73).

Si bien se da la inclusión de los actores locales en la actividad minera, se trata de una relación de subordinación frente a los externos, ya que no son ellos los que toman las decisiones. Ni la generación y distribución de la riqueza se da por igual.

“Son los grandes empresarios que están en los ríos; esas cooperativas están conformadas sobre todo por grandes empresarios; tienen 4 a 6, 12 y hasta 18 balsas, sin embargo, los pequeños productores de oro de comunidades trabajan con pequeñas balsas. Los empresarios trabajan con balsas con motores de gran potencia. (...) Son monopolios, el Ministro (de Minería) no ha permitido que las comunidades indígenas conformen cooperativas con el fin de garantizar su sustento familiar, pero los otros han pagado a las comunidades y están operando” señala Rolando Salvatierra, secretario de RRNN de TACANA II (Mercado, 2019).



La presencia de proyectos extractivistas como la minería de oro, la exploración de petróleo y los megaproyectos, ha incrementado la presencia de actores externos muy diversos en la región, desde cooperativistas mineras hasta trabajadores chinos. Estas nuevas presencias generan un mosaico más diverso todavía de actividades económicas, que, en muchos casos, involucran a la población local también. Sin embargo, en general son actividades de carácter temporal y de precariedad laboral (Guzmán Narváez, 2018).

## 2.3 CONFLICTIVIDAD TERRITORIAL Y SOCIO-AMBIENTAL: CASOS Y TENDENCIAS

Los actores principales en la provincia Abel Iturralde han pasado por diferentes etapas de conflictividad territorial y socioambiental en las últimas décadas. Se identificó un proceso de transformación de los tipos de conflictos socioambientales y territoriales más recurrentes en la región. Los conflictos sobre el acceso a los recursos naturales, en particular tierra y bosque, siguen vigentes y serán fuente de mucha tensión a corto plazo.

Paralelamente, un nuevo tipo de conflictividad está cobrando importancia en la región, causada por los impactos socioambientales de la explotación intensiva de los recursos naturales, relacionados a modelo de desarrollo extractivista promovido desde el Estado y sus actores aliados.

Los impactos más inmediatos se perciben en el deterioro de los recursos naturales de la provincia. Los arroyos de agua han bajado su caudal en las áreas de mayor deforestación y los ríos donde se practica minería ya presentan contaminación por minería. Estos deterioros impactan negativamente en la salud humana y en las posibilidades de agricultura familiar, fenómenos



que no son monitoreado adecuadamente por las instancias estatales, generando inseguridad en la población afectada.<sup>16</sup>

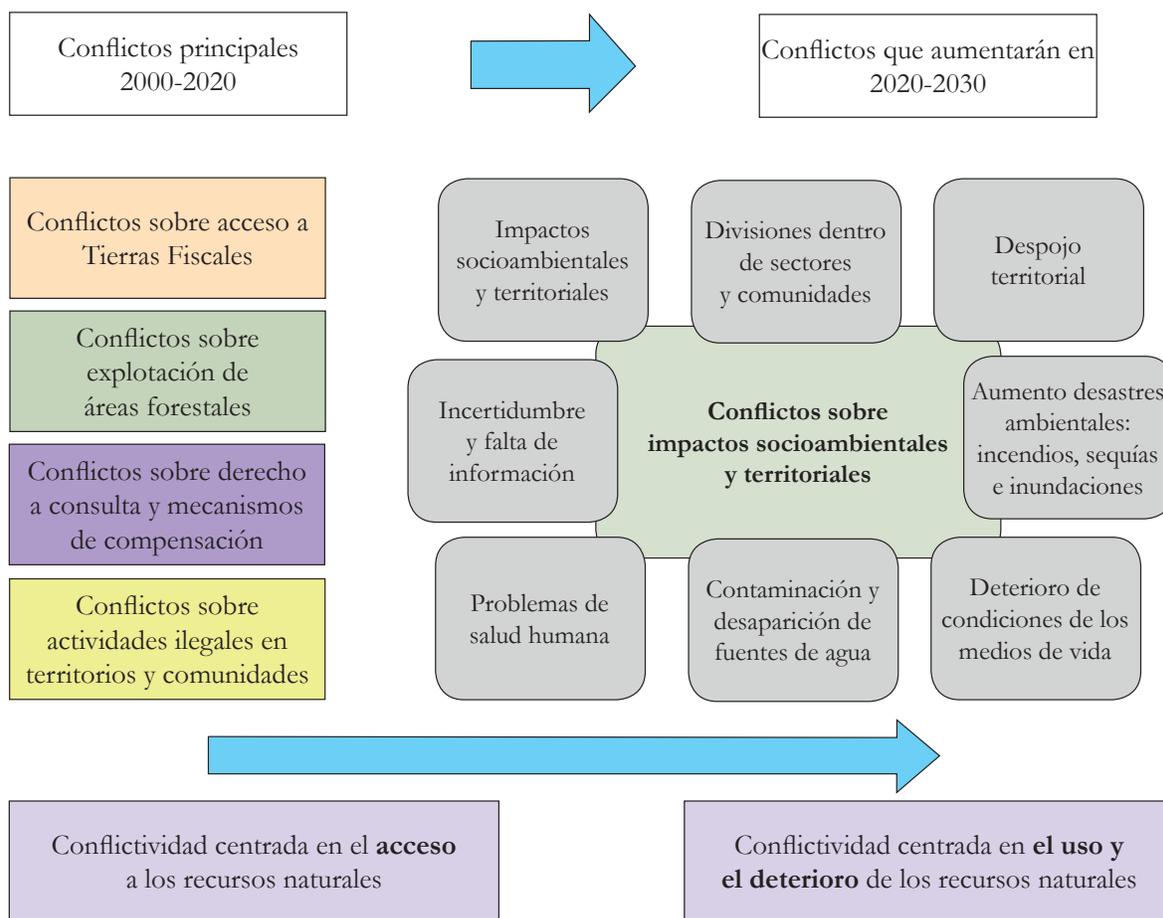
A la vez, aumenta la intensidad de los fenómenos naturales como inundaciones y sequías.

Pero también se registran impactos socioeconómicos vinculados a las nuevas desigualdades en los accesos a los beneficios de las actividades de extracción, la división de las comunidades y el despojo territorial.

Todos estos impactos, que además se refuerzan mutuamente, influirán en nuevos ciclos de conflictividad en la región.

<sup>16</sup> En un estudio de Tschirhart (2011) se evidencia como los suelos amazónicos forman la fuente más importante de mercurio liberado en el ambiente. Las concentraciones más altas de este metal se encuentran en los depredadores al final de la cadena, como peces piscívoros o el hombre. El consumo regular de estos pescados representa un riesgo para la salud humana. (...) los síntomas conocidos son: alteraciones de la capacidad visual y auditiva, reducción de la coordinación de movimientos, dificultades de elocución, sensación de quemadura en la boca y en los miembros; síntomas que van agravándose con la dosis. Los fetos y niños constituyen la población más vulnerable frente a ese riesgo, por tener un sistema neuronal en pleno desarrollo (Tschirhart, 2011, pág. 563).

**Gráfico 2.**  
**Tipos de Conflictividad socioambiental en la Provincia Abel Iturralde**



Fuente Elaboración propia.

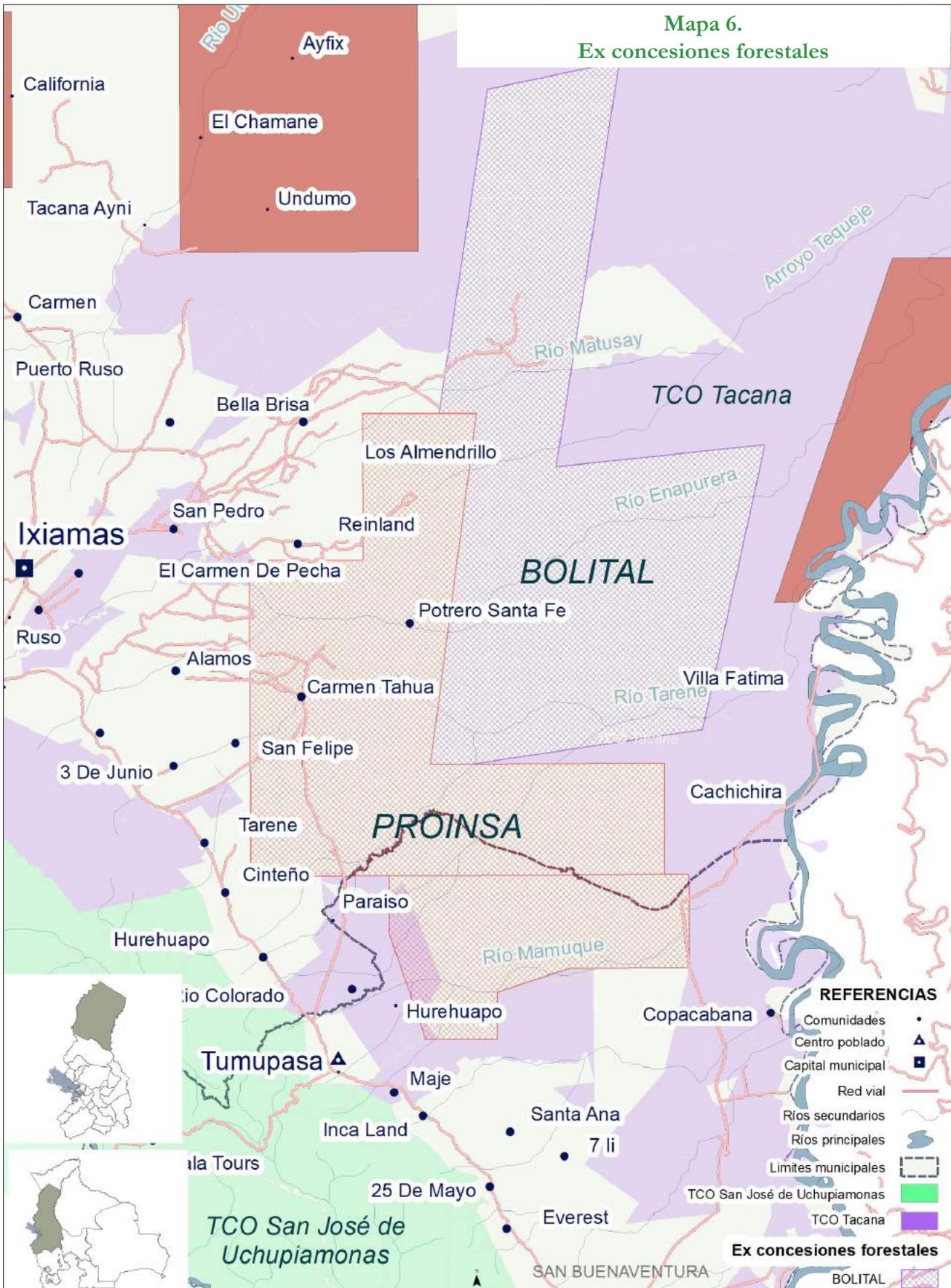
En esta sección se analiza dos tendencias estructurales que están detrás de estos nuevos escenarios de conflictividad en la provincia Abel Iturralde:

1. La estrecha relación entre las luchas por el acceso a la tierra y la explotación de los recursos naturales, a partir de los conflictos sobre la exconcesión forestal PROINSA.
2. Las tensiones y nuevas relaciones de poder generadas por las reconfiguraciones en el uso agrícola de la tierra, a partir de los conflictos generados por la presencia de la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA).

### Caso 1. Tierras de ex-PROINSA: la manzana de la discordia

“Hay un territorio que tiene 600.000 hectáreas que era una exconcesión forestal: PROINSA. Y de ese territorio, una parte se le ha dado al Ingenio Azucarero para que produzcan su propio material y los demás están haciendo asentamientos. Allí está la demanda Tacana, la demanda de FESPAI y la demanda de Túpac. Son casi 30 comunidades que se van a establecer. Cada comunidad con 60 familias, cada familia con 5 miembros. Ya está libre pero todavía no está decidido a quien se va a dar” (Alcalde San Buenaventura, noviembre de 2019).

**Mapa 6.**  
**Ex concesiones forestales**



La provincia Abel Iturralde es uno de los pocos lugares en Bolivia donde queda una gran cantidad de tierras fiscales, resultado de la conversión de concesiones forestales.<sup>17</sup> La exconcesión forestal PROINSA es un caso emblemático, que ha sido fuente de conflictividad desde hace más de una década e incluso provocó varios hechos de violencia.

#### Enfrentamientos entre sectores por el acceso a las tierras de PROINSA:

- En 2013 el sector de campesinos aliados a la CTUCB y las FESPAI se acusaron mutuamente en los medios de titular comunidades fantasmas con el afán de traficarlas y lucrar de la madera en alianza con “empresas transnacionales”.
- En 2017 se reportan que alrededor de unas 800 personas avasallaron tierras de las indígenas tacanas e incluso quemaron al menos seis casas para apoderarse de tierras forestales. Este hecho sucedió en el sector de Tarene Chico, cerca de la comunidad Tahuá, una de las entradas a el área PROINSA.
- En octubre de 2018 Tumupasa se declara en estado de emergencia ante los asentamientos de 30 familias vinculadas a la organización “Túpac Katari” que se asentaron en el área, en la cercanía de la comunidad San Silvestre. El sector tacana desaloja a las familias.

Fuentes: entrevistas y notas de prensa

<sup>17</sup> En un mapa de 2018 producido por el INRA, se menciona que en la Reserva Forestal de Inmovilización Iturralde se identificaron tierras fiscales en la superficie de 1.472.584 ha, excluyendo las Áreas Protegidas, concesiones forestales vigentes y otras áreas clasificadas (INRA- Instituto Nacional de Reforma Agraria y Viceministerio de Tierras, 2020).

¿Qué elementos juegan un rol en la intensidad y duración de este conflicto? En primera instancia, se trata del **acceso a grandes cantidades de tierra**, actualmente forestales. En 2007 el Estado revierte la concesión forestal de la Empresa Proyectos Integrales Sociedad Anónima (PROINSA), con una superficie de 77.952,5270 ha.<sup>18</sup> El área es parte de lo que CIPTA considera el área ancestral del pueblo tacana, porque se encuentra en el medio de su TCO. Desde hace mucho tiempo usan este bosque para la caza, la pesca y la recolección de frutas. A la vez, la FESPAI demanda una parte del territorio bajo el argumento del crecimiento de su población y la insuficiencia de las tierras productivas para las nuevas generaciones. A estos dos sectores se han sumado nuevos colonizadores reunidos en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia Tupak Katari (CSUTCB-TK) y a pobladores de El Alto, agrupados en una entidad “Tupak Amaru”.

Tras varios años de discusión, CIPTA y FESPAI llegaron a un acuerdo para compartir el área, lo que resultó en la presentación de una demanda conjunta ante el INRA a principios de 2010. En el acuerdo incluso delimitaron físicamente áreas para cada uno como una solución efectiva, pero el Estado rechazó el mismo señalando que el área todavía estaba inmovilizada y no se podía titular. En 2012 las dos organizaciones realizaron otra demanda en conjunto.

Otro elemento importante en este conflicto es **el rol del Estado**, que durante más de 10 años no ha podido resolver este conflicto. En 2011 coordinaciones entre el Viceministerio de Tierras, el INRA, el CIPTA y la FESPAI resultaron en el Estudio Técnico para la Zonificación Agroecológica de la exconcesión de PROINSA. El estudio estableció que la mayor parte del área deberían mantenerse con vocación forestal.

<sup>18</sup> Esta área era parte de la demanda original de la TCO Tacana presentada por el CIPTA en 1997 y admitida por el INRA un año después.

En pleno proceso de su demanda, CIPTA y FESPAI se sorprendieron con el hecho de que el INRA ya había dotado un predio en el área de PROINSA a la Empresa Estatal Azucarera San Buenaventura (EASBA), sin tomar en cuenta la demanda conjunta realizada por las dos organizaciones en 2012.<sup>19</sup> Esta decisión genera el rechazo contundente de CIPTA y FESPAI, que empeora de manera significativa las expectativas de una solución constructiva por parte del Estado. En 2015 se llegó a una situación muy tensa cuando CIPTA desalojó a algunos funcionarios de EASBA que entraron a ese territorio para hacer estudios de suelo.

“Y en esta discusión nos enteramos de que el Estado mediante el INRA, mediante una resolución administrativa, **ya ha dado una superficie a EASBA en los lugares que nosotros estamos demandando.**

Entonces allí crea una reacción automática en la población Tacana: ellos quieren realizar trabajos en la zona, nosotros no dejamos, **los hemos desalojado**, entonces sucede justamente en 2015. Y hay una serie de amenazas contra nosotros, de procesos y tantas cosas”  
(Dirigente CIPTA, noviembre 2019).

En 2018 el Estado levantó la inmovilización del área PROINSA mediante un Decreto Supremo, que señala que el estudio de uso de suelos identificó 60,527 ha, para el proceso de dotación de tierras fiscales, donde se excluyen las áreas inundadizas y no aptas para uso agrosilvopastoril.<sup>20</sup>

19 No hemos podido acceder a datos oficiales sobre el tamaño exacto de esta dotación, pero varios actores locales mencionan que se trata de 5.000 hectáreas ubicadas en la parte de la demanda de CIPTA.

20 El Decreto Supremo No. 3635 del 02 de agosto de 2018, tiene por objeto levantar de manera excepcional la prohibición del artículo 5 del Decreto Supremo N° 23022 de 23 de diciembre de 1991 en los polígonos 1, 2 y 3 del municipio San Buenaventura y parte del municipio



Hasta esa fecha, según datos de INRA, recibieron ya 63 solicitudes de dotación de tierras fiscales dentro los polígonos 1, 2, 3 del Decreto Supremo 3635, específicamente de la Federación Única de Trabajadores Originarios Campesinos de la Provincia Abel Iturralde FUTOC-PAI, CIPTA y FESPAI. En 2020 el INRA presentó una propuesta de dotación de estas tierras entre las tres organizaciones mencionadas (INRA- Instituto Nacional de Reforma Agraria y Viceministerio de Tierras, 2020).

Ixiamas de la provincia Abel Iturralde del Departamento de La Paz, habiendo levantado de manera excepcional la superficie de 60.527 Ha (Sesenta mil quinientas veintisiete hectáreas), en el que se desarrollarán actividades forestales y agrosilvopastoriles conforme a los Planes de Gestión Integral de Bosques y Tierra (INRA- Instituto Nacional de Reforma Agraria y Viceministerio de Tierras, 2020).

Llaman la atención cuatro aspectos de su propuesta:

- i. No menciona una política o plan de distribución de tierras y no observa normas que son propias de este proceso, como la obligatoria distribución colectiva.
- ii. Utiliza como unidad de dotación las 30 ha por familia, lo que se distribuye a 67 comunidades conformadas por 30 familias cada una, en la superficie de 900 hectáreas. Con esta propuesta ignora la modalidad TCO que corresponde para el pueblo Tacana.
- iii. Utilizando este criterio, otorga la mayor parte a 14 comunidades de FESPAI, seguida por 8 comunidades de FUTOC-PAI y una parte mucho menor a 5 comunidades de CIPTA.
- iv. Efectivamente incluye en el mapa la parte otorgada para “usufructo” a EASBA.

De ninguna manera se refiere a las demandas y acuerdos realizados por FESPAI y CIPTA de forma conjunta en 2010 y 2012. Hasta el momento el INRA no ha presentado otra propuesta de dotación de estas tierras.

La prolongación del conflicto sobre el acceso a estas tierras y la falta de una resolución de dotación por parte del Estado Boliviano resulta desgastante para las comunidades demandantes.

“Es que cada año dicen que este año hay que esperar nomas, pero no pasa nada. Mandamos comisión a La Paz, pero no hay resultado. Más de 10 años estamos luchando ya. Otros ya se cansan y lo dejan. Otros entran nomas también. Es cansador”  
(Mujer intercultural de comunidad demandante en PROINSA, Tumupasa, octubre 2020).



A medida que se van intensificando el desorden y la incertidumbre en este caso, se generan mayores escenarios de conflictividad que pueden reactivarse, en cualquier momento, con mayor fuerza y violencia.

En este escenario varios sectores aplicaron otra estrategia de facto para asegurar su acceso a estas tierras: **los asentamientos irregulares**. Estos asentamientos también abren caminos para actores externos, que junto actores locales se apropian de tierras. Una autoridad CSUTCB-TK, precisamente testimonia sobre la presencia de facto de múltiples actores en la zona:

“Ahora, igual nuestra gente está allí. Están en exPROINSA, en San Buenaventura, algunos están en Ixiamas también, de Ixiamas más adentro. En exPROINSA no sé cuántas familias son de nosotros, es más difícil calcular, porque ya tres organizaciones estamos allí metidos: Los de FESPAI están allí, que son los Tacanas, los interculturales están allí, la Túpac, Bartolinas, y fuera de eso CONAMAQ más ya se están metiendo allá también”  
(Entrevista dirigente CTUCB-TK, septiembre 2019).

Según inspecciones del propio Viceministerio de Tierras en 2018, se asentaron 21 comunidades sin autorización de asentamiento sobre una superficie de 75 ha. Son asentamientos sin habitación permanente, pero con alguna construcción comunal como una sede y en algunos casos alguna actividad productiva (INRA- Instituto Nacional de Reforma Agraria y Viceministerio de Tierras, 2020). En el capítulo 3 se abordó con más detalle lo que significan estos asentamientos para la relación entre el sector tacana e intercultural.





Un elemento importante para resaltar en este caso es que la conflictividad no sólo gira en torno al acceso de la tierra, sino está relacionada principalmente con **el uso de la tierra**. Detrás del afán de muchas personas internas y externas de la región de titular nuevas comunidades en el área PROINSA, está la expectativa de generar en primera instancia una ganancia económica con sus recursos forestales. Afiliarse formalmente a una comunidad nueva y demandar un título en tierras fiscales se ha convertido en el recurso principal para gestionar este acceso.

“Si no nos quieren dar tierras, por lo menos que nos den concesiones como agrupaciones forestales. Para ir a sacar la madera y reforestarla. Pero ni para eso nos dan”  
(Mujer intercultural de comunidad demandante en PROINSA, Tumupasa, octubre 2020).

“Yo soy presidenta de una comunidad de más o menos de 55 miembros. Nadie vive allí. Es sólo para sacar permiso forestal. Estamos tramitándolo ahora, tenemos reunión cada 15 del mes. Unos 25 vivimos en Ixiamas, los otros son de La Paz, San Buena, Tumupasa, etc. La mayoría sólo quiere sacarse la madera y nada más. Tienen otros terrenos para agricultura. A mí me gustaría usarlo para algo más, como abejas u otra cosa productiva”  
(Presidenta de comunidad nueva, Ixiamas, septiembre 2019).

Así, las tierras fiscales se han convertido sobre todo en una opción para generar ingresos con la madera sin tener la intención de realmente habitar los lugares titulados. Esta práctica genera un espiral en el que la opción de afiliarse a una Agrupación Social del Lugar o



un Plan de Manejo menor de 200 ha, resulta ser más sencilla que dedicarse a la producción agrícola en un terreno lejano. Así hay cada vez menos condiciones para vivir en las comunidades tituladas.

“A mí me preocupa que se organicen solamente con el fin de sacar la madera. Pero también desde la parte central, hay un error grande. (...) y por eso acostumbran a organizarse comunidades, pero también ya vienen a talar árboles. Mentira que van a venir a vivir aquí. Hartas comunidades tenemos y no tenemos habitantes. Siempre sacan la culpa a que no hay camino, que hay mal camino, pero es así. Pero si pueden realmente necesitar la tierra, pueden vivir pues. Pero vienen con su finalidad de hacer su plan de manejo. Eso he visto también como parte débil de mis propios hermanos que se organizan”  
(Concejala de Ixiamas, entrevista septiembre 2019).

“(...) aún más arriba de esa comunidad, hay unas personas ajenas que han ingresado a vivir allí. Ellas depredan la madera sin consultar con nosotros. Ellos viven en Rurrenabaque entonces solamente están allí por la madera”  
(Comunarias tacanas de Tres Hermanos, entrevista noviembre 2019).

Es desde esta lógica que van tomando un rol más notable las formas de organización nuevas, y se van distorsionando las demandas históricas por la tierra de CIPTA y FESPAI.

Al mismo momento, una vez generados ingresos con la extracción de madera, se proyectan procesos de desmonte por ganadería y agricultura en estas zonas.

“Ganadería porque esas tierras son lejos y sembrar y transportar alimentos es complicado. No hay buen camino. Arroz, maíz, nos saldría más caro, más inversión. Quiero meterlo pasto y ponerlo ganado”  
(Mujer intercultural de comunidad demandante en PROINSA, Tumupasa, octubre 2020).

Además, la presencia de PROINSA en el área de influencia de la Empresa Estatal San Buenaventura, influye, más que para ser un actor, para entrar a este rubro.

Entonces para comprender la conflictividad es necesario analizar la interacción entre los recursos e intereses que están en juego en torno a la tierra, recursos forestales y suelos agrícolas. El Estado, en su rol de gestionar estos recursos de una forma estratégica y sostenible, ha demostrado un debilitamiento considerable en los últimos años. Los conflictos intensos sobre las tierras fiscales fueron respondidos con negligencia de las instancias responsables, en particular, cuando en varios momentos dejaron que los actores en la región gestionaran sus conflictos entre ellos.

En varias comunidades recientemente tituladas, existen conflictos internos y las formas de solución resultan ser poco institucionales, el testimonio de una mujer de una de estas nuevas comunidades en Ixiamas, es muestra de ello:

“No sé cómo será, pero hay dos grupos. En el otro grupo nosotros hemos entrado y a mi esposo le han dado una parcela para trabajar allá. Nosotros hemos trabajado ya. Grande hemos hecho chaco. Hemos hecho arroz, plátano, maíz, de todo. Y justamente otra vez hubo la medición de terreno, han dicho que tienen que acomodarse otra vez porque se habían ubicado mal.

Otra vez lo han medido y nosotros hemos quedado fuera. Estábamos en otro lugar, en otro terreno. Nos han movido más adentro, ahora, más adentro recién estamos haciendo la casa que ya bueno, les han quitado las ganas de trabajar si en el otro ya teníamos el trabajo hecho, ya habíamos desmontado una parte. Yo le dije a mi esposo no nos moveremos, aquí no más nos quedaremos, aquí no más trabajaremos, no creo que nos boten”  
(Integrante de Bartolina Sisa de Ixiamas, septiembre 2019).

Las instancias que deben implementar estas políticas nacionales de gestión y fiscalización sobre las tierras, áreas protegidas y la extracción de madera, como INRA, SERNAP y la ABT, cuentan con recursos financieros y humanos cada vez más deficientes para cumplir con su trabajo. Su margen de actuar frente a las actividades ilegales es muy reducido, lo cual ha contribuido al desborde de la conflictividad en soluciones de hecho entre los actores locales.



## Caso 2. La Empresa Azucarera: afectaciones, ilusiones y transformaciones

“El ingenio es uno de los factores del crecimiento. Está trabajando a un 30% de su capacidad. Llegaremos a 50% y ¿cómo va a ser la cantidad de gente? Ahora el ingenio recién está abarcando a algunas comunidades, de las 50 que hay en la carretera. Es complicado, porque la gente ahorita está tratando cómo involucrarse en este negocio, no hay recursos, les hace falta plata para inversión. Más allá de eso, seguramente van a venir capitalistas, van a venir empresas, industrias. Pero más allá de eso, la pregunta es que nos están dejando aquí en el entorno, eso es lo preocupante, eso es el lío. ¿Qué nos están dejando en los problemas colaterales...?”  
(Entrevista a Alcalde San Buenaventura, noviembre 2019).

El ente dinamizador del agroextractivismo en el Norte de La Paz actualmente es la Empresa Estatal San Buenaventura (EASBA). En realidad, este megaproyecto fue anunciado desde los años 1970 por el programa CORDEPAZ y fue una de las razones principales de la migración de muchas familias del país hacia la nueva zona. Durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019), se implementó el proyecto como parte de su propuesta política para el desarrollo productivo de la región pacaña, al margen de reiteradas advertencias sobre las limitaciones técnicas y económicas para la puesta en marcha de la propuesta.

Varios estudios realizados desde los años de la CORDEPAZ, hasta tiempos más recientes (por ejemplo MACA, 1967, Cochrane et al., 1985, CUMAT, 1985 (Robison, 2021), han cuestionado su viabilidad económica, además de advertir serias limitaciones en la





potencialidad de los suelos paceños para una producción agroindustrial de la caña.<sup>21</sup>

Además de las características de los suelos, se resaltaron otras limitaciones como el corto periodo de la zafra, la necesidad de deforestar o desmontar casi toda el área, la vialidad insuficiente, el requerimiento de un manejo agronómico con alto consumo de insumos, la frecuencia periódica de lluvias excesivas y el relieve irregular que dificulta la mecanización de la cosecha. Asimismo, avisaron que no siempre las áreas más aptas coinciden con las parcelas de pequeños productores. (VDRA-MDRyT, VPIMGE-MDPyEP y MINAZ, 2009, citadas en (Robison, 2021).

<sup>21</sup> Estos estudios encontraron una gran predominancia de suelos ácidos, una topografía ondulada y con pendientes significativas, especialmente en torno al trazo de la carretera. Concluyeron que apenas el 2% del área de Tu-mupasa sería apta para cultivos en limpio, como es el caso de la caña de azúcar. Sus sugerencias para la zona eran de cultivos perennes bajo sistema agroforestal y pastos para ganadería. No recomiendan caña a nivel industrial (Resumidos en Robison 2021, pag.12).

Actualmente EASBA produce azúcar y alcohol, pero en su rendición de cuentas de 2020 admite que el mercado para estos productos es limitado y su proyección es entrar al rubro de los biocombustibles con la producción de alcohol anhidro. Esto implicaría una inversión adicional de Bs. 34 millones con la construcción e implementación de una planta deshidratadora para este fin, y un cambio sustancial en el objetivo del megaproyecto (EASBA, 2021).

La instalación de EASBA se hizo al margen del consentimiento de la población local. Sus representantes realizaron algunas reuniones de socialización del proyecto, pero no hubo proceso de consulta previa, libre e informada para los pueblos indígenas, ni se socializaron los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, previos a la construcción de la planta industrial. Tampoco se ha presentado un seguimiento a los impactos ambientales por parte instancias estatales.

**Cuadro 2.**  
**Producción de EASBA por año**

Año	Hectáreas cultivadas	Quintales de azúcar producidas	Litros de alcohol (millones)	Ingresos de operación (MMs de Bs)
2015	1.200	8.143	-	0,9
2016	-	109.464	1,3	10,4
2017	2.641	163.008	1,0	39,0
2018	3.578	220.000	1,2	29,4
2019	3.678	302.000	0,9	32,6
2020	4450	320.267	1,0	62,6
2021 (Proyección)	6650	380.600	1,8	63,0



Fuente: Elaboración propia en base de informes de la empresa (EASBA, 2021)

### DATOS ECONÓMICOS:

Según el estudio realizado por el economista Julio Linares, con base en información oficial, entre 2010 y 2018, la compañía recibió Bs 1.832 millones (USD 263 millones) como créditos del Banco Central de Bolivia (BCB).

Amparado en cifras del Ministerio de Economía, el documento sostiene que hasta 2018 los ingresos de EASBA fueron de Bs. 80 millones, por debajo de los gastos de operación que suman Bs. 311 millones. Con cuatro años de producción la empresa azucarera seguía con un déficit operacional de casi Bs. 231 millones, con una advertencia alarmante en sus proyecciones: con la capacidad de producción actual no llegaría a ser rentable en varias décadas.

EASBA adicionalmente al azúcar y alcohol, produce bagazo hidrolizado y genera energía, pero son productos secundarios.

En sus cifras presentadas llama la atención que existe un incremento atípico de ingresos 2019- 2020, el ingreso se duplica, pese a la tendencia de la producción es constante. Se puede suponer que haya existido el incremento del precio de algún producto, pero la empresa no presenta esta información en su rendición de cuentas. Una explicación probable es que la información reportada en 2020 sea un acumulado desde 2018.

**Cuadro 3.**  
**Deforestación en EASBA y sus inmediaciones**

Año	TOTAL en has.		EASBA*		INMEDIACIONES (1 km de distancia)	
	Acumulado	Incremento**	Acumulado	Incremento**	Acumulado	Incremento**
2009	866	-	227	-	639	-
2014	2.325	1.459	1.636	1.409	690	51
2016	3.641	1.315	2.481	845	1.160	470
2019	4.996	1.356	3.232	752	1.764	604

\*\*Incremento entre periodos

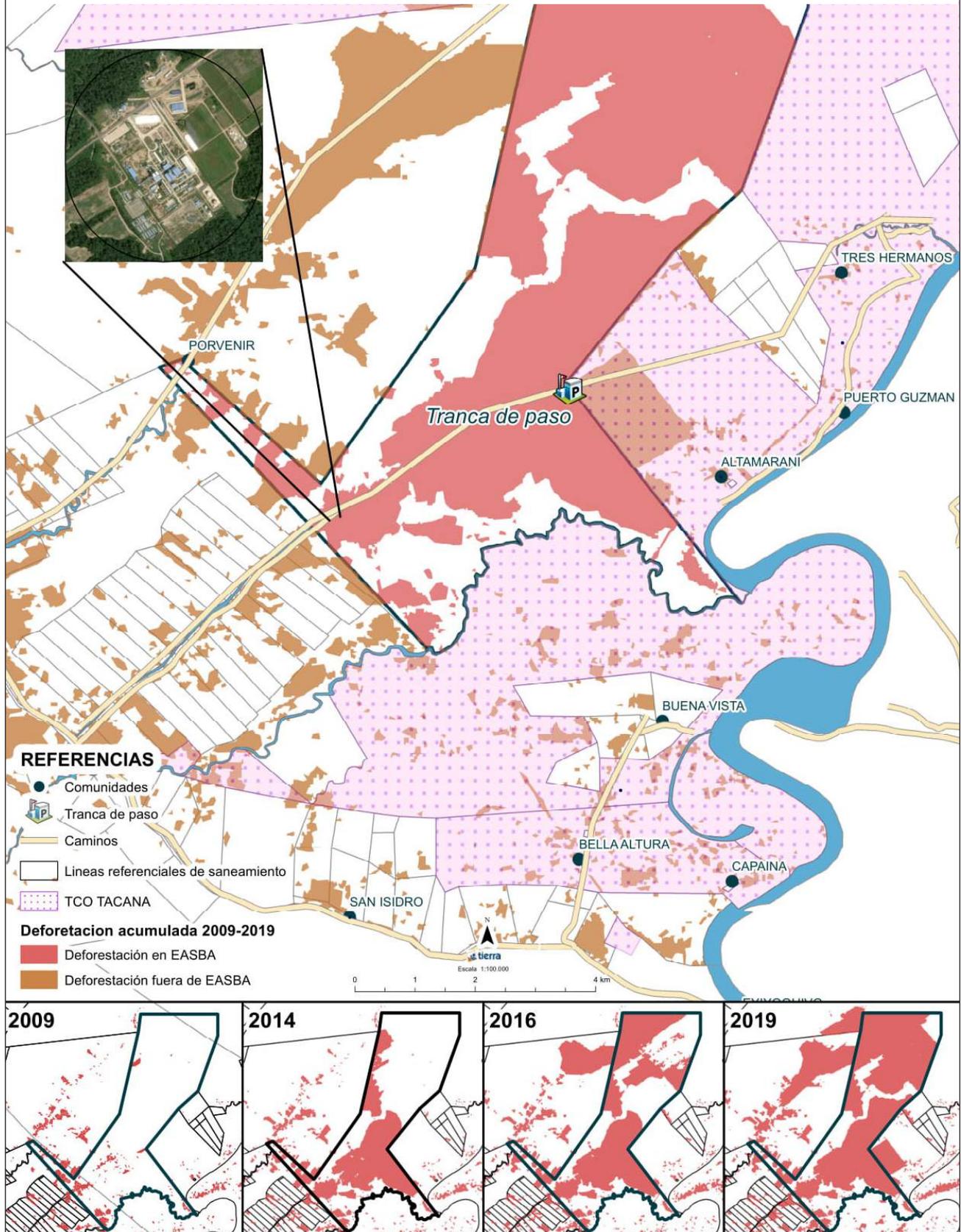
Fuente: TIERRA

Según los datos de la Empresa, actualmente está operando en un 35% de su capacidad proyectada. El mayor impacto de la empresa ya está visible en la masiva deforestación de bosques y la ampliación de la frontera agrícola. EASBA cuenta con un predio propio donde ha plantado hasta 2020 una cantidad de 2.243 ha de caña. Sin embargo, la deforestación que

ha generado es mucho mayor, como se puede ver en el **Cuadro 3** y el **Mapa 5** que resumen la deforestación acelerada en y alrededor de los predios de EASBA hasta 2019.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> En el estudio de Robison (2021: 100) se calcula que “la deforestación para el ingenio, a gran costo por ha, explica aproximadamente un 90% de la deforestación por encima de la tasa “de fondo”, la que existía antes del ingenio”.

**Mapa 7.**  
**Avance de deforestación EASBA en 10 años**





La intención de la empresa es ampliar significativamente la producción en los siguientes años, lo cual significa desmontes de grandes extensiones en comunidades y propiedades privadas en sus alrededores. El Decreto Supremo 1409 del año 2012, modificó la inmovilización de las áreas forestales de la provincia Abel Iturralde y estableció un área de 48.000 ha que podría deforestarse para caña, en un radio de 50 km a la redonda de la Empresa. Luego con el Decreto Supremo 2907 (2016) el área fue ampliada a 97.000 ha en el marco del “interés nacional y utilidad pública la provisión y abastecimiento de caña de azúcar para la Empresa Azucarera San Buenaventura–EASBA” (Robison, 2021).

“...esa planta ha hecho un desmonte inmenso, han barrido todos esos arroyos que existían en esa montaña. Todo eso han hecho y no hay ni un pozo, no hay nada. Cuando empezaron a abrir esto, como salían nuestros pescaditos que llamamos “iche”. Han sacado víbora, lagartito, ¿dónde van a tomar ahora agua nuestros animales? No hay, ellos tienen que ir a otro lado, donde hay arroyo, donde hay río. Pero donde hay río, hay gente, ¿qué animal va a querer ir allí? (...) Porque está asustado que no tiene agua y está asustado que la gente le caza, que le come...”  
(Testimonio de una comunaria, comunidad tacana Altamarani, noviembre 2019).

### ***Vulneraciones ambientales y territoriales***

Las comunidades tacanas en los alrededores inmediatos de la empresa han denunciado varios impactos ambientales, sobre todo por la contaminación por el uso de productos agroquímicos y la emisión de desechos (CIPTA y CIMTA, 2014, pág. 115).



“Hace unos dos o tres años que hemos sufrido bastante de la contaminación del agua, porque desde que ya ha empezado a funcionar el ingenio, sus desagües han corrido por nuestros arroyos, de esos era que nosotros bebíamos, del agua. De ese arroyo nosotros tomábamos, lavábamos, nos bañábamos”  
(Entrevista a comunarias, comunidad Tres Hermanos, noviembre 2019).

“Ese arroyo ahora, si fueran a las riberas del río, de las dos de la mañana, es una humareda tremenda y un olor espantoso por el Río Beni. Porque los arroyos desaguan al Río. Entonces usted va al río a esa hora, y huele un olor, que a las personas nos enferma, nos daña a nuestra salud. Y a las cuatro de la tarde, lo mismo”  
(Comunarias de Tres Hermanos, noviembre 2019).

Los arroyos Maige y Jiruma pasan por la TCO Tacana I y desbordan en el Río Beni. Eran fuentes de agua potable y pesca para las comunidades Tres Hermanos, Altamarani y Buena Vista. En los últimos años, han señalado el deterioro de la calidad de estas aguas. Hay días que el agua baja con color negro o con una temperatura tan alta que no permite tocarlo, los comunarios también mencionan un olor fuerte que causa dolores de cabeza.

Por lo menos en dos ocasiones (2017 y 2019), se registraron muertes masivas de peces en estos arroyos. El CIPTA pidió apoyo a técnicos de universidades y ONGs que en varias ocasiones tomaron muestras de agua que demostraron un alto nivel de contaminación por agroquímicos.<sup>23</sup> También llegaron médicos, con el fin de establecer los problemas de salud.

<sup>23</sup> No hemos podido acceder a la documentación que contiene los resultados de estas muestras

La Empresa hasta ahora se niega a reconocer la relación entre los arroyos contaminados y sus actividades. Incluso cuando los comunarios encontraron frascos con herbicidas de los cañaverales flotando en el agua no dieron respuesta. Desconocieron las evidencias de la contaminación de agua tomadas por el CIPTA, debido a que, según la empresa, no se la considera una instancia “competente”.

“Toda la comunidad, hombres y mujeres en pie hemos ido al Ingenio a hacer muchas denuncias, no varias, muchas denuncias. Ellos prácticamente nunca nos escucharon”  
(Comunarias de Tres Hermanos, noviembre 2019).

A pesar de no reconocer la contaminación, en 2019 la empresa cambió su canal de desagüe. El fenómeno de los peces muertos, que ocurrió en años anteriores en el arroyo Maige, se dio justamente en el arroyo Jiruma de la comunidad Altamarani, donde entraría el nuevo canal de desagüe.

Además de ello, se generaron muchas tensiones cuando EASBA empezó a pedir cédulas de identidad a las personas de las comunidades tacanas que tienen que pasar por el predio de la empresa para llegar a sus comunidades, generando serias vulneraciones a su derecho de libre tránsito:

“Otro problema que tenemos con EASBA es que cerraron el paso de las comunidades Buena Vista, Altamarani, Tres Hermanos (un aproximado de 120 familias), para recolectar sus productos agrícolas y transitar a San Buenaventura. Pusieron una tranca, y piden carnet de identidad a cada persona que quiere pasar. Eso causa indignación en los comunarios, ¿Cómo nos van a pedir carnet en nuestra casa?”  
(Entrevista directorio CIPTA, agosto 2019).

Esta presencia física de la Empresa Estatal en la entrada del territorio tacana, coloca a las comunidades en una situación de vulnerabilidad en cuanto a las posibilidades de hacer valer sus derechos territoriales y ambientales.

Por un lado, porque en un contexto con alta politización del aparato estatal, se han levantado obstáculos estructurales para que las instancias estatales responsables de fiscalizar temas ambientales y de salud cumplan con esa función. A pesar de su limitada rentabilidad EASBA es sostenida por grandes inversiones y un discurso de “desarrollo nacional” por parte del gobierno.

Por otro lado, la organización representativa CIPTA tiene limitaciones para cumplir con su rol de reclamar los derechos de algunas comunidades. Existe la presión, incluso en las comunidades tacanas, de insertarse en el modelo de la caña. Su relación con la gerencia del ingenio es delicada, porque aunque se basa en su facultad de ejercer control territorial como dueños de la TCO, el CIPTA depende del ingenio para recibir beneficios en cuanto a empleos y contratos.



“Hemos hecho una serie de denuncias, pero no hemos tenido una respuesta adecuada de las autoridades competentes. ¿Porqué? Porque probablemente no quieren involucrar la imagen de una empresa estratégica como se llama, que sea en beneficio de tantas cosas, probablemente sea eso. Se nos ha vuelto cada vez más difícil tener respuesta frente a nuestras demandas”  
(Dirigente CIPTA, noviembre 2019).

La sensación de abandono que experimentan estas comunidades se ve reflejada en su percepción del poder de la empresa:

“Nosotros no tenemos tanto poder como ellos (del ingenio) porque he escuchado que ellos tienen 30 abogados para tocar un tema. Entonces nosotros podemos conseguir solo un abogado y contra 30 abogados no podemos. Aun así, si nos uniéramos las comunidades, no podríamos contra sus abogados de ellos. Por más que le hagamos demandas y denuncias y un montón de cosas, ellos nunca nos van a escuchar. Es como si nosotros no existiéramos. Ellos lo toman como si no existiéramos en el mapa”  
(Testimonio de una comunaria, comunidad tacana Altamarani, noviembre 2019).

En este contexto los actores locales mantienen pocas expectativas de lograr alguna solución por las vías institucionales a sus problemas, lo cual contribuye en mantener un espiral negativo de la conflictividad y desinstitucionalización.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> La situación de estas comunidades está relatada en detalle en una crónica publicada por la Fundación Tierra en mayo de 2021: <https://ftierra.org/index.php/opinion-y-analisis/982-tres-hermanos-comunidad-indigena-amenazada-por-azucarera-estatal>

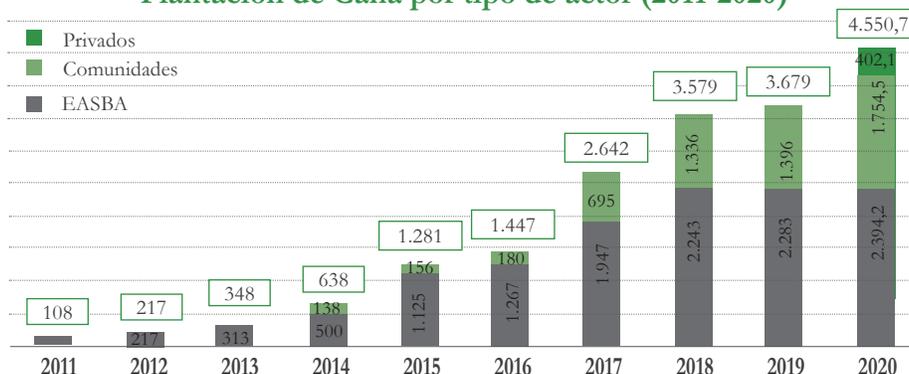


### ***¿Producir la caña? Incertidumbre y exclusión***

A medida que van pasando los años de operación de la empresa, aumentan las tierras destinadas a la producción de caña de azúcar en toda la provincia Abel Iturralde. La participación de las comunidades está reflejada en el Gráfico 3 presentado por EASBA en su rendición de cuentas de 2020:

“(…) pero lo que aquí esperábamos pues es poner siquiera unas dos hectáreas de caña, o uno o dos, y cortar, llevar, pero ha sido un poquito imposible eso. No sé cómo está ahorita, pero para lo que es mecanizado, deberíamos tener mínimo 10 hectáreas, y así que estén vecinos, otros, para que la maquina venga y pueda hacer ese trabajo. Pero por 2 hectáreas no me van a traer la máquina”  
(Agricultor de la comunidad intercultural Colorado, septiembre 2019).

**Gráfico 3.**  
**Plantación de Caña por tipo de actor (2011-2020)**



Fuente: EASBA, 2011

Se puede notar el aumento de la participación de las comunidades. Sin embargo, esta inclusión no cumple con las expectativas de la población local, en especial el sector intercultural que esperaba más beneficios. No perciben que la empresa priorice el trabajo con comunidades; el hecho de que el Estado otorgó más tierras a la Empresa en el predio PROINSA, en vez de promover la producción en las comunidades, ha generado rechazo:

“No sé porque al Ingenio les da tierra en PROINSA el Gobierno. No sé si le están dando, o titulando, o regalando o prestando, no sé eso. La verdad nosotros queríamos que venga el Ingenio para que nos de trabajo y empleo y para que nosotros produzcamos, ¡no para que él venga y se produzca solito! Es una cosa insulsa”  
(Mujer intercultural de Fespai, Tumupasa, octubre 2020).

A su vez los productores, tanto tacanas como interculturales, sienten inseguridad sobre la viabilidad de incursionar en este rubro ya que muchas familias lo han intentado sin éxito. Esta situación tiene que ver con la principal modalidad de trabajo de EASBA con las comunidades y productores individuales, que es la agricultura por contrato y alquiler de tierras.

Al inicio de la siembra, los agricultores contraen una deuda considerable con la empresa. El costo que establece la empresa por hectárea es 4.000 USD. Bajo la modalidad de la agricultura por contrato, la empresa realiza todo el trabajo de preparar la tierra, sembrar, y cosechar, pero el costo se descuenta de las ganancias del productor. En la modalidad “100-0” el dueño entrega la tierra y deja que la empresa haga todo el trabajo. Recién se empiezan a generar beneficios cuando la deuda se paga. Otra modalidad es de es de “80-20”, esto quiere decir que del total de los ingresos generados por la cosecha anual un 80% es para la empresa, el resto para el dueño de la tierra, que sí realiza algunas labores de manejo. Los contratos son para cuatro a cinco años en los cuales pueden variar considerablemente el nivel de ganancia de cada productor, dependiendo de la calidad y cantidad de la producción y el nivel de deudas acumuladas.

Se constató varias **vulnerabilidades** generadas en la población, bajo este modelo: primero, es un proceso excluyente, en el sentido que EASBA prefiere trabajar con campos de cultivos de más de 10 hectáreas. Esto les permite operar con sus máquinas y hacer un desmonte rápido y no incurrir en mayores costos de transporte.



Sin embargo, una gran parte de la población intercultural esperaba vender caña de manera independiente, manualmente y en una cantidad reducida. Tanto dirigentes campesinos como autoridades municipales, confirman que EASBA no apoya esta modalidad más autogestionada, y prefiere comprar caña bajo sus condiciones y contratos.

“Hemos sembrado caña también. Nos han traído aquella vez. Y cuando vino la empresa, los ingenieros, nos rechazaron eso: esa caña no sirve dicen. La caña tiene que ser lo más delgado dicen. Pero cuando han venido otros a calificar tiene 2.5 puntos de sacarosa han dicho. ¡Pero los de la empresa ya nos anula! Entonces hay una manipulación, creo que es una política. (...) así nos han decepcionado, hemos trabajado y pues los surcos rendían buena cantidad de caña, iba de lo mejor”  
(Comunario de comunidad intercultural Colorado, septiembre 2019).

Segundo, la agricultura por contrato lleva a los agricultores familiares a la especialización en la producción de un solo producto, con los múltiples riesgos, en particular respecto a la seguridad alimentaria. Es un tipo de agricultura con dependencia muy alta de una sola empresa, los campesinos están obligados a vender su producción a EASBA; quien exige que las entregas cumplan con parámetros propios de la Empresa en cuanto a la cantidad y calidad y otras exigencias.

Esta dependencia se vuelve más problemática en el marco de la inseguridad sobre la calidad de los suelos en la provincia para producir caña. Varios estudios han advertido sobre la baja calidad de estos suelos para un a producción a gran escala.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Un estudio de los suelos realizado en 2009 (Vargas Rojas 2009) señala que en la zona existen 0% de suelos aptos para el cultivo de la caña. El 9,9% es moderadamente apto y el

EASBA exige firmar contratos por cinco años y grandes cantidades de tierra destinadas a este rubro, pero no ofrece información segura sobre cuantos años serán rentables estas tierras bajo este modelo intensivo de producción. Los mismos productores locales, basándose en el conocimiento propio que tienen de sus suelos, proyectan que el cultivo de caña no será viable durante muchos años, por lo que no sería sostenible convertir todas sus tierras productivas en cañaverales.

“En el Ingenio, el gerente pone pues clausulitas que parecen lindos los números, pero legalmente pensando lo bien... para ellos nomás es el trabajo. Para vos nomas voy a trabajar y me vas a dejar la tierra flaco y listo, le ha dicho mi esposo al gerente. Estoy bien nomas como estoy, le ha dicho”.

“Hay un convenio que los tres primeros años es para el ingenio, en los últimos dos años para el dueño recién es ganancia. Para muchas personas no les convienen porque en los últimos años la tierra ya está cansada y no produce bien”  
(Reunión de mujeres interculturales de Tumupasa, octubre 2019).

Tercero, la misma incertidumbre y desilusión ocurre en cuanto a la generación de empleos.

---

89% es marginalmente apto para el cultivo de la caña. Además: “Es evidente que, bajo las condiciones climáticas y edáficas actuales, en los primeros cuatro años de producción se logrará rendimientos entre 40 y 55 t/ha de caña de azúcar con un contenido de sacarosa interesante. Sin embargo, dada la naturaleza de los suelos y las condiciones climáticas del área de estudio, y bajo las características de monocultivo de la caña, el pH disminuirá y se volverá más ácido, por lo que la fertilidad natural del suelo sufrirá un decremento drástico, lo que repercutirá en el sistema de producción (Vargas Rojas, 2009, pág. 29).





La población local esperaba contar con muchas nuevas oportunidades de empleo por la presencia de la planta azucarera. Sin embargo, ahora experimentan dificultades en acceder a puestos.

“Tenemos también ya el ingenio azucarero, que no está dando tanta fuente del trabajo como se pensaba. Porque hace años atrás, todo era manual, en Santa Cruz, en Bermejo, todo era manual, se ocupaba mucha mano de obra de la gente, pero hoy ya no, casi la mayoría es mecanizada. Para la siembra, para la cosecha, para todo eso es mecanizado. (...) entonces de ese modo ha reducido también la esperanza de que pensábamos que allí sí iba a haber una fuente de trabajo, pero no tanto”  
(Agricultor de la comunidad intercultural Colorado, septiembre 2019).

Además, la mayor generación de empleo se da durante la temporada de la zafra, para mano de obra no calificada y con contratos de solo tres meses, lo que permite evitar el pago de aguinaldos y otros derechos laborales. Incluso en este periodo el empleo no es exclusivamente para la población local, también vienen trabajadores de otras regiones del país, lo que genera críticas en las comunidades.

### ***División dentro de comunidades***

La posibilidad de entrar en el rubro de la caña alienta a varias familias y genera preocupación en otras. Tanto en comunidades interculturales como tacanas en el municipio de San Buenaventura existen posiciones diversas. Las familias convencidas empiezan a formar Asociaciones de Cañeros y hacen contratos con la empresa para sus tierras familiares, y en algunos casos comunales. Incluso hay un elemento generacional, cuando los y las jóvenes se ven animados por la perspectiva de ingresos monetarios relativamente altos e impulsan para seguir dedicando más hectáreas a la caña.

“Con mi papa hemos avanzado en nuestra parcela con 20 hectáreas de caña. Los jóvenes de la comunidad queremos usar las tierras comunales también para hacer un contrato con la empresa. Algunas familias lo ven con preocupación”  
(Comunaria de comunidad intercultural 7 de diciembre, octubre 2020).

“En la comunidad hicimos una asociación de cañeros con 19 familias. Las otras familias no han querido, pero yo quiero que se beneficien todos”  
(Corregidor de la comunidad tacana de Altamarani, octubre 2020).

Muchas veces las generaciones mayores son las que se oponen al rubro argumentando la afectación ambiental y por la dependencia económica que genera la empresa.

“Ya no podemos producir como antes. Tenemos nuestro chaco al lado de los cañaverales. Sembramos hortalizas se nos seca. Cuando llueve por demás rebalsa, nosotros nos damos cuenta de que todo el químico que ellos usan, eso afecta a nuestros cultivos. Mucho insecto nos ataca, los bichos vienen a nuestro chaco. Nosotros no usamos agroquímicos... Ya no hay esa libertad de sembrar”  
(Comunaria de la comunidad tacana de Altamarani).

Estas tensiones internas se vuelven más complejas cuando la empresa entra al escenario con promesas de mejoría para las comunidades. En varias comunidades no solo ha prometido la generación de ingresos económicos, sino también la apertura o mejora de los caminos secundarios que llevan a las comunidades, e incluso la gestión de proyectos de servicios básicos como electricidad o agua potable.





Actuando así, mezclando sus intereses empresariales con la responsabilidad estatal de cumplir con necesidades básicas, genera un clima confuso en el que las comunidades se ven forzadas a elegir entre las promesas de inclusión en el “desarrollo” o la exclusión de ser atendidos en sus derechos básicos.

### Conflictos entre comunidades y con dueños privados

Los tratos y acuerdos diferenciados que existen con EASBA también generan tensiones entre comunidades por la escasa transparencia sobre las condiciones de los contratos de la empresa con los pequeños productores. EASBA negocia directamente con productores individuales o en algunos casos con comunidades, y así relega a las organizaciones representativas como CIPTA y FESPAI a un lugar marginal en la gestión de estos conflictos comunales.

Además, con las dificultades de los pequeños productores locales de la región, que quieren incursionar en el cultivo de caña, es inevitable la llegada de actores privados que buscan beneficiarse. Las tierras anteriormente destinadas al manejo forestal o la producción de alimentos, se están convirtiendo en monocultivos de caña. Esta conversión genera afectaciones por el uso de químicos, la deforestación y por el incremento de camiones de la empresa en los caminos locales lo cual provoca malestar entre comunidades vecinas.

“Aquí al lado las tierras son de un ruso. Antes no le vimos mucho pero este año ha sembrado caña y todo el tiempo estamos con el olor de las fumigaciones. Ahora la comunidad de Tahua que está a algunos kilómetros también se ha incursionada en la siembra de caña y todo el día pasan camiones. El polvo es insoportable”  
(Comunario de la comunidad tacana Nueva Esperanza, octubre 2020).



Los escenarios futuros de EASBA no son seguros. Las dificultades de generar rentabilidad en corto plazo como empresa y las inseguridades sobre la viabilidad de los pequeños productores en la provincia, genera un panorama complejo. Entre otros, existe el escenario posible de que su área de producción se traslade cada vez más hacia el Beni, involucrando a tierras que ahora son ganaderas (Robison, 2021).

Aún con esta inseguridad sobre su continuidad, la empresa EASBA ya está generando una ampliación de la frontera agrícola en la provincia Abel Iturralde, con afectaciones concretas a los medios de vida y la convivencia comunal.

La ausencia de políticas públicas claras en cuanto a planificación territorial y productiva, además de las deficiencias de fiscalización ambiental, generaron una situación en que las incertidumbres de la población local no son atendidas. Esta incertidumbre, basada en complejas interacciones de intereses, necesidades y preocupaciones, llevará inevitablemente a nuevos escenarios intensos de conflictividad abierta y latente en la región.<sup>26</sup>

## 2.4 TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL Y NUEVOS ESCENARIOS DE CONFLICTIVIDAD

Los conflictos territoriales y ambientales analizados en este documento tienen algunas características en común, que con probabilidad marcarán también los escenarios de conflictividad en el corto y mediano plazo:

<sup>26</sup> En 2021 se inició el año en con un bloqueo de varios días del puente entre Rurrenabaque y San Buenaventura, organizado por varias organizaciones locales, incluyendo CIPTA y FESPAI, con la exigencia de la destitución del gerente, expresaron su descontento sobre la falta de cumplimiento de la empresa a cuanto al empleo y apoyo a la producción local.

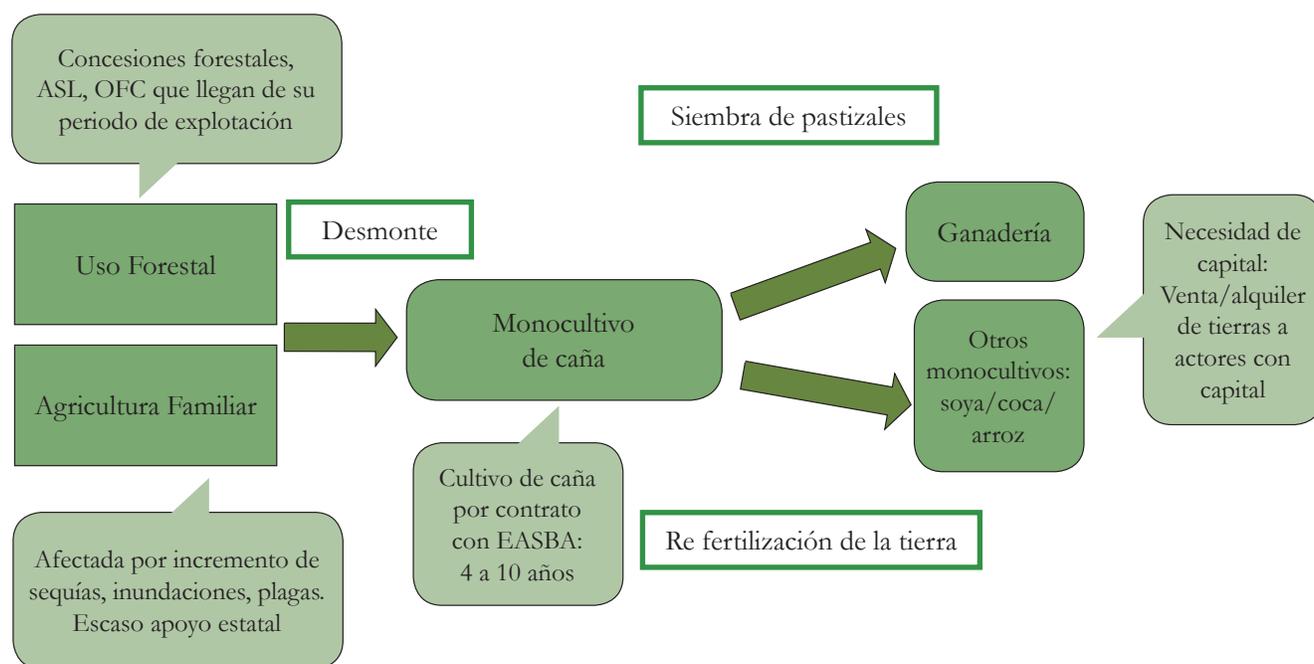
- No se han realizado o se han llevado a cabo con deficiencia, procesos de consulta previa, libre e informada a las poblaciones involucradas y afectadas.
- El Estado actuó con poca transparencia en las decisiones y no prestó atención a los acuerdos o propuestas de los actores locales.
- Los conflictos y su gestión fueron influidos por dinámicas políticas partidarias, que generaron cooptación en las organizaciones locales, conduciendo a la división, contradicciones internas y el debilitamiento del tejido organizativo.
- La implementación de los proyectos fue caracterizada por retrasos y deficiencias en su gestión administrativa e incluso fracasos en varios casos.
- La fiscalización de los impactos ambientales por parte de las instancias estatales ha sido inexistente o deficiente.

Con la introducción del monocultivo de la caña y las dificultades en el sistema de agricultura familiar y el declive en los ingresos por madera, la región ya está viviendo el cambio de uso de suelo y del modelo de desarrollo productivo. Este cambio se acelerará si se concretiza el proyecto de la nueva carretera, con los tramos Apolo-Tumupasa e Ixiamas-Chivé. En este escenario, se presentará una nueva ola de desmontes para la agricultura y la ganadería, justamente en las zonas de alta fragilidad ecológica.

Cuando se ignora la complejidad de la relación suelo-bosque-agua-clima y se estimula, con inadecuadas prácticas, los procesos de lateralización, lixiviación y erosión de los suelos; estos pierden su productividad y se corre el riesgo de generar la expansión desordenada de tierras abandonadas por campesinos que salen en busca de otras (Porto Gonçalves 2018, pág. 68-70). Tanto tacanas como interculturales ya señalan con gran preocupación el deterioro de los caudales de agua.



**Gráfico 4.**  
**Transformaciones en el uso de la tierra**



Fuente: Elaboración propia.

Considerando las limitaciones en la sostenibilidad de la producción de la caña, los actuales cañaverales proyectan ser la antesala de nuevos hatos ganaderos en el Norte de La Paz.<sup>27</sup> Estos cambios en el uso de la tierra, impulsarán nuevos ciclos de deforestación para ampliar los cañaverales y pastizales.

Además, las limitaciones que enfrentan las comunidades campesinas e indígenas para generar agricultura o ganadería familiar rentable, facilitan la entrada de empresarios para comprar o alquilar tierras de pequeños productores, como ocurre con la soya en el oriente de Bolivia; incluso, facilita el acceso a tierras fiscales, a través de influencias políticas.

En algunas comunidades interculturales, ya se han realizado ventas de tierras que ahora están siendo cultivadas con caña por empresarios individuales. Los fenómenos como alquiler de tierras, acaparamiento de tierra, agricultura por contrato, son fenómenos propios de los procesos del extractivismo agrario.

En estas nuevas configuraciones de propiedad, control sobre la tierra y los recursos, es aún más difícil para organizaciones como CIPTA y FESPAI, mantener vigente su poder de control territorial. En el siguiente capítulo se indagó las condiciones en que se reconfiguran también las relaciones de poder entre estos sectores locales.

<sup>27</sup> “Como somos una nueva organización, una asociación multiactiva, debemos cambiar la mentalidad y debemos diversificar la producción, si haces un análisis nacional e internacional, una vez que explotemos la caña, la idea es convertir estas tierras en tierras ganaderas” afirmó exviceministro de coca y exdirigente campesino de Los Yungas, Félix Barra (Agencia de Noticias Fides (ANF), 2018).

# 3 TRANSFORMACIONES DE CONVIVENCIA, PODER E IDENTIDAD ENTRE EL PUEBLO TACANA Y EL SECTOR INTERCULTURAL

En el análisis de la conflictividad socioambiental, en los capítulos anteriores, se ha vislumbrado cómo los cambios en los modelos agrarios de tenencia y uso de la tierra llevaron a los actores principales de la provincia Abel Iturralde a una serie de enfrentamientos y acercamientos. En este capítulo se busca profundizar en los procesos internos que se dan principalmente dentro del sector tacana y del sector intercultural, así como en las interacciones entre ellos. En una intención de abrir algunas capas desde lo visible, hasta lo oculto y lo invisible, se comenzó con los escenarios donde se generan las interacciones. Se abordó el rol particular de las mujeres en estos procesos. Luego se analizó las nuevas asimetrías de poder y se cerró con algunas ideas preliminares sobre los cambios y desafíos que enfrentan las nuevas generaciones.

## 3.1 TACANAS E INTERCULTURALES: ESCENARIOS PARALELOS DE CONFLICTIVIDAD Y CONVIVENCIA

En esta sección se analiza con más detalle el contexto detrás de estas interacciones, tomando en cuenta un conjunto de factores estructurales y acontecimientos únicos y temporales. Para hacerlo se identificó tres escenarios en que las relaciones entre ambos sectores se construyen



paralelamente: 1) el escenario visible, 2) el escenario oculto y 3) el escenario cotidiano (basados en (Goffman, 1959).

### ***El escenario visible: Alianzas formales entre CIPTA y FESPAI***

La relación entre CIPTA y FESPAI se caracteriza cada vez más por la necesidad de aliarse frente a los nuevos actores que pretenden jugar un rol en el acceso y el uso de los recursos de la región.

Los esfuerzos para entablar cierto nivel de alianza y diálogo entre las dos organizaciones, ya llevan más de 20 años. En los años 1990 y 2000, en medio la conflictividad sobre el acceso a la tierra en la región y el saneamiento legal, ya se dieron los primeros acercamientos. Según los representantes de CIPTA no ha sido fácil construir esta relación, pero con los años se ha logrado un avance importante.

“En un principio, ellos estaban oponiéndose mucho al tema del territorio, de la titulación de la TCO, querían ellos mandar, ordenar. Entonces no pudimos, teníamos muchos problemas en poder llegar y discutir para que ellos puedan entender que era lo que queríamos los Tacanas.” (...) Al fin ellos han podido entender y bueno, hoy en día creo que nos llevamos de la mejor manera. A través de otras gestiones de otros dirigentes han hecho unos convenios de pacto de unidad. Que eso se sigue manteniendo en el tema de consolidar los territorios, así como para ellos como para nosotros”  
(Dirigente CIPTA, septiembre 2019).

De la misma forma los dirigentes de FESPAI recuerdan las dificultades para establecer esta confianza política:





Era un poco extraño. Como siempre cualquier gente no da la confianza. Ni usted no puede dar confianza conmigo, ni yo tampoco. (...) Nos conocemos bien entre nosotros, posteriormente, en qué forma actuamos, después de eso ya hay – ya está allí como confianza. Así viéndonos bien, internamente así conociéndonos bien, la gente es buena gente para mí”  
(Comunario comunidad intercultural Corazón de Leon, noviembre de 2019).

“Con CIPTA no se lleva bien, siempre momentos se hace, momentos se separan, hay racismo, que no se puede coadyuvar, no se puede tomar acuerdos, se retractan en cualquier rato. Entonces siempre hay esa discriminación. Nosotros somos venidos y ellos son los legítimos de estos lugares. Los venidos que se vayan a sus lugares, ¿no? Entonces estas cosas siempre nos separan, no hay acuerdos mutuos, por eso que no podemos avanzar nada”  
(Comunario comunidad intercultural Colorado, septiembre de 2019).

A pesar de estas dificultades, el discurso oficial de ambas organizaciones presenta cambios sustanciales. En particular de CIPTA ya no trata a FESPAI como organización invasora, si no como actor local legítimo, que ha ganado sus derechos por las décadas de presencia en la zona.

Esta alianza se ve reflejada también en el escenario político local, donde siempre son las dos organizaciones las que son convocadas a las reuniones de coordinación con las alcaldías o en el marco de proyectos de desarrollo.



Por ejemplo, el Subcalde de Tumupasa, representante del pueblo Tacana, llamó en diferentes ocasiones a “Ampliados de Unidad” a nivel municipal, para limar diferencias y “definir proyectos de beneficio común”.

Este reconocimiento mutuo de la legitimidad política, se expresa con mayor énfasis en el nivel formal de representación hacia el Estado Nacional, donde para ambas organizaciones es importante posicionarse como los únicos actores relevantes de interlocución. En este marco, hay que entender el acuerdo de apoyarse en momentos de movilización. Por ejemplo, en 2019 CIPTA apoyó a FESPAI cuando ocupó las oficinas de ABT en protesta contra la pausa ecológica que se había proclamado a nivel nacional después de la ola de incendios forestales de ese año. Llama la atención que a pesar de las críticas del sector Tacana sobre los chequeos del sector intercultural, en esa ocasión se adhirieron a sus reclamos en contra de la prohibición.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> <https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/9/4/toman-oficinas-de-la-abt-en-ixiamas-por-chaqueos-229749.html>

La necesidad de reafirmar y delimitar la legitimidad de estas organizaciones como estrategia común frente a las nuevas organizaciones que se hacen presente en el escenario, ha sido un elemento fundamental en los acuerdos que firmaron entre CIPTA y FESPAI sobre las tierras de PROINSA. En la demanda conjunta de 2012, las dos organizaciones ponen mucho énfasis en rechazar la otorgación de derechos territoriales a la CTUCB-Túpac Katari, señalando a esta tercera organización como actor ilegítimo.

En esta construcción discursiva de la legitimidad y la no-legitimidad, pesan dos elementos:

- La falta de formalidad y de respeto que muestran estas nuevas organizaciones a los actores antiguos, incluso tratando de reclutar a miembros de sus filas.
- La reciente aparición de estos actores cuando ya se han facilitado las condiciones de vida en la provincia, con carreteras, puentes, servicios básicos, etc., lo que quiere decir que no ganaron su “derecho de piso”.

En palabras del dirigente del CIPTA: “La Túpac Katari aparece recién hace unos años, pero de manera simbólica tratando de conquistar actores en la zona, por lo tanto, no era reconocida por nosotros ni por la FESPAI” (Dirigente CIPTA, noviembre de 2019). Un dirigente de FESPAI marca la diferencia entre su relación con

“Ellos (CIPTA) nos respetan. Si nosotros queremos agarrar un lugar donde ellos no han demandada, dicen está bien, ustedes pueden hacer. Pero también de la misma manera, nosotros tenemos que respetar lo que ellos tienen sus demandas. Pero el único problema es con organizaciones que ni siquiera eran de aquí, ni siquiera aparecían, ni siquiera han luchado, que en realidad no saben cómo ha sido el asentamiento” (Dirigente FESPAI, septiembre 2019).

CIPTA y con estos nuevos actores:

Es interesante resaltar que esta alianza formal dio resultado en el sentido que los actores externos efectivamente los ven unidos, como afirma esta mujer de la organización Bartolina

“Aquí hay un poco de desunión. Interculturales, Tupak, hay Bartolinas, hay de todo. No solo interculturales viven aquí, ni CIPTA. Porque CIPTA e interculturales se han unido los dos. Siguen unidos, pero Tupak y Bartolinas no quieren reconocer” (Dirigente bartolina sisas, Ixiamas, septiembre 2019).

Sisa de Ixiamas:

Entonces el reconocimiento exclusivo entre FESPAI y CIPTA en el escenario formal resulta ser una estrategia fundamental para marcar los límites del territorio frente a actores externos que quieren acceder a ocuparlo.



## ***El escenario oculto: pugnas, pirateo y asentamientos***

A pesar de que para la representación formal hacia el Estado, CIPTA y FESPAI enfatizan la alianza, existe otro escenario más oculto, en el que siguen vigentes los conflictos sobre el acceso, el uso de la tierra y los recursos naturales. Este escenario se caracteriza por la informalidad y la irregularidad, lo cual hace que la conflictividad se manifieste de forma desordenada.

**La explotación de la madera** es uno de estos ámbitos donde, paralelamente, a la actividad legal existe un escenario informal e ilegal de extracción, que se denomina como “piratería”.

Hoy en día existe un sistema complejo de diferentes formas legales e ilegales de extracción de madera en la provincia Abel Iturralde. Para la TCO Tacana I la tala ilegal de árboles en el territorio es uno de los problemas más grandes. Por el gran tamaño, la fragmentación y la poca accesibilidad de partes del territorio es difícil consolidar mecanismos de control territorial permanente. Para actores externos es fácil ingresar a la TCO para talar árboles sin tener que pasar por los lugares donde están las comunidades tacanas. Pero también habitantes de la misma TCO recurren a estas prácticas para generar un dinero rápido y fácil, evitando los trámites costosos y duraderos para los planes de manejo. Así crean una competencia desleal a las OFC y generan una fuente de conflictividad permanente en el pueblo tacana (CIPTA y CIMTA, 2014, pág. 163).

Cuando se ejerce el control territorial desde CIPTA o desde las comunidades, se enfrentan con los hechos de la tala ilegal ya consumados. En general es difícil establecer quienes han sido los autores, lo que resulta en acusaciones mutuas entre comunidades tacanas e interculturales basadas en sospechas.





La capacidad de control de la instancia estatal ABT, también es mínima. El tamaño de la provincia, la difícil accesibilidad de muchas zonas, y el personal reducido, son factores que limitan esta capacidad. Existen muchas formas ilegales de aprovechar la madera. No sólo ocurre el saqueo ilegal de madera por actores sin ningún permiso, también existen actores que aprovechan sus planes de manejo forestal para explotar maderas fuera de la zona autorizada. “Hay explotación de madera legal, ilegal y también legal de verdad ilegal. Lo que pasa es que sacan un certificado para sacar y vender de forma legal de una zona, pero sacan o compran de otra zona y lo venden bajo el certificado” (Entrevista funcionario público, Tumupasa, agosto 2019).

El otro escenario donde la conflictividad se ha desarrollado de forma más caótica y violenta es **en los asentamientos irregulares**. El asentamiento irregular es una estrategia que busca la ocupación afectiva de los predios en demanda, para garantizar su acceso en una situación donde no hay propiedad legal (todavía). En el capítulo 2 se ha identificado que en el caso PROINSA varios sectores recurrieron a esta estrategia; es llamativo que usen como

“Mire, nosotros siempre hemos tenido una política de no hacer asentamientos mientras que no tengamos consolidado. Pero veíamos como había una agresividad de otros sectores de ir posicionándose, entonces hemos dicho: bueno, entonces asíéntense en el territorio. Finalmente, si no lo tenemos, también van a decir: Ah no, ¿para qué obtienen la tierra? Porque eso es un argumento que se maneja” (Dirigente CIPTA, noviembre 2019).

argumento el quehacer de otros actores:

Entre CIPTA y FESPAI existe un acuerdo de división sobre este territorio lo cual también han respetado en los asentamientos irregulares, pero los problemas surgieron cuando otros sectores empezaron a incursionar también en el área.

“En 2018 había **conflictos violentos por los avasallamientos de interculturales y Túpac Katari**. Con FESPAI había acuerdo de convivencia, pero por llegada de los Túpac Katari ya no respetaban estos acuerdos. Los Túpac Katari empezaron a entrar en ambos lados. Algunos indígenas ya fueron a sacarles con violencia, las FESPAI no quería ayudar. Terminaron quemando casas de Tacanas”  
(Dirigente CIPTA, entrevista mayo 2019).

En varias ocasiones los enfrentamientos entre los sectores en el lugar de los asentamientos implicaron violencia física. No solo en el área de exPROINSA, también en otras áreas se dieron incidentes de esta índole. En este escenario CIPTA toma una posición fuerte de control y defensa territorial.

“¿Sabes que es lo que ha pasado? En este momento electoral, lo que se está haciendo es canje de voto por tierra. Se han organizado comunidades, se han hecho censar comunidades en El Alto. Ni siquiera in situ. Entonces lo que hemos tomado una decisión nosotros, es que no les vamos a dejar ingresar. Y allí, como no hemos podido por la parte diplomática, por la parte legal, nosotros vamos a posesionarnos pues y no dejar ingresar. Y para ingresar allí lastimosamente tienen que atravesar nuestro territorio. Y en nuestro territorio nosotros somos soberanos para no dejar ingresar. Entonces va a ser una pulseta muy dura en el futuro”  
(Dirigente CIPTA, noviembre 2019).





La alianza que mantienen ambas organizaciones en el escenario formal se ve debilitada por este escenario oculto de las pugnas por los recursos en el terreno mismo. La presencia activa de actores terceros en el terreno y la ausencia de mecanismos de resolución desde el Estado, influyen negativamente en las condiciones de la alianza.

### ***El escenario cotidiano: la convivencia***

“Como pues ellos te enseñan pues como puedes sobrevivir. Hasta animal salvaje, mira: tatú, carne de jochi, o sea sin querer queriendo, tú tienes que probar pues.

Entonces si o si llegas a su casa, mira te hablan castellano, vos llegas, te dan su comida si no te alcanza. ¿Qué es esto?

Pero en tu vida nunca habías probado. En la siguiente que vaya saliendo digamos de viaje, tú vas a regresar por el mismo camino digamos. Te has traído de La Paz, carne de cordero, algo lo que nunca han probado ellos, tienes que invitarles pues.

En esa forma más o menos te vas comunicando”

(Secretaria Vocal, comunidad intercultural Corazón de León, noviembre 2019).

Las más de cuatro décadas de convivencia entre el pueblo Tacana y las comunidades interculturales, generaron varias dinámicas de integración cotidiana, desde la educación, el deporte, el comercio, la comida, las fiestas y hasta la integración interfamiliar.

En los colegios en San Buenaventura, Tumupasa e Ixiamas los estudiantes tacanas e interculturales comparten las aulas. Varias escuelas trabajan con un componente bilingüe e intercultural basada en la cultura y el idioma tacana, donde también se enseña a los alumnos interculturales de origen quechua y aymara.

El Instituto de Lengua y Cultura Tacana (ILC), se encarga de enseñar a los profesores que en su mayoría no son del lugar los elementos culturales que necesitan traspasar a los alumnos.

“En este núcleo referencial, tenemos mucha cantidad de maestros del altiplano.

Por lo tanto, apoyamos con talleres, no. Y hay maestros que vienen trabajando ya de cinco años hacía arriba, muchos años. Entonces no es muy difícil, pero están en la adquisición de la lengua Tacana, no. En estos talleres estamos dando comunicación oral y escrito en lengua Tacana”  
(Director de ILC, Tumupasa, septiembre 2019).

La educación es también en sí un factor muy relacionado a la migración de las familias jóvenes, de carácter temporal o permanente, desde las comunidades a los centros poblados. En la mayoría de las comunidades tacanas e interculturales existen escuelas primarias, pero para la educación secundaria es necesario enviar a los hijos a Tumupasa, Ixiamas, San Buenaventura o Rurrenabaque. Entonces cuando los hijos llegan a esta edad, es común que las familias se trasladen parcial o completamente y entren en una dinámica de doble residencia, no abandonando por completo la comunidad. Esta situación en general, implica más gastos familiares que la vida en la comunidad, lo cual también pone más presión para generar actividades económicas de mercado. Es en esta convivencia cotidiana en los centros poblados, los colegios secundarios y las actividades económicas donde ocurre la mayor interacción entre las familias tacanas e interculturales.

Las fiestas y celebraciones culturales locales también llevan la marca de la cultura tacana en muchas ocasiones, pero a la vez son un espacio de integración entre varios sectores.





El Subalcalde de Tumupasa reafirma la importancia de estos espacios para establecer un cierto poder cultural, donde se busca garantizar que las nuevas generaciones conozcan y valoren la cultura y el idioma tacana.

“Pero los jóvenes interculturales ya saben muchas cosas de los Tacanas, hablan Tacana. Las Veladas en Tumupasa son Tacanas, no permitimos otras danzas. Los proyectos productivos en los colegios tienen que ir hacia preservar la lengua y la cultura Tacana. Pero poner esta línea, cuesta. Siempre hay que vigilar”  
(Subalcalde Tumupasa, agosto 2019).

Otros espacios de organización donde se mezclan los sectores de forma cotidiana son los mercados, los espacios de organización barrial como OTB, las ASL, las OFC, y los sindicatos de transporte y de comercio.

Inevitablemente estas interacciones en diferentes espacios llevaron a la integración también a nivel de las familias, a través de relaciones de pareja mixtas. Las generaciones más jóvenes que han crecido juntos perciben cada vez menos limitaciones para juntarse entre ellos. Un dirigente sindical de los interculturales lo percibe como una realidad inevitable y natural:

“Ellos casi son como nosotros, más porque vivimos, hemos llevado casi los mismos (...). No con todos. Hay algunas personas que son muy radicales. Que siempre ellos defienden su cultura, la clase, el idioma que ellos quieren hacer respetar. Pero nosotros respetamos a las decisiones que ellos tienen y también nos respetan a nosotros. Y tenemos buenas relaciones nada más con ellos. Hay algunos que son tan radicales que no quieren, pero ya no es como antes. Nuestros hijos, o nuestras hijas, están con sus hijos o sea ya no hay tal...

(SK: ¿se enamoran?) Claro, así están. Por ejemplo, en la comunidad 25, el amigo es de Sucre, pero el yerno ya es de Tumupasa. No hay más pues, nuestros hijos e hijas están pues en el mismo colegio en Tumupasa”  
(Dirigente sindical intercultural, septiembre 2019).

Sin embargo, el pueblo Tacana consciente de los peligros de una pérdida identitaria, tiene una mirada más crítica a esta tendencia. En específico la llegada de yernos interculturales a las comunidades tacanas, no siempre es bien visto, debido a que las formas diferentes de percibir la tierra y la organización pueden llevar a conflictos o apropiación de los espacios comunales.

“Las personas en las comunidades (yernos, etc.) quieren hacer como ellos saben y cometen errores. Nuestros reglamentos dicen que primero tienen que trabajar en la comunidad, hacerse querer, apoyar a trabajos comunales, antes de tener derecho a todo. Ellos quieren todo rápido, no es así”  
(Directorio CIPTA, agosto 2019).

“Hay yernos que vienen de Tumupasa, cuesta que aprendan a convivir con los nativos, tienen que respetar, ganarse la voluntad, demostrarnos su cariño con el trabajo comunal, colaborar (...) Pero a veces no conocen el reglamento y llegan y directamente quieren mandar a la comunidad. Se hacen de los que conocen todo, se creen más hábil”  
(Comunaria de comunidad Tacana San Silvestre).





“Hace poco se ha asentado un empresario aserradero en la comunidad. Tiene permiso del corregidor. Compra madera de la comunidad, de sus parcelitas y con sus maquinarias ayuda en los trabajos. Parece que es de Coroico” (idem).

En las comunidades cercanas a los centros urbanos como San Buenaventura e Ixiamas y alrededor de la carretera, esta mezcla entre población tacana e intercultural es más frecuente que en las comunidades más alejadas.

### ***Mujeres tejedoras de relaciones diferentes***

“Siempre hablamos con ellas, yo he vivido en Tumupasa también, hablamos. A veces cada cual tiene su costumbre, nosotros también tenemos nuestra costumbre, entonces siempre una diferencia hay. No igualamos. **Su forma de vivir es otro. Pero las mismas cosas que nosotros viven ellos.** A veces de la madera también viven ellos”

(Mujer intercultural en comunidad Esmeralda, septiembre 2019).

Las mujeres tacanas e interculturales se encuentran en múltiples espacios de la vida cotidiana en Tumupasa, San Buenaventura e Ixiamas. La educación, el comercio y la salud, son espacios donde dominan las interacciones entre mujeres. Las mujeres interculturales resaltan que aprendieron de las mujeres tacanas como cocinar las comidas del lugar y también aprendieron usar las plantas medicinales para la salud familiar. Esta práctica se ha reforzado en tiempos de la pandemia COVID-19, cuando el acceso a las instancias oficiales de salud fue mínimo. Las mujeres tacanas resaltan que las mujeres interculturales son más organizadas y tienen más ímpetu para el comercio.

En espacios compartidos organizados por Fundación Tierra en 2019 y 2020, entre mujeres tacana e interculturales se reconocieron diferencias, pero también compartieron preocupaciones muy similares sobre los deterioros en el agua, el suelo de la región y el incremento de los incendios.

“En nuestro grupo hemos identificado tres problemas: el chaqueo, la contaminación y la sequía. **En el chaqueo tenemos como causa la economía. Sacamos para solventar a nuestras familias, para eso hacemos chaco.** En el tema productivo, todos los productos que sacamos de nuestros chacos, les traemos aquí al pueblo. Vendemos en los mercados, o donde tengamos un puestito para vender. Pero ¿cuáles son los efectos de los chaqueos? Son los incendios forestales que provocan pérdidas grandes y destruyen la vegetación, matan los animales de bosques también”  
(Dirigente intercultural, Ixiamas, septiembre 2019).

Las mujeres sean indígenas o interculturales, a la vez, comparten experiencias similares en torno a la discriminación, exclusión y violencia que viven en sus organizaciones, comunidades y familias.

“El hombre concejal, como en la casa, si sugieres no te toma en serio. Lo que él sugiere siempre, así tiene que ser. Y si tu insistes que sea como tú quieres, ya es para el enojo nomás. Igualito es en el trabajo. No hay diferencia entre el hogar y el compromiso en la parte legislativa, por lo que he visto”  
(Mujer concejal, Ixiamas, septiembre 2019).





Las organizaciones de mujeres indígenas CIMTA y de las interculturales FESMAI, son consideradas brazos operativos de las organizaciones matrices. Pero en general son excluidas de los procesos de decisión sobre los recursos naturales y espacios de representación política.

Otra vivencia que comparten las mujeres tacanas e interculturales es la migración desde las comunidades a los centros urbanos por la educación de los hijos y la necesidad de ingresos monetarios que implica:

“La comunidad ha cambiado, ahora hay centro de salud (aunque apenas funciona, sin equipamiento está), ahora estamos recibiendo las viviendas sociales. Pero antes había más niños, ahora muchos ya se van a Tumupasa, por recursos económicos, por trabajo. Aquí no hay trabajo y no hay secundaria tampoco. Ya todingas mis compañeras son mamás, se van a trabajar, se van a Tumupasa. Yo nomás sigo aquí”  
(Comunario de comunidad tacana San Silvestre, septiembre 2019).

Las mujeres hacen alusión con mayor énfasis que los varones, a la pérdida de la vida comunitario y lo que significa para ellas:

“Antes la comunidad era más unida, el trabajo era comunitario, todos ayudaron en la sembra y cosecha, ahora cada uno trabaja en su chaco y no te ayudan si no pagas. En las reuniones nomás se une la gente. Yo sí siempre voy a las reuniones, participo en todo, pero algunas mujeres no quieren ir, se quedan en sus casas, tienen vergüenza”  
(idem).



Son estas realidades compartidas que permiten abordar las conflictividades desde otros ángulos, tomando en cuenta la capacidad de las mujeres de tejer entre lo propio y lo ajeno, para domesticarlo y suavizarlo, como ha señalado Silvia Rivera Cusicanqui (2016, págs. 68-69).

Esto no quiere decir que no haya pugnas de poder entre mujeres en el este escenario local.

“Aunque ahora en este año en el consejo somos la mayoría mujeres, pero igualito nos dejamos manipular por los dos varones. Porque las tres mujeres no podemos ser bien unidas. No sé por qué. ¿Será la cultura, será la sangre, será la vestimenta? No lo sé porque entre las tres no nos sinceramos. No hemos roto esa desconfianza. Ya debíamos, pero somos bien delicadas como siempre” (Concejala de Ixiamas, septiembre 2019).

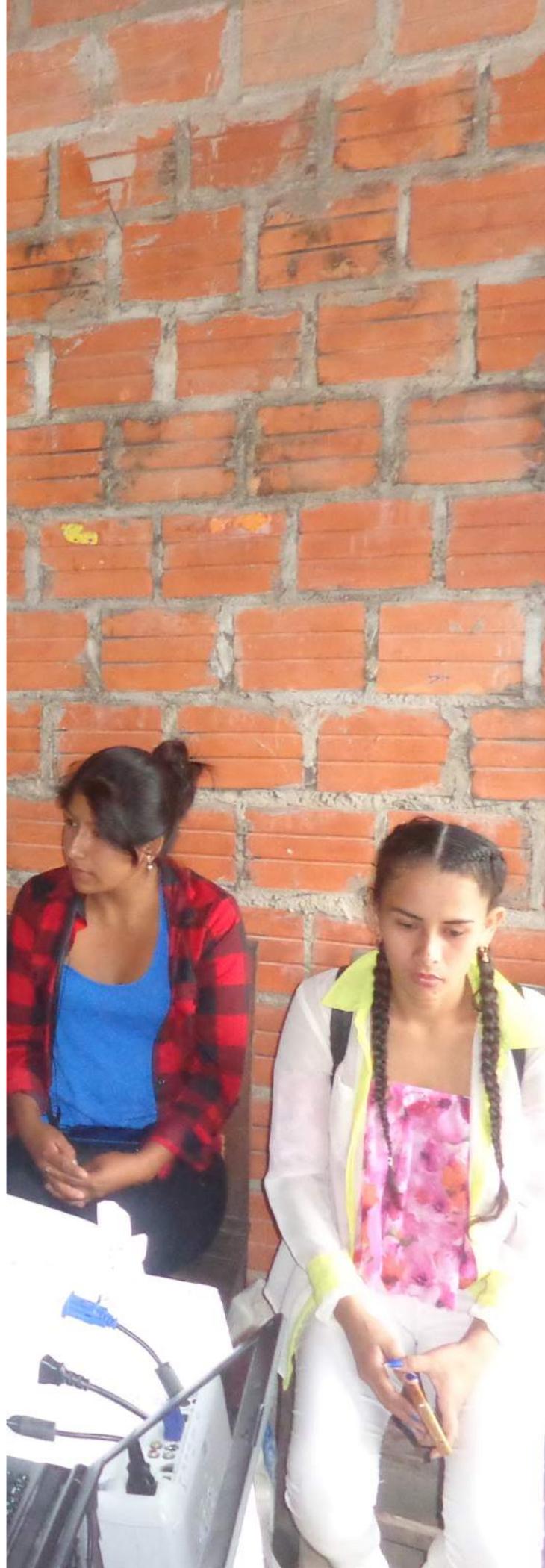
Si se propician las condiciones oportunas, los espacios de intercambio y diálogo entre mujeres tendrían el potencial de convertirse en punto de lanza para agendas multisectoriales que abordan la conflictividad socioambiental en la región desde las convergencias y confluencias.

### **3.2 LAS ASIMETRÍAS DE PODER Y LA EROSIÓN DE LA GESTIÓN TERRITORIAL LOCAL**

Los diferentes escenarios de conflictividad y convivencia entre los sectores se marcan por nuevas relaciones de poder a nivel global, nacional y local. En el ámbito local, las relaciones de poder se configuran en espacios formales y no formales, basándose en recursos diversos.

Uno de estos recursos es el poder político local, organizado en las alcaldías de Ixiamas, San Buenaventura y sus subalcaldías. La representación electoral en estos municipios pasa por partidos políticos, pero en general está marcada por mandatos de las organizaciones orgánicas. En el distrito de Tumupasa, el pueblo Tacana hace respetar su mayoría poblacional a través de la ocupación de la subalcaldía. Como explica el Subcalde, esta es una decisión política y consciente: “La FESPAI tiene influencia política dentro de los subcentrales y las comunidades, pero no tienen un espacio político aquí en Tumupasa. No lo permitiremos, por principio. Yo, como Subcalde soy independiente de CIPTA y FESPAI, pero defendiendo mis raíces” (Entrevista, agosto 2019).

En cuanto al poder social y cultural de CIPTA y FESPAI se pueden identificar varios cambios en el tiempo, ambas organizaciones nacieron en la misma época, en los años 1990, con agendas que vinculaban estrechamente la reivindicación de las identidades de tacanas y colonizadores (luego interculturales) con las demandas para tierra y territorio. En el auge conservacionista que coincidía con las reivindicaciones indígenas y territoriales, las dos organizaciones, pero sobre todo CIPTA se beneficiaron de numerosos proyectos de capacitación en leyes, normas y otras herramientas de gestión territorial. La idea dominante detrás de los proyectos y financiamientos ejecutados por ONG fue que la gobernanza local, en particular de carácter indígena, sería el camino por excelencia a una gestión más sostenible de los recursos naturales. (Wentzel, 2009), (Perrier Bruslé & Gozávez, 2014, págs. 46-47).



La elección de Evo Morales como presidente de Bolivia en 2005 y el cambio de prioridades en la cooperación internacional pusieron fin a este periodo, y cambiaron significativamente las condiciones para esta gobernanza local. A nivel nacional, el conflicto del TIPNIS (2011), significó la ruptura de la alianza entre los indígenas de las tierras bajas unidas en la CIDOB y los sindicatos campesinos de tierras altas, articulados juntos en torno al Pacto de Unidad y del MAS. Como consecuencia de su oposición a la carretera en el TIPNIS, las organizaciones indígenas sufrieron diversos intentos de cooptación y fragmentación en sus estructuras y el gobierno les dejó fuera de muchos proyectos estatales. Además, paralizó la titulación de las TCO indígenas en todo el país.

Esta coyuntura nacional también afectó a CIPTA que, sin los recursos financieros de los actores de la cooperación, sin voluntad política desde el Estado y sin el tejido organizativo multinivel que significaba la CIDOB, sufrió retrocesos en su capacidad de gestión territorial. A pesar de que la organización logró mantener una unidad orgánica relativamente fuerte en comparación con otras organizaciones indígenas de tierras bajas, no pudo evitar visiones diferentes, conflictos e incluso fragmentación interna en cuanto al acceso a y el uso de los recursos naturales.

En cambio, FESPAI como parte de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), forma parte del bloque de organizaciones campesinas que están estrechamente aliadas con el MAS (CSTUCB, Bartolinas Sisas, y CSCIB). Esta alianza se ve plasmada en el acceso a múltiples espacios de incidencia con el poder central a través de los assembleístas, ministerios y hasta la misma presidencia del Estado. En los últimos años FESPAI, logró gestionar varios proyectos e inversiones a través de estas alianzas estrechas con el partido de gobierno, como la construcción de escuelas y mercados, incluso más allá de lo que podían conseguir las alcaldías y subalcaldías.





Desde el sector intercultural, mencionan con frecuencia los aportes que han logrado para toda la población, como una herramienta para reforzar su legitimidad y poder local.

“Por ejemplo, aquí el ejecutivo (de la Fespai) don Ernesto hizo construir un colegio en Tumupasa. Con la visión que podamos crecer, porque tanto ellos como nosotros somos aquí del lugar. No había una discriminación de decir “ese colegio nos da el gobierno y lo hagamos aquí como interculturales”, no, se lo ha llevado a Tumupasa porque era céntrico” (Entrevista dirigente intercultural, septiembre 2019).

Sin embargo, los “favores” del MAS no sólo han ido a la FESPAI. Las organizaciones de nuevas colonizadoras, como la Túpac Katari, también tienen un acceso directo a los espacios de decisión estatal, que lo usan sobre todo para poder acceder a títulos comunales de tierra. A pesar de que para la FESPAI es complicado rechazar completamente la llegada de nuevas comunidades y así arriesgar su alianza con el MAS, existe malestar sobre la atención preferencial que reciben los nuevos colonizadores.

“Uno es que el gobierno nos ha dado ganados, pero para poder seguir ampliando las 50 hectáreas ya no da. La preocupación es que la otra organización, como los de la ciudad de la Paz, ¿cómo les dicen? La Túpac. Es casi como si no tuvieron en cuenta a esta organización que es de aquí, pero siempre en el discurso del presidente dice: primero los del lugar, pero ¿Quiénes son los del lugar? Son nuestros hijos” (Entrevista dirigente Central Marcelo Quiroga de Santa Cruz, FESPAI, septiembre 2019).

En los años 2019 y 2020 se presentaron algunos conflictos internos entre las centrales de la FESPAI en torno al liderazgo y la representatividad, replicando la gran conflictividad política a nivel nacional en estos años.

En el caso de la TCO Tacana I se ha creado un sistema elaborado de gestión territorial, el CIPTA es quien representa a las asociaciones basadas en el manejo de los recursos naturales ante el Estado, también reglamenta y fiscaliza la distribución de los beneficios. CIPTA cuenta con un sistema de organización, por usos y costumbres a través de corregidores comunales, que se reúnen en la Asamblea de Corregidores. Esta autoridad cumple diversos roles en la comunidad, desde la interlocución con autores estatales, la resolución de conflictos, hasta el ejercicio del control sobre los recursos. Sin embargo, también funcionan otras redes de organización, como las OTB (Organizaciones Territoriales de Base) y las organizaciones ligadas a la educación y la salud que interactúan con el nivel municipal. Las formas que se organizan y jerarquizan los roles y beneficios de las diferentes autoridades, varían entre comunidades y en el tiempo (Lehm, 2012).

En el escenario política actual, a pesar de la ubicación periférica de la provincia, los actores locales dependen cada vez más de estrategias de incidencia en La Paz para poder influir en las decisiones con relación a la tierra, el bosque y los otros recursos naturales. El avance de las carreteras, el proyecto de la hidroeléctrica, el cumplimiento de las demandas territoriales, la ampliación de las áreas de producción de EASBA, son ejemplos de temas que son difíciles de influir desde el nivel local. Se percibe un debilitamiento de peso relativo en el nivel local de decisión y participación en la gestión territorial. Esta realidad, hace más difícil para los directorios de las organizaciones CIPTA y FESPAI, mostrar logros concretos a sus bases.





Pero paralelamente, otras formas de organización y afiliación están cobrando más importancia. Estas surgen en torno a intereses muy particulares, como la titulación de comunidades para conseguir planes de manejo forestal, o las asociaciones para la producción de caña. Un ejemplo de esta tendencia es que EASBA negocia directamente con productores individuales o en algunos casos con asociaciones comunales de caña y así relega a las organizaciones locales como CIPTA y FESPAI a un lugar marginal en la nueva configuración territorial en torno a la caña. Las familias indígenas e interculturales terminan buscando otras formas de intermediación que pueden resolver sus necesidades inmediatas.

Es desde esta lógica que van tomando un rol más notable organizaciones terceras como la Túpac Katari. Éstas no sólo atraen a actores nuevos que quieren aprovechar los recursos madereros de la zona, también logran involucrar a los habitantes actuales para involucrarse con esas prácticas. Incluso dentro de la población Tacana, el interés de generar ingresos por la madera, empieza a erosionar el propósito de la titulación en territorios colectivos en forma de TCO. Es significativo este testimonio de una mujer tacana que vive en el pueblo de Tumupasa:

“Nosotros no estamos afiliados a CIPTA, ahorita estamos con la Túpac Katari. Los de aquí se han unido a la Túpac Katari, los del pueblo (..) Porque el CIPTA daba tierra, pero no daba sus papeles al día. Y era como si no tuvieron tierra. Así he entendido y entonces por eso ahora van a las reuniones y solo hablan de la Túpac Katari y no de CIPTA. La mayor parte allá en mi comunidad de eso no más hablan, cada vez hay reunión y vamos, llegan los dirigentes de la Túpac”

¿Túpac les va a dar tierra, o ya les ha dado?

“O sea, es para que nos ayudan a tener papeles, trámites de la comunidad que nos estamos formando allí (...). Es de allí 3 horas adentro, todavía en el monte. Son 72 familias, son familias del pueblo que no tienen tierra, los de aquí nomas, no hay de otro lado. Los de CIPTA no vienen a esas reuniones”

“La mayoría que están formando sus comunidades están con FESPAI, con la Túpac, están formándose y no con el CIPTA, les están haciendo a un lado”

“Las nuevas comunidades no son para vivir, ellos van a que lo venden para la madera nomas, sacar la madera y así lo dejan. Años atrás el CIPTA les ha dado tierra, tienen y siguen peleando por tierra. Quieren más y sacan la madera y lo dejan. La mayoría de aquí tiene tierra, pero siguen buscando para sacar la madera”

(Mujer tacana de Tumupasa, entrevista septiembre 2019).

Este afán de titular tierras haciendo uso de conexiones políticas de otras organizaciones, como la Túpac Katari, privilegiando intereses particulares económicas sobre el interés colectivo de las comunidades indígenas, se constituye en una amenaza considerable para las formas organizativas tradicionales y la posibilidad de defender un modelo de uso y manejo colectivo del territorio y sus recursos.

En resumen, el poder adquirido por CIPTA y FESPAI con la titulación de tierras no es estático. A pesar de ser dueños de la tierra a través de las TCO y los títulos comunales, su poder efectivo de decisión es cada vez más reducido, y existen retrocesos en las herramientas de autogestión y autodeterminación.





En este contexto es un desafío seguir aglutinando a las organizaciones alrededor de la identidad cultural y las visiones de desarrollo.

### 3.3 NUEVAS GENERACIONES, NUEVOS DESAFÍOS

Históricamente los procesos de auto-denominación indígena y campesina han ido a la mano con reivindicaciones territoriales complejas y marcadas por relaciones de poder desiguales y conflictivas, no sólo entre sectores, pero también dentro de ellos (Herrera 2005: 33-34).

En la actualidad ambos sectores sufren fuertes presiones internas de sus nuevas generaciones. La aparición de nuevos modelos y prácticas del uso de la tierra genera cambios en las perspectivas de los jóvenes tacanas.

“Mira, nuestra gran preocupación de nosotros es que caigamos en lo que han caído varias organizaciones, en esa división por las simpatías políticas o por los intereses en función al gobierno de turno (...) Ahora ¿qué es lo que surge allí? **Surge una gran desesperación y surge una presión fuerte hacia la dirigencia desde el grupo sectorial de jóvenes, nuevas generaciones, que no tienen tierra.** Frente a eso hemos resguardado un área justamente con la proyección a esa juventud y tienen que ser ahora justamente ellos un actor importante en la defensa de estos territorios (Dirigente CIPTA, noviembre 2019).

Las nuevas generaciones interculturales en la región tienen el ímpetu de seguir avanzando hacia nuevos lugares porque las 50 hectáreas tituladas para sus padres ya no alcanzan para todos los hijos. Buscan nuevas tierras en la región, pero también una gran parte de este sector sigue migrando detrás de oportunidades laborales en otros lugares del país.

Para insertarse en las nuevas opciones productivas y laborales en la región, los y las jóvenes buscan afiliarse a asociaciones productivos, sindicatos, e incluso nuevas comunidades. En algunas ocasiones estas afiliaciones chocan con los intereses de las organizaciones CIPTA y FESPAI y generan situaciones paradójicas. Por ejemplo, cuando hay jóvenes tacanas que quieren insertarse en la producción de la caña usando tierras de la TCO o cuando hay familias interculturales que prefieren vender o alquilar sus tierras, alejándose del modelo de agricultura familiar, pero luego sí participan en la demanda para nuevas tierras para sus hijos. También cuando la población local lamenta la contaminación causada por la minería de oro, pero también se inserta en esta actividad como opción de generar ingresos.

Los conflictos que surgen de estos choques son más invisibles, ubicados en el ámbito interno de las comunidades y organizaciones, no son tan fáciles de colocar en una u otra categoría. Es en estas tensiones donde se ve reflejado el real avance de un modelo extractivista, capitalista, en el seno de la población indígena e intercultural.

Algunos autores han señalado que las organizaciones indígenas en tierras bajas han pasado de ser defensores de derechos a propietarios de tierra y ejecutores de proyectos; además de ser entidades de gestión y administración de recursos en un complejo sistema paralelo al (deficiente) sistema estatal (Lehm, 2016b), (Wentzel, 2009).





En el caso de CIPTA, el Plan de Gestión Territorial Indígena 2015-2025, plantea horizontes y propuestas interesantes, aunque no puede ocultar que los fundamentos culturales que promueven una visión colectiva e integral del territorio, donde el cuidado y el uso sostenible de sus recursos garantizan la sobrevivencia del pueblo, están bajo mucha presión. Y parte de estas presiones vienen de las propias familias tacanas. Queda pendiente un diálogo interno sincero sobre las reales estrategias de vida de la población y su significado para el futuro de la gestión colectiva del territorio. Sin el cuidado de los recursos naturales del territorio, en especial el agua, es difícil imaginar la sobrevivencia de la identidad indígena, pero la identidad tacana tampoco puede reducirse solamente a vivir de emprendimientos comunitarios con apoyo de la cooperación internacional.

En el sector intercultural puede resultar aún más complicado mantener la reivindicación territorial sin tener una reflexión autocrítica sobre el modelo de la agricultura familiar en las comunidades. Si no se implementan medidas estructurales para mejorar la sostenibilidad de las formas de hacer agricultura y ganadería, el inevitable deterioro de los recursos naturales hará inviable que sus hijos se dediquen al mismo rubro. Así, las demandas de tierras para las nuevas generaciones perderían legitimidad.

Sin embargo, en los discursos oficiales, los dirigentes de las organizaciones no reconocen este nuevo contexto y siguen utilizando los mismos argumentos que cuando fueron creadas las agendas originales de reivindicación: los indígenas como cuidadores de la madre tierra y los interculturales como pobres minifundistas que traerán el progreso a la región amazónica. Estas lecturas binarias y simplistas no generan respuestas reales para la complejidad en que viven actualmente sus bases.

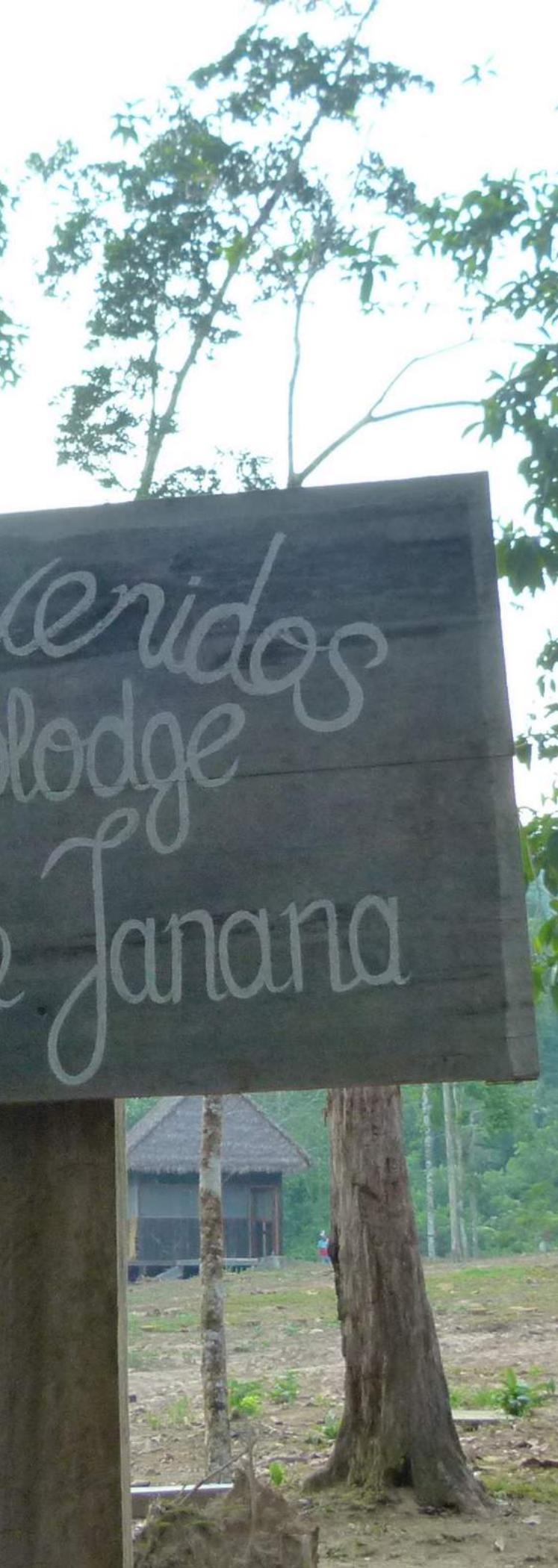
Mantener estas agendas más simbólicas que concretas contribuye a que las organizaciones sigan reduciendo su rol a gestionar beneficios económicos y obras que bailen a la música de una agenda de desarrollo impulsado desde el Estado y las empresas.

En todo eso es necesario revisar minucioso dónde las fronteras entre uno y otro sector se han ido borrando gradualmente y cómo los nuevos modelos de uso de la tierra y los recursos están dejando su marca, no sólo en el paisaje, pero también en las formas de pensar de sus habitantes.

Desde la convivencia cotidiana entre ambos sectores, existen posibilidades para abordar los desafíos comunes en torno a los recursos naturales. Las comunidades interculturales que ya llevan varias décadas en la provincia Abel Iturralde, han generado una relación propia con la tierra que ocupan y sus recursos naturales. Ellos enfatizan que con el tiempo han aprendido a gestionar estos recursos de una forma más sostenible. Aunque esta afirmación a menudo es contestada por el sector tacana, que les critica por las grandes cantidades de desmonte, también hay momentos en que se ha logrado diálogos al respecto:

“Con interculturales hay acuerdos de resguardo territorial, pero es importante fortalecer el dialogo con ellos, sobre las formas de uso del espacio. Queremos que entiendan con profundidad la gestión territorial. Ellos ya sienten los efectos también en los recursos hídricos. Hay comunidades que tienen problemas con su acceso a agua y fueron a sacar agua de comunidades tacanas. Ha habido dialogo y ahora ya están pidiendo permiso antes de sacar agua. Ellos llegaron con otras ideas, pero poco a poco van entendiendo la importancia del bosque. Eso ha llevado a poder hacer acuerdos”  
(Directorio CIPTA, agosto 2019).





Es allí, a partir de las situaciones concretas e inmediatas, donde se vislumbran las pistas más fértiles y propias para nuevos modelos locales de gestión territorial e incluso diálogo intercultural. La sostenibilidad de estas pistas no sólo radicará en el cuidado de los recursos, sino sobre todo en la autonomía de los sujetos locales frente a un contexto que les presiona cada vez más hacia la dependencia.



# 4 CONCLUSIONES



En estas últimas páginas se presentan las conclusiones principales sobre los temas abordados en este estudio. Como se indica al principio, el objetivo fue aportar con una lectura que trasciende el binarismo de la conflictividad socioambiental en el Norte de La Paz, haciendo visible la complejidad y dinamicidad de las tendencias, transiciones, presiones y contradicciones actuales.

La primera pregunta planteada para orientar el estudio fue:

*¿Cómo influyen las transformaciones territoriales y agrarias actuales, impulsadas, entre otras, por el avance del modelo extractivista, en la conflictividad socioambiental y viceversa?*

Para responder esta pregunta se han señalado las siguientes tendencias:

1. La provincia Abel Iturralde **está viviendo los siguientes cambios principales** en cuanto a las estructuras territoriales y modelos productivos:
  - a. Un cambio intenso en el uso de suelo por la rápida ampliación de la frontera agrícola y los desmontes. Se transita de una producción agrícola familiar combinada con extracción de madera a modelos productivos de mayor escala, expresado principalmente en dos proyectos económicos.

Por un lado, la instalación de la empresa azucarera (EASBA) significa la introducción de un modelo de agricultura monoprodutiva en el seno de las comunidades interculturales y tacanas. Cada vez hay más desmonte de áreas forestales con la expectativa de sembrar caña de azúcar, a pesar de que su rentabilidad económica, tanto a nivel familiar como a nivel de la empresa, todavía no se perfila con mucha claridad. Por otro lado, el deterioro de las condiciones para la agricultura tradicional está llevando a que las familias, sobre todo interculturales, opten por ganadería intensiva, que también implica más desmontes. En ambos casos las comunidades se alejan de una agricultura familiar y aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque, conduciendo a la sobreexplotación de sus recursos naturales sin tomar en consideración los impactos ambientales ni sociales.

b. A la vez, ocurren cambios estructurales en torno a la tenencia y uso de la tierra dentro de las comunidades rurales, donde aparente el uso supedita los intereses de la tenencia formal. Emergen comunidades tituladas que no cumplen con el objetivo de ser habitadas de forma tradicional, sirviendo principalmente para la extracción de madera, la agricultura de monocultivos y/o ganadería o en el peor de los casos la compra y venta a terceros. Esta percepción utilitaria de la tierra juega un rol significativo en las disputas por las tierras fiscales en la región, en particular el área ex PROINSA.

En la medida que esta práctica se convierte cada vez más en el patrón dominante de uso, se generará un retroceso del avance territorial logrado con la titulación de tierras indígenas y campesinas en las décadas anteriores, porque se tergiversan las motivaciones iniciales de la lucha por la tierra.





- c. Estos cambios en las actividades productivas significan también cambios en la dinámica agrícola. Las familias que trabajan con EASBA, se insertan en el modelo de agricultura por contrato y se someten a una relación de endeudamiento y dependencia de un agente externo, que además es funcional a intereses del mercado y políticas estatales.
- d. Por último, la ampliación de la frontera agrícola atrae a nuevos capitales privados a la región en búsqueda de compra o alquiler de tierras agrarias para emprendimientos privados como la caña o la ganadería. De este modo, se generará un complejo panorama en el que los pequeños agricultores “amansan” sus tierras, para que poco después pasen a manos de los grandes propietarios individuales –no siempre vía compra– y sean utilizadas para criar ganado o simplemente como reserva de valor, o sea un escenario de despojo y decampesinización del Norte de La Paz.
2. Todo este conjunto de cambios a nivel estructural influye en las características de **la conflictividad socioambiental** en las siguientes maneras:
- a. La conflictividad territorial y socioambiental transita desde conflictos “tradicionales” por acceso a tierra y recursos, a conflictos nuevos causados por los efectos sociales y ambientales de los actuales modelos de explotación de recursos. El espiral de deterioro ambiental se constituye en un catalizador del descontento social en corto y mediano plazo.
- b. En este escenario de conflictividad sobre la tierra y los recursos naturales, el Estado Boliviano no sienta las bases para la gestión de los conflictos. Las tierras fiscales figuran como uno de los recursos más cotizados en este escenario, sin que haya una proyección clara sobre su repartición estratégica. La escasa transparencia sobre proyectos estatales es también un impedimento para la planificación territorial participativa en la región.

- c. Al omitir la implementación de procesos de Consulta Previa y de participación ciudadana, el Estado se convierte en actor y cómplice de las vulneraciones de derechos. Aunque las inversiones entran de la mano de proyectos estatales bolivianos, las diversas experiencias compartidas en el estudio muestran que no se ejerce un contrapeso con mecanismos de fiscalización y de responsabilidad sobre estas inversiones de capitales. Los reclamos de la población local quedan sin respuesta, generando sensaciones de abandono e incertidumbre.
- d. A la vez, la inserción casi paralela de los actores tacanas e interculturales en nuevos modelos económicos y en particular en las actividades que generan impacto en su entorno, hace más complejo “gestionar” la conflictividad que surge como consecuencia. Las fronteras entre “causantes” y “afectados” se vuelven más híbridas cuando en los

mismos sectores pueden convivir ambos. El chaqueo, la minería de oro y el cultivo de caña son ejemplos de actividades realizadas por actores locales que causan afectación en las condiciones de suelo, agua y aire de las propias comunidades y por lo tanto generan conflictos dentro y entre comunidades.

- e. Los diversos escenarios de irregularidad en que se desarrollan las pugnas por los accesos a los recursos naturales, como el pirateo de madera, la minería de oro y los asentamientos en el predio ex PROINSA, están generando situaciones de alta potencialidad explosiva en lo inmediato. Los sectores locales, marcados por relaciones desiguales de poder, no están buscando la violencia, pero el estudio ha evidenciado que con la marcada ausencia estatal frente a estos problemas, los incidentes de desalojos entre sectores pueden volver a ocurrir e incluso obtener un carácter más violento.





f. Finalmente, en estos escenarios caóticos de pugnas entre diversos intereses económicos en torno a los recursos amazónicos, se invisibilizan las voces que se preocupan por los impactos de las actividades extractivistas sobre el agua, los suelos y la salud de las comunidades indígenas y campesinas. Si bien la deforestación en la provincia Abel Iturralde tiene un avance todavía más limitado que en otras regiones del país, su impacto es cada vez más notable en la vida cotidiana. De hecho, varias comunidades están enfrentando la sedimentación, contaminación y desaparición de ríos y arroyos, lo que afecta considerablemente a sus condiciones alimentarias y económicas. El deterioro de las fuentes del agua y de los suelos genera mayor intensidad de inundaciones, sequías e incendios, afectando la vida comunitaria y la viabilidad de los modelos productivos.

La segunda pregunta que ha guiado este estudio ha permitido mirar con más detalle a las transiciones e interacciones culturales que ocurren en los escenarios locales:

*¿Cómo cambian las relaciones interculturales de poder, identidad y convivencia en el marco de esta conflictividad socioambiental?*

Se pueden señalar los siguientes hallazgos principales al respecto:

3. El pueblo Tacana y el sector intercultural mantienen contradicciones fuertes entre ellos, pero la convivencia de décadas y la presión constante de actores externos, los lleva a perfilarse hacia afuera cada vez más como aliados. En el escenario cotidiano, algunas fronteras identitarias se van borrando entre ellos, mientras otras visiones contrarias se refuerzan más. No se puede hablar de un diálogo intercultural en condiciones iguales de poder, sino de una interacción caótica con acercamientos y alejamientos impulsados generalmente por presiones externas.

4. Las visiones de desarrollo se están transformando debido a varias décadas de hibridación entre los elementos culturales “tradicionales” tacanas e interculturales y la actual inmersión de nuevos valores y prácticas de actores externos. Las nuevas generaciones buscan insertarse en las actividades productivas y extractivas que se imponen simultánea y aceleradamente sobre la tierra y el territorio. Este escenario caótico de valores tradicionales, nuevas esperanzas, ilusiones y desilusiones, está marcado por asimetrías de poder.
5. Las asimetrías de poder cambian constantemente en este escenario, y se manifiestan en escenarios visibles e invisibles. El escenario político nacional, marcado en los últimos 15 años por el poder partidario del MAS, influye palpablemente en la capacidad de gestión de los actores locales. Se puede afirmar que la provincia Abel Iturralde se encuentra en un lugar cada

vez menos periférico con relación al centro del poder político en la ciudad de La Paz. En este escenario, el movimiento indígena amazónico ha perdido influencia, mientras que el sector intercultural ha ido ganando un lugar central en la ejecución estatal. A la vez, a nivel local el pueblo Tacana maneja otros recursos de poder, como las subalcaldías y la educación para seguir afirmando su poder cultural en esta región.

6. En este escenario, las herramientas de gestión local territorial que fueron impulsadas en décadas anteriores, como los planes de vida, están perdiendo cada vez más poder real. Un ejemplo de esta situación es la gran dificultad que tienen las organizaciones indígenas para ejercer un control territorial real sobre las TCO. Es importante notar que esta reducción del poder local afecta negativamente las posibilidades de gestionar o transformar los conflictos en espacios “tradicionales” de diálogo entre actores locales.



## REFLEXIONES FINALES

No cabe duda de que la región del Norte de La Paz está viviendo tiempos de transformaciones estructurales en un contexto de múltiples crisis que se imponen sobre las regiones amazónicas. Las transformaciones que vive esta región son emblemáticas para visualizar las políticas de desarrollo económico dominantes en Bolivia, en las cuales el avance descontrolado del modelo extractivista no sólo anula la gestión territorial indígena construida en décadas, sino también genera limitaciones fundamentales para el sector campesino intercultural, sometándolo cada vez más a cadenas de dependencia y de poder empresarial. Las transiciones que se han descrito en este documento no cuentan con un final definido, sino que se convierten en una llamada a la reflexión con miradas a la acción.

Las tendencias señaladas en este estudio convocan a repensar los enfoques con que se abordaron los escenarios de despojo en la región amazónica de Bolivia. En vez de reducir la comprensión de la conflictividad a pugnas binarias entre identidades estáticas ligadas al acceso a la tierra y el territorio, es necesario ir deshilando las interacciones complejas entre intereses externos e internos por la extracción de los recursos naturales. Estas interacciones están generando un panorama en que varios elementos identitarios se diluyen y la convivencia se resuelve a través de frágiles pactos negociados sobre intereses pragmáticos. Sólo reconociendo y nombrando esta complejidad será posible reconstruir agendas colectivas con legitimidad hacia adentro y afuera.

La gran responsabilidad de asegurar un futuro sostenible para esta región no puede recaer solamente en los habitantes de las provincias amazónicas; se necesita un Estado que cumpla un rol más protagónico, a través de medidas nacionales y locales de planificación, monitoreo y fiscalización sobre los recursos naturales, que superan los intereses inmediatistas y electorales.





A la vez, para evitar caer en una espiral descendiente de apropiación y destrucción de las fuentes de vida, se vuelve cada vez más urgente explorar nuevas herramientas propias de gestión territorial entre múltiples actores, basados en escenarios de diálogo y concertación sobre los modelos de desarrollo. En estos espacios es fundamental darle una presencia más estratégica a las mujeres y los jóvenes, y superar ciertas limitaciones en las perspectivas y herramientas de incidencia y gestión en la tradicional dirigencia masculina.

A la vez, las investigaciones sobre quién gana y pierde en la nueva agricultura extractivista en esta zona, son incipientes. Los impactos ambientales ya son evidentes, así como las afectaciones a los recursos hídricos, pero hay otras afectaciones aun invisibles. Los impactos se cubren con ganancias económicas a corto plazo que pueden tener efectos negativos en el mediano plazo sobre las condiciones de los medios de vida de las comunidades interculturales y tacanas. Son temas que se recomienda dar seguimiento en futuras investigaciones.

Si bien se ha señalado la profundización de la vulnerabilidad de los actores locales, los momentos de crisis también pueden convertirse en el punto de partida para nuevos modelos de gestión de la vida en lugares de gran importancia para el país como es la provincia Abel Iturralde.

Superando conflictividades internas y redibujando horizontes comunes, son justamente los sectores indígenas e interculturales los protagonistas indicados para volver a ejercer su capacidad de control territorial y construir el futuro de las tierras que han disputado por décadas.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agencia de Noticias Fides (ANF). (3 de septiembre de 2018). Ex viceministro de la Coca conforma asociación multiactiva para plantar caña para EASBA. Obtenido de Noticias Fides: <https://www.noticiasfides.com/economia/ex-viceministro-de-coca-conforma-asociacion-para-plantar-cana-para-el-ingenio-san-buenaventura-390917>
- Aguilar, M. (17 de enero de 2016). Vía para integrar el norte paceño busca potenciar la producción. Obtenido de Pagina Siete: <https://www.paginasiete.bo/economia/2016/1/17/para-integrar-norte-paceno-busca-potenciar-produccion-83648.html>
- Benavides, J., Lobo, R., Alarcon, A., Toledo, M., Ascarrunz, N., & Van Dijk, K. (2014). El manejo forestal comunitario antes los retos del mercado en Santa Cruz , Bolivia. Santa Cruz de la Sierra: Trobenbos International (TBI) .
- Camara Boliviana de Hidrocarburos y Energía. (29 de octubre de 2018). Asfaltado vial Ixiamas-Chivé Ya tiene licencia ambiental sin saber diseño del proyecto. Obtenido de CBHE: <http://www.cbhe.org.bo/index.php/noticias/32545-asfaltado-vial-ixiamas-chive-ya-tiene-licencia-ambiental-sin-saber-diseno-del-proyecto>
- Cano, W., van de Rijt, A., De Jong, W., & Pacheco, P. (2015). Aprovechamiento y mercados de la madera en el norte amazónico de Bolivia. Indonesa: CIFOR.
- CIPTA y CIMTA. (2014). Plan de Gestión Territorial Indígena del Pueblo Tacana. 2015-2025.
- Del Carpio Carreño, M., Castro Mojica, M. B., & Zeballos Puccherelli, M. C. (2017). Incidencia de los Factores Religioso-Espirituales en Proyectos de Desarrollo. Experiencia de trabajo con Soluciones Prácticas. La Paz: ISEAT.
- EASBA. (2021). Rendición Pública de Cuentas Final Gestión 2020.
- FESPAI. (2004). PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE LA FEDERACIÓN SINDICAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA PROVINCIA ABEL ITURRALDE (FESPAI).
- Fides . (15 de 07 de 2018). Agencia de Noticias Fides. Obtenido de <https://www.radiofides.com/es/2018/07/15/garcia-linera-pide-defender-el-desarrollo-de-la-paz/>
- Fundación Solón. (julio de 2018). Infografía Bala Chepete . Obtenido de Fundación Solon : <https://funsolon.files.wordpress.com/2018/07/infografia-bala-chepete-013.jpg>
- Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life . New York: The Overlook Press.

- Guzmán Narváez, N. (2018). Capitalismo Chino en la Selva, Los cuerpos desechables detrás de tres obras de infraestructura en Bolivia. . La Paz : Fobomade.
- Herrera, E. (2005). La nueva legislación agraria boliviana y la construcción de lo tacana en el norte amazónico . En L. y. Lopes, Movimientos Indígenas y Estado en Bolivia (págs. 17-52). La Paz: PROEIB/CENDA/PLURAL EDITORES .
- INRA- Instituto Nacional de Reforma Agraria y Viceministerio se Tierras. (2020). Presentación de Estado de solicitudes de dotación de comunidades dentro el área de la exconcesión forestal PROINSA. (documento inédito).
- Kopp, A. J. (2015). Las colonias menonitas en Bolivia: antecedentes, asentamientos y propuestas para un diálogo. La Paz: TIERRA.
- Krings, L. (2014). Entre conservación y desarrollo: cacaoteros asumen su rol. En Laetitia Perrier Bruslé & Bertha Gozávez, El Norte La Paz en la encrucijada de la integración. Juegos de actores y de escala en un margen boliviano. (págs. 169-185). La Paz: idh / dipgis / umsa / ird.
- Laats, H. J., Inturias, M. L., & Clemente, C. (2012). Megaobra en Madidi y Pilon Lajas. Hacia una transformación de los conflictos. . La Paz: PIEB.
- Lehm, Z. (2010). LOS TAKANAS: EL ACCESO A LA TIERRA Y LOS RECURSOS NATURALES (1950-2003). La Paz: WCS.
- Lehm, Z. (2012). Los takanas: representaciones de los sistemas de organización socio-política (1986-2010). En D. & Villar, Las tierras bajas de Bolivia: miradas históricas y antropológicas (págs. 177-200). Santa Cruz de la Sierra: El País .
- Lehm, Z. (2016). Demarcación, control y vigilancia de la TCO Tacana I. La Paz : Wildlife Conservation Society (WCS) y Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA).
- Lehm, Z. (2016b). Historia del Gobierno en la Región Tacana. La Paz: Wildlife Conservation Society (WCS) y Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA).
- Luna Acavedo, I. (6 de octubre de 2019). Alerta indígena por Ixiamas-Chivé. Obtenido de El Dia: [https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id\\_articulo=288784](https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=288784)
- Mc Kay, B. M. (2018). Extractivismo agrario. Dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia. La Paz: Tierra.
- Mendieta Parada, P. (2014). De la quina a la goma: la compleja incorporación de la provincia Caupolicán al mercado mundial (siglo xix). En L. Perrie Bruslé, & B. Gozávez, El Norte La Paz en la encrucijada de la integración Juegos de actores y de escala en un margen boliviano (págs. 57-79). La Paz: IDH – DIPGIS – UMSA IRD.
- Mercado, J. (2019). Tacanas se convierten en mineros para detener avance chino en el rio Madre de Dios,. Obtenido de ANF: <https://agenciadenoticiasfides.shorthandstories.com/Tacanas-se-convierten-en-mineros-para-detener-avance-chino-en-el-Madre-de-Dios/index.html>

- Molina Carpio, S. (2014). El Puente Rurrenabaque - Sanbuenaventura, La Responsabilidad del BID y del Estado. La Paz: FOBOMADE .
- Perrier Bruslé, L., & Gozávez, B. (2014). El Norte de La Paz en la encrucijada de la integración. Juegos de actores y de escala en un margen boliviano. La Paz: idh / dipgis / umsa / ird.
- Porto-Gonzalves, C. W. (2018). Amazonía: encrucijada civilizadora. Tensiones territoriales en curso. La Paz : CIDES\_UMSA.
- Ribera Arismendi, M. O. (2011). PRIMERA APROXIMACION A UN INVENTARIO DE UNIDADES ECOREGIONALES AMENAZADAS EN BOLIVIA. La Paz : Lidema .
- Rivera Cusicanqui, S. (2016). Violencia e interculturalidad. Paradojas de la etnicidad en la Bolivia de hoy. Revista Telar, 49-70.
- Robison, D. (2014). La imposición del puente de Rurrenabaque en la Amazonía boliviana. Petropress, 14-21.
- Robison, D. (2021). Agroindustria y Amazonía boliviana. El caso de la Empresa Azucarera San Buenaventura. La Paz: CEDLA.
- Rodrigues, I., Castañeda, C. S., Inturias, M. L., & Robledo, J. (2015). Justicia Ambiental, Interculturalidad y Transformación de Conflictos Socio-Ambientales. En I. Rodrigues, C. S. Castañeda, & V. Aguilar Castro, Transformación de Conflictos Socio Ambientales e Interculturalidad. Explorando las Interconexiones (págs. 12-23). Mérida: Grupo Confluencias.
- Rodrigues, I., Castañeda, C. S., Inturias, M. L., & Robledo, J. (2015). Los Conflictos Socio Ambientales y su Transformación. En I. Rodrigues, Castañeda, & V. Aguilar Castro, Transformación de Conflictos Socio Ambientales e Interculturalidad. Explorando las Interconexiones (págs. 28-62). Mérida: Grupo Confluencias.
- Salman, T., Theije, M. d., & Vélez-Torres, I. (2018). Structures, actors, and interactions in the analysis of natural resource conflicts. Ecology and Society.
- Sanchez, C. (15 de julio de 2018). García Linera llama “sinvergüenzas” a quienes critican el ingenio azucarero de San Buenaventura. Obtenido de Oxigeno.bo: <http://www.oxigeno.bo/pol%C3%ADtica/30993>
- Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. (2015). LAS RUTAS DEL ORO ILEGAL. ESTUDIOS DE CASO EN CINCO PAÍSES . LIMA: SPDA.
- The World Bank . (2011). PROJECT APPRAISAL DOCUMENT ON A PROPOSED CREDIT TO THE PLURINATIONAL STATE OF BOLIVIA FOR THE NATIONAL ROADS AND AIRPORT INFRASTRUCTURE PROJECT . Sustainable Development Department.
- TIERRA. (2019). “CONSULTA PREVIA” A LAS COMUNIDADES TACANAS. La Paz: TIERRA.
- Tschirhart, C. (2011). La contaminación humana por mercurio: un sistema de determinantes socioespaciales a orillas del río Beni (Amazonía boliviana). Bulletin de l'Institut français d'études andines, 561-589.

- Vargas Rojas, R. (2009). Mapeo digital del suelo y su evaluación con fines de producción de caña de azúcar en los municipios de Ixiamas y San Buenaventura. La Paz : CFS y CI.
- Viceministerio de Comunicación. (24 de 5 de 2016). Obtenido de Gobierno beneficia con mil vaquillas a pobladores del Norte paceño : <https://www.comunicacion.gob.bo/?q=20160524/21328>
- Walsch, C. (2012). Interculturalidad y (de)colonialidad: Perspectivas críticas y políticas . *Visão Global*, Joaçaba, 61-74.
- Wentzel, S. (2009). From “invisible natives” to an “irruption of indigenous identity”? Two decades of change among the Tacana in the northern Bolivian Amazon.





[www.ftierra.org](http://www.ftierra.org)

cooperación  
alemana  
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implementada por:

**giz** **zfd** Ziviler Friedensdienst  
Servicio Civil para la Paz